

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA
UNAN-LEÓN

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES



MONOGRAFÍA PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIADO
EN DERECHO

TEMA:

HUMANIZACIÓN DE PENAS COMO UNA FORMA DE
REINSERCIÓN DEL INDIVIDUO A LA SOCIEDAD

TUTOR:

DR. LUIS MANUEL HERNÁNDEZ LEÓN.

AUTORES:

- BR. MEDINA GÓMEZ CARLOS JOSÉ.
- BR. MOREIRA IBARRA MARLON ALBERTO.
- BR. PEREIRA AVILEZ FAUSTO FRANCISCO.

LEÓN, NICARAGUA 2008

TEMA:

HUMANIZACIÓN DE PENAS COMO UNA FORMA DE
REINSERCIÓN DEL INDIVIDUO A LA SOCIEDAD

“DECIDME COMO SON VUESTRAS LEYES PENALES Y OS
DIRÉ EL TIPO DE ESTADO QUE TENÉIS”

(SEBASTIÁN SOLER, PENALISTA ARGENTINO)

DEDICATORIA

Le dedico a Dios por darme estos momentos inolvidables, con mi familia, maestros y amigos, porque con fe se haya la verdad del saber y la certeza de lo que se espera.

A mis Padres que me dieron su apoyo, cariño y comprensión en todo momento, sus consejos que me dieron la fortaleza para seguir adelante.

A mis Maestros que me vieron como un hijo, que me enseñaron paso a paso lo que se tiene que aprender para luchar en la vida, gracias porque me dieron de beber del manantial del saber y sabiduría, gracias porque me ofrecieron su confianza y amistad.

A mis Compañeros y Amigos que son parte fundamental por su apoyo y por la experiencia brindada y compartida.

CARLOS JOSÉ MEDINA GÓMEZ.

DEDICATORIA

Dedico primeramente a Dios, Padre todo Poderoso, por el don de la vida, por darme la fuerza necesaria para comenzar cada día y por guiarme por el camino del bien.

A mi Madre, razón de todos mis esfuerzos, la luz que brilla e ilumina el diario caminar de mi existencia; paz, esperanza y honestidad en una sola persona, que nunca ha soltado mi mano y siempre ha creído en mi.

A mis Familiares, Amigos y Personas Queridas, que brindan palabras alentadoras y verdaderas, que nos aconsejan en las difíciles y múltiples decisiones de esta vida, que nos acompañan, alientan y animan a seguir adelante.

A mi Tutor y a mis Maestros, por guiarme en mi educación superior, tratando cada día, con su ardua y admirable labor, de enseñarnos la vida en una carrera tan apasionada.

No esta de más, agradecer a todas las personas que de alguna u otra manera han colaborado con la realización de este trabajo, brindando su paciencia y experiencia a la finalización del mismo.

A todos Ustedes, con Cariño, MUCHAS GRACIAS!!!

MARLON ALBERTO MOREIRA IBARRA.

DEDICATORIA

Dedico a Dios por darme la vida, por nacer en tan bello país y por regalarme el discernimiento para escoger tan linda carrera.

A mi Mamá que me trajo a este mundo, la cual hasta el día de hoy bajo pobreza y dificultades nunca ha dejado de apoyarme e impulsar este sueño que hoy ve finalizar, gracias Chonci por ser la mejor Madre del Mundo, esto es tuyo más que mío, gracias por ser el Motor que guía mi vida, gracias por Guiarme por buena senda.

A mi Hermano que siempre ha estado a mi lado no importando la distancia, gracias porque siempre has sido mi Ejemplo y me has enseñado que lo más importante es ser uno mismo, gracias por confiar en mí, hoy te digo que te he cumplido, NO CAMBIES NUNCA.

A mis Amigos y Personas que siempre han estado cerca, gracias por compartir alegrías y tristezas, gracias por estar ahí, espero que esto no sea lo último que compartamos, porque de una u otra manera ustedes también tienen una parte importante en mi Vida.

Por último y no menos importante, agradezco a todos mis Maestros los cuales han dejado todo su esfuerzo para prepararme.

FAUSTO FRANCISCO PEREIRA AVILEZ.

AGRADECIMIENTO

A Dios nuestro Padre Celestial, que nos ha regalado el ser y la existencia hasta el día de hoy, ya que por su infinita Misericordia hoy podemos culminar este esfuerzo por el cual tu Padre nos has guiado.

A nuestros Padres dones del cielo y la tierra que nos han traído al mundo por la voluntad de Dios, por estar ahí siempre no importándoles las adversidades y nuestras malas crianzas.

A nuestros Maestros abnegación del ideal y esperanza, que supieron dar su mejor semilla en sabiduría la cual hoy podremos cultivar.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

¿Se sabe si en la actualidad, existen normas establecidas y el grado de cumplimiento de las mismas, para la reinserción de las personas privadas de libertad a la sociedad en el Sistema Penitenciario de Occidente de Nicaragua (Chinandega)?

OBJETIVOS:

- OBJETIVO GENERAL:

- ◆ INDAGAR EL DESARROLLO DE LA HUMANIZACIÓN DE LA PENA, COMO UNA FUNCIÓN DE REINSERCIÓN DEL INDIVIDUO A LA SOCIEDAD, EN EL SISTEMA PENITENCIARIO DE OCCIDENTE.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ◆ VERIFICAR EL CARÁCTER HUMANO DE LAS NORMAS JURÍDICAS EN LA REINSERCIÓN DE LOS INDIVIDUOS PRIVADOS DE LIBERTAD, EN EL SISTEMA PENITENCIARIO DE OCCIDENTE.
- ◆ CONSTATAR LOS CRITERIOS Y NORMAS APLICABLES EN LA HUMANIZACIÓN DE LAS PENAS, DE AUTORIDADES QUE ESTÁN EN CONTACTO DIRECTO CON LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE OCCIDENTE.
- ◆ VERIFICAR SI SE RESPETA LOS DERECHOS HUMANOS Y OTROS PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS INDIVIDUOS PRIVADOS DE LIBERTAD, COMO UNA FUNCIÓN DE REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD.

HIPÓTESIS:

Existe verdaderamente un carácter humano en el cumplimiento de la pena, de los individuos privados de libertad del Sistema Penitenciario de Occidente de Nicaragua que incida en su reinserción a la sociedad.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO I “LA PENA”	
1. Concepto de Pena	2
2. Característica de la Pena	3
3. Evolución Histórica de la Pena	4
3.1 Venganza Privada Absoluta	5
3.2 Venganza Privada Reglamentada.....	5
3.3 Compensaciones Pecuniarias.....	5
3.4 Venganza Pública	6
3.5 Venganza Social	6
4. Determinación de la Pena	6
5. Finalidad de la Pena.....	8
6. Individualización de la Pena.....	9
6.1 La Legal.....	9
6.2 La Judicial	10
6.3 La Administrativa	10
7. Indeterminación de la Pena.....	10
8. Clasificación de la Pena	12
8.1 Prisión	13

8.2 Efectos de la Prisión.....	14
8.3 Presidio	17
8.4 Inhabilitación	18
8.5 Inhabilitación Absoluta	19
8.6 Inhabilitación Especial.....	19
8.7 Multa.....	20
9. Teorías para la Determinación de la Pena	21
9.1 Teoría Absoluta	21
9.2 Teoría Relativa	22
9.2.1 Teoría de la Prevención General.....	22
9.2.2 Teoría de la Intimación	22
9.2.3 Teoría de la Coacción Psíquica de Fuerbach	23
9.2.4 Teoría de la Advertencia de Bahuer.....	23
9.2.5 Teoría del Fin Preparatorio.....	23
9.2.6 Teoría Utilitaria	23
9.2.7 Teoría del Contrato Social	24
9.2.8 Teoría de la Enmienda	24
9.3 Teorías Mixtas	24

CAPITULO II “SISTEMAS PENITENCIARIOS”

1. Evolución Histórica de los Sistemas Penitenciarios	26
2. Sistemas Penitenciarios en Nicaragua.....	29

3. Clasificación de los Sistemas Penitenciarios	31
3.1 Sistema Celular o Filadelfico	31
3.2 Sistema Mixto o de Auburn	33
3.3 Sistema Progresivo o Ingles.....	33
3.4 Sistema de las Servidumbres Penales Inglesas	34
3.5 Sistema de los Reformatorios	35
3.6 Sistema Irlandés de Crofton	35
3.7 Sistema de Clasificación o Belga	35
4. Régimen Penitenciario en Nicaragua.....	36
5. La Asistencia Post-Institucional.....	38
6. Marco Legal de la Humanización de las Penas	39
6.1 En la Constitución Política de la Republica de Nicaragua.....	40
6.2 En la Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de Pena de Nicaragua, Ley 473.....	41
7. Convenio Internacional en Metería de Humanización de Penas.....	42
7.1 Declaración Universal de Derechos Humanos.....	42
7.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	43
7.3 Resolución 1503.....	45
7.4 Convención Internacional Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles	46
7.5 Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre	49

7.6 Convención Americana Sobre Derechos Humanos	50
7.7 Reglas Mínimas Para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas	55

CAPITULO III “RESOCIALIZACION Y REINSERCION”

1. Penologia	57
2. Principios Básicos Para el Tratamiento de los Reclusos	59
3. Trabajo del Individuo Privado de Libertad en el Sistema Penitenciario de Occidente	63
4. Educación en el Sistema Penitenciario de Occidente	65
5. Resocializacion	67
5.1 Resocializacion como un Proceso de Reestructuración Individual del Penado	68
5.2 Resocializacion como un Correctivo del Proceso Resocializador Deficitario de la Estructura Social	71
5.2.1 Teoría del Psicoanálisis	72
5.2.2 Teorías Marxistas	73
5.2.3 Teoría de la Criminología Critica	73
5.3 La Resocializacion Como un Proceso de Socialización de Índole Jurídico.....	74
6. Carácter Legal de la Pena en Nicaragua	78
7. Visión del Sistema Penitenciario de Occidente	85

8. ¿Qué es el Tratamiento Penitenciario en Sistema de Occidente?	87
9. Consideraciones del Juez de Distrito de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria del Departamento de León.....	88
CONCLUSIONES	95
ANEXOS	97



INTRODUCCIÓN:

Es para nosotros, de suma importancia, como un problema social, que existan normas jurídicas y a su vez que las mismas se respeten y se hagan cumplir, que reflejen los derechos que poseen los individuos privados de libertad a su reeducación, como parte de una función resocializadora de la norma misma.

La reinserción de estos individuos en la sociedad, producto de un proceso reeducador, el cual es el carácter de la pena, servirá para rescatar y establecer valores en estos mismos, que les permita tener la capacidad de discernir y reflexionar sobre las posibles consecuencias de todos y cada uno de sus actos.

Establecer la pauta ante las diferentes autoridades, de tal forma que se toma en cuenta los criterios de las mismas en cuanto a la reeducación y humanización de la pena de los individuos privados de libertad en el Sistema Penitenciario de Occidente.



CAPITULO I

LA PENA

1. CONCEPTO DE PENA:

La etimología de esta voz, procede del Latín Poena, derivado a su vez del Griego Poine o Pena, que significa dolo, trabajo, fatiga y sufrimiento; a su vez esta genealogía, enlaza con el sánscrito punya cuya raíz Pu, quiere decir purificación, desde un punto de vista ético, se considera como dolor o sufrimiento que padece el sujeto, como resultado de una mala acción. Jurídicamente considerada, la pena significa la represión que con el poder público sanciona las trasgresiones de la ley. Se ha discutido el concepto de pena científicamente originándose varias opiniones al respecto, según las distintas posiciones doctrinarias. Así, Grosio expone que la pena, es un mal de pasión, que la ley impone por un mal de acción. Von Lifzt, considera que la pena, consiste en un mal que el juez impone al infractor, a causa de un delito, para expresar la reprobación social respecto al acto. Para Pessina, la pena es un sufrimiento que recae por obra de la sociedad humana, sobre aquel que ha sido declarado autor del delito, como único medio de reafirmar el derecho y justo dolor frente al injusto goce del delito. Para el ilustre penalista Dorado Montero, la pena es un bien para el penado, en cuanto



debe consistir en un tratamiento desprovisto de espíritu represivo y doloroso encaminado solamente a la reeducación del delincuente. Actualmente dentro del espíritu dominante del Derecho Penal se puede definir la pena, como, el sufrimiento impuesto por el estado, en ejecución de una sentencia al culpable de una infracción penal, con estricto apego a la Constitución Política de la República de Nicaragua y las leyes penales vigentes¹.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PENA:

Con base al concepto anterior se desprenden las siguientes características:

- Es un sufrimiento, que es sentido por el penado, que proviene de la restricción o privación, impuesta al penado, de bienes jurídicos de su pertenencia, libertad, propiedad, honor o vida.
- Es impuesta por el Estado, la pena es pública, la cual se aplica a través del órgano jurisdiccional, para la conservación del orden jurídico o para restaurarlo cuando halla sido perturbado por el infractor de la norma. Los males o sufrimiento que el Estado impone con otros fines, como las correcciones disciplinarias no constituyen penas propiamente dichas.

¹ Mayorga Ramírez, Francisco. Tesis sobre la Pena pág. 11



- La pena es consecuencia de un juicio penal, que debe ser impuesta por los Tribunales de Justicia, siguiendo las normas del debido proceso.

- Debe ser personal, de modo que nadie puede ser castigado por hechos que halla cometido otra persona.

- Debe ser legal, establecido por la ley y dentro de los límites por ella fijado, para un hecho previsto por la misma como delito, con base al Principio de Legalidad (Nulla Poena Sine Lege)².

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PENA:

En las legislaciones de varios pueblos, durante el lento desarrollo de muchos siglos, la pena aparece bajo las formas más rudas y atroces, siendo las principales manifestaciones de la penalidad o reacción del grupo humano a través de las épocas históricas siguientes:

- La venganza privada absoluta.

² op.cit. Mayorga Ramírez, Francisco. pág 12



- La venganza privada reglamentada.
- La compensación pecuniaria.
- La venganza pública.
- La defensa social.

3.1 LA VENGANZA PRIVADA ABSOLUTA: Es la manera como el individuo ofendido se cobra el daño vengándose de su ofensor; esto se puede definir como la venganza bárbara de la sangre.

3.2 LA VENGANZA PRIVADA REGLAMENTADA: Se estableció para evitar la venganza sangrienta que se presentaba en la venganza privada absoluta, basada en:

1. La aplicación de la venganza solo al autor criminal.
2. La entrega del autor al grupo ofendido.
3. El establecimiento de la ley del Talión “ojo por ojo, diente por diente”
4. La comprobación del hecho evitándose que la venganza se aplicará por sospechas o presunciones.

3.3 LAS COMPENSACIONES PECUNIARIAS: Esto no es más que la conciliación entre las partes, inicialmente no es obligatoria (como en algunos



casos hoy en día con el código de procedimiento penal), con esto se fue erradicando la venganza privada; aquí se indemniza a la víctima o al grupo de ésta con determinados valores.

3.4 LA VENGANZA PUBLICA: Aquí es la autoridad la que se atribuyó la función de vengar, todo esto a los actos o hechos que fuesen contrarios al lugar donde se suscitaron, sustituyéndose la venganza por un castigo que fuera de manera ejemplar.

3.5 LA VENGANZA SOCIAL: Este se reflejó como medio racional adecuado de asegurar la convivencia social, primando los intereses colectivos, así como los individuales.

4. DETERMINACIÓN DE LA PENA:

En un principio la pena era determinada en un modo absoluto en cuanto a su naturaleza como cuantía.



En forma evolutiva en el Imperio Romano se facultó a los jueces o aplicadores de la ley para fijar el grado de la pena según las circunstancias acaecidas por el infractor de la norma, pero esto dio origen a arbitrariedades.

Se individualiza la pena, que es un paso muy importante en la evolución de la misma, pero sirve de privilegio a los poderosos, dando como consecuencias injustas desigualdades personales.

La proporcionalidad de la pena en un momento se debe de establecer entre la mezcla que existe en los elementos Delito y Pena, que son la base principal para determinar el castigo; las penas deben de estar catalogadas en distintas índoles o clases en pro que los delitos sean castigados con la cantidad y cualidad correspondiente, es decir, desde el punto de vista de cualidad se debe de aplicar penas más graves, a los delitos más graves. En cuanto a la cantidad que no es más que graduar la pena en cada delito, siendo mayor o menor según sea la culpabilidad del reo y su grado de participación.



5. FINALIDAD DE LA PENA:

La pena, en cuanto a su finalidad, cumple con una sanción de prevención; y ésta a su vez se divide en general y especial. Se entiende por Prevención General, la eficacia de la pena sobre la generalidad de masa de súbditos, y por Prevención Especial; la eficacia que la pena tiene sobre el individuo aislado que ha cometido delito, para hacer que dicho sujeto no vuelva a violar la ley.

En este sentido predominan dos principios antagónicos: El Principio de Expiación o Retribución, que da a la pena un sentido de sufrimiento, de castigo impuesto en retribución del delito, que se puede definir como un puro acto de justicia. El de la Prevención aspira como su nombre lo indica, a prevenir la comisión de nuevos delito.

La sanción penal cuando actúa sobre el penado, reformándolo y procurando su corrección y readaptación social, aspira a alejarlo del delito por temor a la pena. El fin de la pena es la aspiración correccional del delincuente. En el presente, el Derecho Penal aspira a la prevención individual y desatiende casi por completo la prevención general.



Nuestra Constitución Política, ordena que las cárceles sean establecimientos de reeducación del penado y de preparación del trabajo del delincuente. Esto es, tratan de suministrar al privado de libertad, al delincuente aislado, motivos psicológicos y sociales de buena conducta futura.

6. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA:

El criterio de que la pena debe adaptarse a la persona del delincuente. La individualización de la pena presenta tres fases: la legal, la judicial y la administrativa.

6.1 LA LEGAL: Es la formulada de antemano por la ley. La ley no conoce de individuos, sino de especies llamadas delitos. Depende su imposición del ánimo y arbitrio del juez o jurado, según sea el caso, quien en su elección podrá tener en cuenta la personalidad del delincuente, realizando de ésta manera una labor de individualización. Con respecto a la cuantía y duración puede el legislador determinarla, fijando amplios espacios entre el máximo y el mínimo, con el fin de que los jueces tengan suficiente amplitud para adoptar la pena a las condiciones personales del delincuente.



6.2 LA JUDICIAL: Es el verdadero momento de la individualización penal, por la cual la autoridad jurisdiccional señala en la sentencia la pena correspondiente al infractor. El juez tiene que precisar de una adecuada preparación y del concurso de ciertos auxiliares técnicos, sin los cuales le sería imposible penetrar el secreto de la conducta humana que se le entrega y de la cual conoce³.

6.3 LA ADMINISTRATIVA: Llamada también penitenciaria, la llevan a cabo los administradores o funcionarios encargados de la administración de las penas de privación de libertad. También se hace necesario que los funcionarios encargados posean los suficientes medios adecuados para llenar su cometido⁴.

7. INDETERMINACIÓN DE LA PENA:

Constituye una fase de la determinación de la medida de la pena, la Indeterminación de la pena comúnmente es denominada sentencia indeterminada; la pena tiene que adaptarse a la peligrosidad del infractor de

³ Bengoa, Bayardo. Derecho Penal Uruguayo. Pag 204 y 205

⁴ Cuello Colon, Eugenio. Derecho Penal Argentino tomo I. pág 684



la norma penal, dura mientras es aplicada y cesa cuando la peligrosidad está erradicada. Es natural que el privado de libertad dejará de estar sujeto a la pena reformadora solamente cuando éste esté reformado, el juez al imponer la sentencia condenatoria lo hace basado en pruebas como juez de derecho, en cambio el legislador tomando en cuenta la conducta antisocial de la persona que delinque, para salvaguardar los intereses de la comunidad, esta condena es en forma abstracta, es decir, actuando apriorísticamente. Se dice que la condena indeterminada nació cuando Boneville de Marsagny, quien propuso que los condenados indisciplinados de mala conducta estuvieran detenidos después de la ejecución de la pena, esto fue en un principio tiempo después se atribuye a Roedor, el hecho de que las pruebas no pueden ser de un modo invariable, por el contrario debe estar sujeta a ulteriores modificaciones, aumentándolas o disminuyéndolas de acuerdo con la necesidad injusta que se trata de reformar⁵.

La indeterminación de la pena presenta dos caracteres: La indeterminación absoluta y la relativa que el juez debe estar sujeto a un máximo y a un mínimo y ante del mínimo no puede ordenar la libertad del reo y pasado el máximo no puede ser detenido en la prisión.

⁵ Op. Cit. Mayorga Ramírez, Francisco. Pág 22, 23 y 24



8. CLASIFICACIÓN DE LA PENA

La pena puede clasificarse atendiendo al fin que se propone alcanzar. Desde este punto de vista puede dividirse en penas de Intimidación, aplicables a delincuentes pocos peligrosos y de quienes se espera que el medio a la pena, será suficiente para apartarlos del delito; penas de corrección para aquellos delincuentes que necesitan una reforma o un robustecimiento de su moralidad y considerados enmendables, y penas de Eliminación o de seguridad, para los delincuentes incorregibles, a quienes hay que colocar en situación de no hacer daño.

Considerando la materia sobre la que recae la aflicción penal se divide en: Corporales; que recae sobre la vida o la integridad física o causan un sacrificio corporal al reo, Privativas de libertad; esto es, que privan al reo de su libertad de movimiento, la Pena de Prisión; restrictivas de libertad que limitan al penado, la libertad potestativa de elegir su domicilio, Restrictivas de Derecho; sujetas a caer sobre derechos de carácter público o sobre derecho de familia, Penas Pecuniarias; que afectan al patrimonio del condenado, Penas Infamantes; que privan del honor y de la consideración al que la sufre, muchas de estas penas como las infamantes y las mayorías de las



corporales, han desaparecido de los sistemas penales de los países civilizados.

8.1 PRISIÓN:

De las penas contra la libertad, la más importante es la de la prisión o sea la privación de la libertad del condenado, mediante la reclusión en un establecimiento especial, sometido también a un régimen especial. De donde resulta, que la prisión es una pena privativa de libertad que se cumple en un establecimiento determinado y de acuerdo con un reglamento particular. Es pues, la prisión, la pena predominante entre las que afecta a la libertad y uno de los medios más frecuentemente usados por las sociedades para defenderse del delito.

Según el Diccionario Instructivo de Ciencias Sociales, define a la Prisión, como: **Pena** privativa de la **libertad** en que la libertad del **condenado** se restringe al máximo, sometiéndolo a un régimen de disciplina y de **trabajo** determinados.. Establecimiento destinado al cumplimiento de las sanciones impuestas por la **autoridad judicial**. Así mismo, define a la Prisión Abierta, como: Se le llama así al instituto correccional que carece de toda precaución material y **física** que pueda impedir la evasión del preso; **sujeto** a un régimen



de disciplina aceptada por el recluso, basada en un **presupuesto de responsabilidad** del recluso con respecto a la **comunidad** en que vive. “...carece de toda **seguridad física** para evitar evasiones, lo que se reemplaza por el desarrollo de motivaciones psicológicas que refuerzan el sentimiento de comunidad del grupo”⁶.

8.2 EFECTOS DE LA PRISIÓN:

El concepto intimidante y expiatorio que impera en la ejecución de la pena ha dejado como consecuencia solo resultados perniciosos. Reaccionando contra el sistema imperante, numerosos penalistas han negado la eficacia del lus Peniendi y pronunciándose contra las servidumbres penales. Pero son las inquietudes de los juristas modernos los que haciendo un estudio profundo sobre el problema originaron una corriente que preconiza el fracaso de las largas penas privativas de libertad.

Con dichas investigaciones se han demostrado que la prisión destruye espiritualmente al privado de libertad, suprimiendo en él toda reacción útil a la vida en común y dejando en libertad, al término de la pena, a un sujeto desalentado y realmente estéril a la sociedad, o convertido en un ser

⁶ .- [http:// www.dicciobibliografia.com](http://www.dicciobibliografia.com).



inadaptado y rencoroso, más agresivo que aquel que entró en la penitenciaria.

Para Rodolfo Siervetts en los “Efectos de la Pena Privativa de Libertad” dichos efectos, destrozos y perjuicios que las cárceles producen en la Psiquis de los penados no les permite o no termina, el individuo, de ser reintegrado a la libertad. Realizando este estudio Siervetts deduce que la Psiquis del penado, incluso en la vida libre, permanece poderosamente influenciado por la prisión. El perjuicio que origina esta influencia se traduce en: incapacidad de concentración, insatisfacción de la vida afectiva, disminución del impulso de sociabilidad, ilusionismo fantástico, debilidad de la memoria, defecto en el dominio de si mismo, falta de alegría en el trabajo y finalmente, ausencia de decisión y voluntad.

Por lo que dichas reacciones, que a menudo encuentran al regresar a la vida libre, son diversos y sólo después de largo tiempo y a veces tras largas crisis nerviosas, logran adaptación a la sociedad, en numerosas ocasiones quedan los reos recluidos para siempre a lo que se llama hombre roto.



Los reclusos a causas de las penas privativas de libertad sufren un gran déficit de naturaleza Psíquica y material, sin que por ello la sociedad obtenga algún beneficio apreciable; al contrario, cada uno de estos hombres que la penitenciaria destruye, representa a la vez una pérdida a la sociedad, creándose así una situación antieconómica e inmoral. Siervetts concluye su tesis, que se adapta a los principios y consecuencia de la Psicología individual, aduciendo: “ La pena no pierde eficacia cuando se hace mas benigna, sino que anula los efectos, cuando es cruel en demasía”, para conseguir dicho objetivo es necesaria una investigación continúa y exenta de prejuicios, de carácter médicos psicológicos y pedagógicos, teniendo como consecuencia una transformación del sistema vigente en el orden de ejecución de las penas y una sustitución completa de éstas por otras mejores, teniendo como meta a perseguir, la corrección por medio de la educación.

Para Hernetl, la pena de cárcel es absurda ya que refleja los perniciosos efectos de la ejecución de la pena en el alma del delincuente, poniendo como ejemplo: si el condenado es malo, la pena como contraataque, como resistencia eleva, como cualquier otro medio el poder de la fuerza que trata de combatir, en consecuencia no hace mejores a los malos, los empeora.



Según Hernetl, “Las penas privativas de libertad son las mas absurda de todas las penas, ya que la disposición anímica a lo antisocial, se agudiza por las condiciones anormales y contrarias a la vida humana, del régimen de las prisiones”

Lo auténticamente individual del condenado, queda absorbido por los muros de los sistemas penitenciarios, transformándose por una ley psicológica de nivelación, característica de los penales, en un ser estereotipo. Así pues, si el verdadero delincuente es un ser de psiquis normal, la pena debería sustituirse por la terapéutica y transformarse los sistemas penitenciario en clínicas sociales

8.3 PRESIDIO:

Según el Diccionario Instructivo de Ciencias Sociales, define al Presidio, como: **I.** Establecimiento penitenciario, llamado también **cárcel**, en que cumplen sus condenas los penados por graves delitos. **II. Pena** divisible de privación de libertad, que puede tener carácter aflictivo o correccional, e



implica en ambos supuestos el **trabajo** ordinario, pero forzoso, del penado. El **producto** de este **trabajo** se destina al **pago** de las reparaciones e indemnizaciones derivadas del **delito** y determinadas pecuniariamente en la **sentencia** en que se impuso la pena; ésta se cumple en establecimientos penitenciarios adecuados⁷.

8.4 INHABILITACIÓN:

Para, el Diccionario Instructivo de las Ciencias Sociales, define a la Inhabilitación, como: I. Situación consiguiente a una **declaración** de **quiebra**, que aflige al **fallido** por determinado **tiempo** hasta que se dicta su "**rehabilitación**". II. (der. pen.) **Pena** que aflige al **funcionario** o al particular que ha cometido alguno de los delitos que se reprimen con esa **pena**, sea como principal o como accesoria, y que significa una supresión o restricción de su **libertad jurídica**. La pena de inhabilitación es a veces autónoma y otras veces accesoria, pudiendo ser también conjunta como en el caso de homicidio por imprudencia, que se aplica juntamente con la pena privativa de libertad.

⁷ .- [http://: www.dicciobibliografia.com](http://www.dicciobibliografia.com)



8.5 INHABILITACIÓN ABSOLUTA:

Pena que importa la privación del **empleo** o **cargo público** que ejercía el penado aunque provenga de elección popular; la privación del derecho electoral; la incapacidad para obtener **cargos**, empleos y comisiones públicas; la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión. Es ciertamente absoluta si comprende una incapacidad ilimitada, como sería la interdicción para el ejercicio profesional y de los derechos. Puede ser perpetua o temporal, principal o accesoria.

8.6 INHABILITACIÓN ESPECIAL:

Es la **inhabilitación** temporal, o excepcionalmente perpetua, que produce la privación del **empleo, cargo, profesión** o derecho sobre que recayere y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena. La **inhabilitación especial** para **derechos políticos** consiste en la incapacidad de elegir o ser elegido para una **función** electoral, durante la condena.



8.7 MULTA:

Definido por el Diccionario Instructivo de las Ciencias Sociales, como: **I. Exacción** de una cantidad de dinero impuesta por incumplimiento de una **obligación** o por la **comisión de un delito** o **falta**. El nomen iuris no es decisivo para establecer el carácter de multa, éstas pueden ser de carácter reparatoria o indemnizatoria o de carácter **penal**. Estas últimas tienen como fin un castigo, y derivan del ejercicio de **policía** del Estado, son personalísimas y convertibles en **arresto**. Las no penales pueden ser contravencionales, y no contravencionales, como serían las faltas disciplinarias, las tributarias, o las infracciones de **leyes de derecho social**.

II. En el **Código Penal** argentino es **pena** principal, que según Enrique Zaffaroni no puede tener otro **objeto** que el de proveer la **seguridad jurídica** como **instrumento** resocializador del penado, distinguiéndola de la **pena** administrativa que tiene carácter reparatorio. Hay tres **sistemas** de aplicación de la **pena** de multa, que son: el que determina la condena al **pago** de una suma total; el que el **juez** individualiza en cada caso la cuantía correspondiente a cada tipo o porción, teniendo en cuenta la situación económica del procesado.



9. TEORÍAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PENA:

Roeesi, divide en dos clases el fundamento de derechos de castigar: las que buscan un Principio Moral por fundamento y las que tienen por única base un hecho, un interés material.

Los estudiosos del Derecho han aceptado la clasificación unánime de las teorías del derecho de castigar en tres: Absoluta, Relativas y Mixtas:

➤ 9.1 Teoría Absoluta:

Considera que la pena no tiene una función social sino una razón de justicia absoluta, es remedio al mal producido (Punire Quia Peccatum Est), según Kant, encuentra la razón de la pena en el delito cometido. El delito viola la ley divina o altera el orden moral o el orden jurídico; en cualquier caso, es derivado lógico de la conducta contraria a Dios, a la moral o al Derecho. Para Platón, la pena es el medio de purificar el alma, de la injusticia cometida considerándola justa en si misma. Se critica esta teoría, porque confunde la justicia social con la justicia ideal o absoluta, la cual es imposible de obtener en el mundo.



➤ 9.2 Teorías Relativas:

Estas teorías consideran a la pena como un medio para conseguir un fin (*Nec Peccatus, para que no se peque*), tratan de prevenir otros delitos, a diferencia de la teoría absoluta que considera a la pena como un fin.

El concepto de esta teoría es utilitario siendo sus modalidades las siguientes:

9.2.1 Teoría de la Prevención General: Que asigna como fin de la pena, el de prevenir el delito, aprovechando el efecto que produce sobre la colectividad o sobre el individuo; cuando es sobre la colectividad es general y cuando es sobre el individuo es prevención especial

9.2.2 Teoría de la Intimación: Atribuye a la pena la virtud de operar la prevención genera, por el temor que despierta la amenaza de su imposición, la objeción que se le hace es que el infractor de



la norma se caracteriza por su anormalidad, siendo por consiguiente incapaz de formarse de la pena.

9.2.3 Teoría de la Coacción Psíquica de Fierbach: Quien expone que para prevenir el delito es necesario que sobre la colectividad actúe la coacción psicológica interna que ejerza un influjo inhibitorio.

9.2.4 Teoría de la Advertencia de Bauer: Este expositor explica, que para no delinquir, la ley debe advertir, con la amenaza de la pena.

9.2.5 Teoría del Fin Reparatorio: Sostenida por Spencer, en su obra “Ética de las Prisiones”, el cual señala que la esencia del Derecho de Castigar esta en la necesidad social de mantener las condiciones de la vida completa.

9.2.6 Teoría Utilitaria: Expuesta por Geremias Bethan, para quien la pena no tiene más razón o fundamento que su utilidad preventiva de nuevos delitos.



9.2.7 Teoría del Contrato Social: Considera la pena como garantía, todo infractor que atenta contra la comunidad se constituye en violador del contrato, siendo la pena la que cumplirá el fin de garantizar el mismo.

9.2.8 Teoría de la Enmienda (prevención especial): Una forma de prevención especial es la enmienda del delincuente, dicha teoría se remonta a la doctrina Platónica, que ve en la pena la medicina necesaria para la curación psicológica del delincuente, esta teoría en su forma más pura tiende a la corrección moral del infractor, sostenida por Roeder, Dorado Montero y otros.

9.3 Teorías Mixtas:

Estas teorías, tratan de conciliar las doctrinas absolutas o de retribución con las doctrinas relativas o el fin de defensa, concluyendo, que el fundamento de la pena está en la justicia limitada por la necesidad social. Esta teoría da lugar al Eclecticismo Italiano y al Francés, el primero fundado por Carmignani



y defendido por Carrara, expresa: que el Derecho de Castigar en manos de los hombres, no tiene más legitimidad que la necesidad de la defensa; este Derecho de la sociedad está limitado por la norma de la justicia, denominándose teoría de la Tutela Jurídica. La segunda, el Eclecticismo Francés, parte de considerar, que existen dos ordenes uno moral y otro social, fundamenta el derecho de penar en la ley moral dictada por el hombre por su propia conciencia que le hace responsable de las infracciones perpetradas, pero como además de ser moral, el hombre es un ser social, es necesario, que como tal se someta a un orden social, lo cual es también obligatorio.



CAPITULO II:

SISTEMAS PENITENCIARIOS:

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS:

Los sistemas penitenciarios, no son en la actualidad ni la sombra de lo que fueron en tiempos pasados, su evolución se realiza a medida que evoluciona la pena, evolución tratada en el primer capítulo, de tal manera que la aplicación de la pena y la edificación carcelaria han estado en relación directa, es así que en los primeros tiempos no hubieron prisioneros, ya que la pena tenía el aspecto de venganza⁸.

Los sistemas de reclusión aparecieron con la civilización Greco-Romana, las primeras en mencionarse son las de los Hebreos, que en sus principios fueron cisternas sin aguas las que sirvieron de cárceles. En el caso de los Egipcios no quedan huellas que demuestren que las hayan conocido.

⁸.- Morales Silva, Oscar; Sistemas Penitenciarios en Nicaragua, pag. 28-30.



En caso de Grecia y Roma es distinto, pues aquí el suplicio oriental desaparece y en cambio aparece la privación de libertad, las penas tendían a alejar al delincuente de la sociedad que había ofendido.

Con el progreso de la ley penal progresan los tribunales y se forman un procedimiento tan completo que surge la necesidad de mantener al condenado en lugar seguro mientras se efectúa la tramitación del proceso, entonces surgen los establecimientos penales variados; en el que el móvil era aislar al delincuente sin preocuparse en su persona. La de los Griegos fueron los más completos. En los siglos posteriores a medida que las penas fueron mas duras, así fue creciendo la crueldad de las prisiones.

Ya para la edad media, las prisiones crearon una época triste y de horror, bien conocido es como la inquisición trato a sus prisioneros; por lo general las prisiones de esa época eran húmedas y causaban terror, así tenemos en Francia la Bastia, en Inglaterra la torre de Londres, por ejemplo.

Una novedad frente a lo anterior fue la formación de las penitenciarias a finales del siglo XVI, las cuales fueron formadas con el objeto de reformar vagabundos, prostitutas y pordioseros. Se fundaron primero en Inglaterra,



luego en Ámsterdam y posteriormente en toda Europa; dichas penitenciarias fueron la raíz de la moderna pena correccional, en el que la **duración dependía del resultado educativo obtenido.**

Ya para el siglo XVII, desaparece el sentido con que fueron creadas las penitenciarias, por el ingreso de grandes delincuentes que hacen que pierdan su primitivo sentido y al fijarse la duración de la pena desaparece la diferencia del penitenciario con la cárcel convirtiéndose la penitenciaría en establecimiento penal. Las condiciones de las prisiones alcanzan de nuevo una estremecedora situación.

La reacción reformadora contra esta estremecedora situación de las prisiones empieza a mediados del siglo XVIII, con el filántropo Ingles Jhon Howard, tras él Benthan y otros más. **“Howard proponía para el tratamiento de los presos la enseñanza religiosa, el trabajo, la higiene, régimen alimenticio, disciplina y educación”.** Con Haward nace la corriente llamada Del Penitenciarismo, que siguió desarrollándose en Inglaterra y Europa.

Poco después este movimiento se traslada a Estados Unidos de América, bajo la influencia de Benjamín Franklin en 1776 se creó en Filadelfia la prisión



llamada De la Calle de Walnut o sociedad penitenciaria de Filadelfia, que fue la primera penitenciaria Americana, desde ese momento se hacen notar las mejoras introducidas en los presidios hasta la fecha.

Ya para 1777 Jhon Haward, sentó las bases de ejecución de penas en su libro “EL ESTADO DE LAS PRISIONES EN INGLATERRA” en el cual concluye diciendo que **si el deseo de nuestros jueces y magistrados fuera a efectuar la completa destrucción de nuestros delincuentes no habría otro medio más eficaz que confinarlos a las prisiones por largos tiempos, pues ellas son centros de vicios y corrupción.** Estas ideas penológicas dieron lugar al llamado movimiento Penitenciario, que erigido cárceles humanas e higiénicas y ha señalado como fin principal de estas penas la corrección y regeneración moral de los penados. Estos esfuerzos fueron continuados por Benthan con su doctrina utilitaria, entre otros.

2. SISTEMAS PENITENCIARIOS EN NICARAGUA:

Según Castellón Barreto (q.e.p.d.) y Hernández León⁹, tradicionalmente las cárceles en Nicaragua han sido centros correctivos, de los cuales más valiera no hacer ningún comentario pues a los detenidos en esos lugares les ha

⁹.- Castellón Barreto (q.e.p.d) y Hernández León; Apuntes de Derecho Penal, pág. 131-133.



tocado vivir en condiciones infrahumanas, revueltos procesados con los que cumplen condenas, mayores con menores, locos con cuerdos, sujetos con enfermedades contagiosas a la par de los que tienen salud, pervertidos sexuales con lo que no lo son y en muchos casos mujeres con varones.

Tradicionalmente se ha descuidado la salud y la educación de los detenidos, se ha ignorado sus condiciones humanas en todo sentido y se ha hecho de las cárceles un semillero de delincuencia en donde se encuba el odio y el ánimo de alcanzar algún día la libertad.

Siguiéndose el criterio de dichos autores todo parece indicar que a la fecha se hacen grandes esfuerzos para erradicar todas esas lacras, a través de proyectos en los que se trata de darles cumplida atención a los encarcelados por medio de asistencia medica, tanto síquica como física, educación e instrucción en general. Tomando como otro requisito indispensable para que la justicia brille, es el de que las autoridades judiciales y de policía cumplan con el deber de respetar la ley sustantiva y la adjetiva, permitiendo de manera real a los procesados el sagrado derecho a la defensa al mismo tiempo de que deben desechar la fea costumbre de mantenerlos prisioneros de forma arbitraria sin lograr consulta de las autoridades judiciales con las



policiales y sobre todo el respeto a la dignidad humana de todos los privados de libertad.

3. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS:

Los principales sistemas penitenciarios son los siguientes¹⁰:

- ◆ EL FILADELFICO O CELULAR ABSOLUTO.
- ◆ EL AUSBURN.
- ◆ SISTEMA PROGRESIVO O INGLES IDEADO POR MACONOCHIE.
- ◆ LAS SERVIDUMBRES PENALES INGLESAS.
- ◆ EL SISTEMA DE LOS REFORMATARIOS.
- ◆ EL RÉGIMEN IRLANDÉS DE CROFTON.
- ◆ SISTEMA DE CLASIFICACIÓN O BELGA.

3.1 SISTEMA CELULAR O FILADELFICO:

Llamado también, solitary sistem, se caracteriza por el aislamiento celular, diverso y nocturno, interrumpido tan solo por el paseos en patios celulares y por periódicas visitas del director, funcionarios de la prisión, sacerdotes; los penados, estos trabajan en su celda, asisten a la escolaridad y al servicio

¹⁰ .- Op. Cit. Morales Silva, Oscar, pág. 31-34.



religioso en dispositivo especial denominado Alvéolo, asegurándose el aislamiento de los recursos en celdas pequeñas.

Este sistema celular o de aislamiento absoluto fue considerado durante mucho tiempo el más adecuado para la reinserción del recluso ya que lo ponían en condiciones de reflexión y arrepentimiento naciendo en el sentimiento de remordimiento logrando tranquilizar sus irritadas pasiones; se invocaba que el aislamiento impedía la mutua corrupción de los reos y su reciproca inteligencia para la comisión de nuevos delitos.

Tiempo después este mismo sistema celular se encuentra en franca derrota porque se consideró que la celda es una incubadora de tuberculosos por la falta de oxígeno y suficiente luz, provocando así mismo que el reo enfermara su mente, enloqueciendo a los individuos; ya que no favorece la adaptación del delincuente a la vida social, por tanto la celda no es más que una atmósfera superficial, alejada de las tensiones y peligros que asediarán al penado al volver a la vida cotidiana. También se le ataña su alto costo y la dificultad de organizar en dicho sistema la educación moral e intelectual, es por todo esto que hemos expresado, este sistema se consideró una aberración del siglo XIX.



3.2 SISTEMA MIXTO DE AUSBURN:

Fue llamado también Sislent System, el cual fue aplicado en la prisión de este mismo nombre, en 1823; consistiendo en el aislamiento celular nocturno, mientras que la vida diurna se desarrollaba en común bajo el régimen de silencio manteniéndolos a latigazos.

Este sistema desarrolla la hipocresía entre los penados y convierte a las prisiones en fabricas servidas por criminales en el cual el ruido de las maquinas ahoga el remordimiento de conciencia, como se ve, su mayor castigo es el silencio, pero aplicado con vigor no excesivo, es decir, susceptible de ser considerado como un régimen humano y soportable.

3.3 SISTEMA PROGRESIVO O INGLES:

Separate System, fue ideado por Maconochi, capitán de la marina Inglesa 1824, se le atribuye progresivo en cuanto parte del sistema celular que es el primer grado de los cuatro que recorre a lo largo de la pena; en este primer grado se observan y se prepara al recluso, facilitándole materiales didáctico



para su regeneración y progreso sucesivo; permitiéndole la primera duración de este sistema la cual fue de 18 meses y luego se redujo a la mitad

En el segundo grado los reos laboraban en común, pero hay abstención de comunicación entre si; en el tercer periodo se intensifica su enseñanza industrial y escolar dedicándose a trabajos menos penosos lográndose de esta manera la comunicación entre compañeros.

En cuarto grado se constituye la libertad condicional, siempre que el recluso demostrare que se encuentra regenerado física y síquicamente para reintegrarse a la sociedad.

3.4 SISTEMAS DE LAS SERVIDUMBRES PENALES INGLESAS:

Este sistema fija para el efecto de cumplir pena tres periodos:

1. El aislamiento celular.
2. El aislamiento celular nocturno y trabajo en común diurno.
3. Libertad provisional revocable.



3.5 SISTEMA DE LOS REFORMATARIOS:

En este sistema, a través de la pena indeterminada se busca lograr la individualización del régimen de privación de libertad con el objeto de corregir o reinsertar al penado. Cultivándose las condiciones físicas y morales del penado por medio de gimnasios modelos, educación, es decir, escuelas y talleres, libertad bajo palabra y gobierno interior de la prisión con intervención de los propios reos.

3.6 SISTEMA IRLANDÉS DE CROFTON:

Llamado en honor a su creador Sir Walter Crofton. El cual no es más que el perfeccionamiento de la servidumbre legal Inglesa. En este sistema los reclusos laboran como obreros libres desempeñando trabajos tanto en la ciudad como en el campo antes de lograr la libertad.

3.7 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN O BELGA:

El argumento de este sistema es la individualización del tratamiento para lo cual se clasifica a los reclusos según las siguientes consideraciones:

1. Seriación, atendiendo a la procedencia rural o urbana, educación, instrucción, delito, si son delincuentes primarios o reincidentes.



2. Los peligrosos separados en establecimientos diferentes.
3. Separación entre los establecimientos penitenciarios de acuerdo con la duración de la pena; para las penas largas el trabajo y si es intensivo; pero no así para las penas cortas.
4. Auxilios técnicos, como laboratorios de experimentación siquiátricas anexos a las prisiones.
5. Suspensión de las penas y modernización del uniforme de presidiario.

En este sistema se requería un personal especializado, recursos económicos y científico para convertir el trabajo en obligatorio y adecuado a las condiciones de cada reo, pena indeterminada en su duración y libertad condicional que pone en manos del recluso la clave de su celda.

4. RÉGIMEN PENITENCIARIO EN NICARAGUA:

Para los estudiosos del Derecho Penal, Castellón Barreto (q.e.p.d.) y Hernández León¹¹, sostienen que se hace necesario cumplir en todos los establecimientos penales del país, con un reglamento de cárceles o régimen penitenciario, el cual debe prestar la asistencia educativa y cultural, medico-

¹¹.- Op. Cit. Castellón Barreto (q.e.p.d.) y Hernández León; 134-136.



odontológico y espiritual a la población encarcelada, por lo tanto deben existir para ellos los siguientes departamentos:

- ◆ El departamento de educación integral, donde la instrucción debe comprender diferentes niveles de estudios, comenzando por la alfabetización, sin olvidar la cultura física y la coordinación y fomento de las actividades deportivas en los establecimientos.
- ◆ El departamento de medicina integral, donde la asistencia medico-odontológico debe estar tanto en calidad de preventiva como de curativa, la distribución de medicinas y estudio investigativo de problemas psicológicos.
- ◆ El departamento de aprendizaje y trabajo, se incrementará la fundación de talleres de carpintería, mecánica, electricidad, fontanería, zapatería, sastrería y otros en los cuales los internos tengan la oportunidad de aprender un oficio.
- ◆ El departamento de libertad condicional, deberá conformar un sistema progresivo para la rehabilitación, teniendo como objetivo la transformación del interno, y así puede hacerse acreedor al beneficio de libertad condicional.
- ◆ El departamento de antecedentes penales, sus funciones más importantes serán:



1. Averiguar sobre la conducta anterior de los detenidos, para poder expedir certificados sobre antecedentes penales y correccionales a las autoridades que ocupen de ellos.
2. Expedir certificados de buena conducta dentro del penal, cuando sea cierta la misma, y lo soliciten los tribunales para la liquidación de penas.
3. Control de ingresos y egresos mensuales.

5. LA ASISTENCIA POST-INSTITUCIONAL:

Continúan afirmando los mismos maestros estudiosos del Derecho Penal que esta asistencia ha sido definida como el tratamiento que se brinda al sujeto una vez que obtiene su libertad y debe de ser considerada como un prolongación del mismo tratamiento, por lo que se forma una unida interdependiente. En el trato post-institucional como en el institucional, rige el principio de la individualización. **La necesidad de suministrar en muchos casos una asistencia post-carcelaria a los que obtienen su libertad es un paso que debe de tomarse con mucha seriedad, ya que es bien sabido que los recién liberados tropiezan con numerosos problemas al querer reincorporarse a la vida normal.**



Para finalizar y demostrar que existe preocupación actual con los sistemas carcelarios, hay que señalar que en su **arto 39 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, vigente** señala que el **Sistema Penitenciario es humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad.**

6. MARCO LEGAL DE LA HUMANIZACIÓN DE LAS PENAS:

En Nicaragua, la sustentación del derecho positivo, en materia de humanización de pena es muy amplia, constituyendo un consolidado de preceptos y principios básicos que se hacen efectivos a través de la misma Constitución Política, como carta magna de nuestra legislación y con una serie de leyes y tratados internacionales, que tienen el carácter y fuerza de ley por su ratificación en Nicaragua, así pues, entre ellos encontramos los siguientes preceptos:



◆ 6.1 EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA:

Encontramos en ella, en su Título IV, de Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense, en su Capítulo I de Derechos Individuales, en su artículo 23: “El derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana.” En el artículo 25 inc. 2: “Toda persona tiene derecho a su seguridad.” En su artículo 26 inc. 3: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y reputación.” En su artículo 27, inherente a la igualdad: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección.” En su artículo 33: “Nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento legal.” En su artículo 36: “Toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas, ni a tratos crueles, inhumano o degradantes.” Sin dejar por fuera uno de los más importante al relacionarse con este tema es el artículo 39: “En Nicaragua el Sistema Penitenciario es humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad. Por medio del sistema progresivo promueve la unidad familiar, la salud, la superación educativa, cultural y la ocupación productiva con



remuneración salarial para el interno. Las penas tienen un carácter reeducativo¹².” Analizando lo anterior, resalta una protección por parte del Estado, a los derechos humanos y garantías fundamentales de la persona, por el simple hecho de serlo, derechos y garantías que no serán violentados por el hecho de ser privados de libertad, por el contrario, lo que conlleva es una función reeducadora para la correcta y exitosa reinserción del individuo privado de libertad a la sociedad y que la misma obtenga de él un beneficio y no un perjuicio.

◆ **6.2 EN LA LEY DE RÉGIMEN PENITENCIARIO Y EJECUCIÓN DE LA PENA DE NICARAGUA, LEY No. 473:**

Penitenciarios Nacionales reconocen la dignidad de las personas y dicha ley establece las normativas y reglas generales para el funcionamiento de los Sistemas Penitenciarios Nacionales, regulando las actividades de éstos, conforme a la ejecución de las penas y las medidas cautelares. Según esta ley la ejecución de las penas tiene como fin primordial la reinserción y reeducación del privado de libertad a las actividades de la sociedad. Las actividades reguladas por la presente ley están en completa concordancia con los principios y garantías fundamentales expresadas en la norma superior. La Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la

¹².- Constitución Política de la República de Nicaragua, arto. 23; 25; 26; 27; 33; 36; 39.



Pena tiene competencia en todo el territorio nacional, ejerciendo funciones de control, reeducación y seguridad penal en el tratamiento de los internos. El objetivo fundamental de la presente ley es la reeducación del interno para la reintegración a la sociedad. Los Sistemas el respeto de los derechos humanos de todos los privados de libertad¹³.

7. CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE HUMANIZACIÓN

DE PENAS:

Entre las normas de carácter personal, resalta la tendencia mundial a la protección del ser humano y a la dignidad fundamental de su existencia, así como también una creciente preocupación de los organismos multinacionales hacia la protección de los derechos humanos y garantías fundamentales. Es importante destacar las siguientes normas:

◆ 7.1 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS:

Fue aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en la que se destacan los siguientes artículos:

¹³.- Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena de la República de Nicaragua. Ley 473.



Arto. 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Arto. 5: Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Arto. 7: Todos los habitantes son iguales ante la ley.

Arto. 11: Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en que se hayan asegurado todas las garantías para la defensa¹⁴.

◆ 7.2 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS:

Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de octubre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976, entre sus artículos señalaremos:

Arto. 6: El derecho a la vida es inherente a la persona humana, es protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

Arto. 7: Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en particular nadie será sometido, sin su libre consentimiento, a experimentos médicos o científicos.

¹⁴.- Declaración Universal de Derechos Humanos, arto. 3; 5; 7; 11.



Arto. 8: Nadie será sometido a la esclavitud o a la servidumbre. Nadie estará obligado a realizar trabajos forzados. No podrá ser interpretado en el sentido que prohíbe el cumplimiento de una pena de trabajos forzados, impuesta por tribunal competente, en los países en que ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión acompañada de trabajos forzados.

Arto. 9: Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a prisión o detención arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo a los procedimientos establecidos en ésta.

Arto. 10: Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano: c) El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los penados¹⁵.

El pacto establece un Comité de Derechos Humanos, que estudia los informes de los Estados y lo transmite al Consejo Económico y Social de la Naciones Unidas (ECOSOC).

¹⁵.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arto. 6-10.



◆ 7.3 RESOLUCIÓN 1503:

Es otro instrumento que actúa como protección de las Naciones Unidas, fue aprobado a través del Consejo Económico y Social (ECOSOC), que brinda atribuciones para tratar las violaciones groseras a los Derechos Humanos, donde quiera que éstas se hayan cometido, sea cuales fueran las víctimas y establece un procedimiento de examen al efecto, que consiste en la realización de un estudio preliminar por una comisión de cinco miembros pertenecientes a la Sub-comisión de Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías.

La resolución examina un cuadro persistente de violaciones manifiestas y groseras de derechos humanos y no los casos particulares.

La resolución, entonces, protege todos los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mientras que el Protocolo Facultativo, se limita a los derechos civiles y políticos amparados por el pacto internacional, analizando así casos particulares¹⁶.

¹⁶.- Resolución 1503.



◆ 7.4 CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES:

Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Diciembre de 1984. Entiende por Tortura a todo acto en el que se infrinja la ley internacionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con el fin de obtener de ellas o de un tercero información o confesión, de castigarlo por un acto que haya cometido de intimidar o de coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean provocados por un funcionario público o persona en el ejercicio de sus funciones y no serán torturas los dolores o sufrimientos que sean causados por sanciones legítimas o inherentes a éstas.

Todo Estado parte, velará por incluir una educación sobre la prohibición de las torturas en la formación profesional del personal encargado de aplicar la ley, sea Civil, Militar, Médico, funcionarios públicos o de custodia y tratamiento de personas arrestadas, detenidas o en prisión.



Los Estados velarán por la existencia de mecanismos pronto e imparciales de investigaciones contra actos de tortura y por la posibilidad de toda persona que alegue ser sometida a tortura de presentar una queja y velará a su vez porque la legislación garantice a la víctima de la tortura la reparación y el derecho de indemnización justa y adecuada, incluido los medios de rehabilitación.

Todos los Estados se comprometen a prohibir en los territorios bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y que no lleguen a ser torturas.

La Convención constituye un comité contra la tortura compuesto de expertos de gran integridad moral y conocimientos en derechos humanos.

Los Estados partes presentarán al comité por intermedio del secretario General de las Naciones Unidas las medidas que hayan adoptado para efectivizar el compromiso.



Los informes son examinados por el comité, en el que pueden hacer observaciones y serán transmitidas al Estado parte, que pueden responder las observaciones.

Se admiten también las comunicaciones estaduales por violaciones de otro estado, solo a condiciones de reciprocidad del reconocimiento de la competencia del comité. Si no se arriba a soluciones interestatales el comité ofrece sus buenos oficios de acuerdo a las reglas procesales de la convención.

Según el Arto 22. todo Estado parte puede declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del comité para recibir y examinar comunicaciones que sean enviadas por personas sometidas a su jurisdicción, o en su nombre, que aleguen ser víctimas de una violación y de acuerdo con las normas de la convención.

El comité presentara un informe anual sobre sus actividades a los Estados partes y la Asamblea General de las Naciones Unidas¹⁷.

¹⁷.- Convención Internacional Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, arto. 22.



◆ 7.5 CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE.

Fue aprobada en la Novena conferencia Internacional Americana de Bogota, Colombia 1948, entre sus artículos destacaremos:

Arto 1. Todo ser humano tiene Derecho a la Vida, a la Libertad, y a la Seguridad de su persona.

Arto 2. Todas las personas son iguales ante la ley.

Arto 7. Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia tiene derecho a la protección y ayudas especiales.

Arto 17. Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de Derecho y obligaciones y a gozar de los derechos civiles y fundamentales.

Arto 25. Nadie puede ser privado de su libertad si no en los casos y según las formas establecidas por las leyes preexistentes. Todo individuo que haya sido



privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la misma y a ser juzgado sin dilación injustificada, o de lo contrario ser puesto en libertad.

Tiene derecho también a un trato humanitario durante la privación de libertad.

Arto 26. Se presume que todo acusado es inocente hasta que se pruebe que es culpable¹⁸.

◆ 7.6 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

Suscrita en el curso de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 de sus normativas seleccionamos:

Arto 4. Derecho a la Vida: toda persona tiene Derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general desde el momento de la concepción.

No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.

¹⁸.- Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arto. 1; 2; 7; 17; 25; 26.



Arto 5. Derecho a la integridad personal:

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral.
2. Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
3. La pena no puede trascender la persona del delincuente.
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo circunstancias excepcionales y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenados.
5. Cuando los menores puedan ser procesados deben de ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especiales, con la mayor celeridad posible para su tratamiento.
6. Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

Arto 6. Prohibición de la esclavitud y servidumbre:

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud y servidumbre.



2. Nadie puede ser constreñido a ejecutar un trabajo forzado, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. el trabajo forzoso no puede afectar a la dignidad, ni a la capacidad física o intelectual del recluso.

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio:

- ◆ los trabajos o servicios que se exijan normalmente a la persona reclusa en cumplimiento de una sentencia o resolución formal por la autoridad judicial. tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que las efectuarán no puede ser puesto a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado.

Arto 7. Derecho a la libertad personal: Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención.



Arto 8. Garantías judiciales: toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

Arto 10. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenado sin sentencia firme por error judicial.

Arto 25. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la amparen contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución la ley o la presente Convención.

La Convención Americana crea dos métodos de protección de los Derechos que consagran:

- ◆ Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- ◆ Corte Interamericana de Derechos Humanos.



La Comisión compuesta de 7 miembros de alta autoridad moral y conocimientos en Derechos humanos y conformada de acuerdo a las normas del instrumento internacional, tendrá por funciones promover la observancia y defensa de los Derechos Humanos estimulando la conciencia de los pueblos, formulando recomendaciones preparando estudios, solicitando informes a los gobiernos, atendiendo consulta de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos y rindiendo un informe anual a la asamblea general de esa organización.

Cualquier persona o grupo de personas, o entidades no gubernamentales pueden presentar a la comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de la Convención.

Los Estados partes pueden reconocer la competencia de la comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado alegue que otro Estado parte a incurrido en violación de los Derechos Humanos establecidos en la convención.

La corte interamericana ésta compuesta de 7 jueces, elegidos con lo estipulado en la convención, pero solo los Estados partes y la comisión tienen



derecho a someter un caso a la corte, previo reconocimiento de la competencia de la corte por el Estado parte. La corte también tiene competencia para reconocer en la interpretación y aplicación de las disposiciones de la convención¹⁹.

● 7.7 REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS DE LAS NACIONES UNIDAS.

El objeto de las reglas no es describir en forma detallada un sistema penitenciario modelo, sino únicamente, imperándose en conceptos generalmente admitidos en nuestros tiempos y en los elementos esenciales de los regímenes contemporáneos menos perjudiciales, los principios y las reglas de una buena organización penitenciaria.

La idea original fue concebida por la Comisión Internacional Penal y Penitenciaria que preparó una serie de reglas que la sociedad de las Naciones Unidas hizo suyas en 1934 y que al ser disueltas la sociedad en 1951 y nacer Naciones Unidas se presentaron entonces al primer congreso sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente en Ginebra de 1955. el congreso aprobó por unanimidad las reglas y recomendó su

¹⁹.- Convención Americana de Derechos Humanos, artos. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 25.



aprobación al Consejo Económico y Social (ECOSOC). Tras ello el ECOSOC aprobó las reglas tal como lo hiciera el congreso²⁰.

²⁰. - Reglas Mínimas Para Tratamientos de Reclusos de las Naciones Unidas



CAPITULO III

RESOCIALIZACION Y REINSERCIÓN

1. PENOLOGÍA:

Al comenzar este capítulo hemos de referirnos a la Penología, como rama o ciencia del Derecho Penal que se ocupa de la Aplicación y Ejecución de las Penas, y de forma general del castigo y tratamiento del individuo privado de libertad.

La discusión sobre su propia existencia, diferenciada de la *ciencia penitenciaria* vinculada al Derecho Penitenciario, estriba en que trata en muchas ocasiones aspectos que son objeto central de estudio de la anterior. Sin embargo, otros sectores doctrinales le atribuyen un carácter propio y específico, al entender que no solo actúa en el terreno propio de la aplicación de la pena, en ámbito exclusivo de la prisión, sino que también de esa misma aplicación en los casos en el que el individuo privado de libertad cumple la sanción fuera del recinto penitenciario.

Su denominación procede del término Ingles *Penology*, aparecido en 1834 de la mano de Francis Liebre, quien la concibió en el sentido amplio que



mantiene sus defensores como disciplina autónoma. Posteriormente y a través de todo el siglo XIX se limita su contenido por influencia de la doctrina Francesa, a las penas privativas de libertad, confundándose así con la *Ciencia Penitenciaria*.

Al desarrollarse en la práctica contemporánea los tratamientos de libertad y semi-libertad de los condenados, ha vuelto a adquirir interés. Desde este punto de vista puede definirse como: **“la disciplina que tiene por objeto el estudio de los diversos medios de represión y prevención directa del delito, en sus métodos de aplicación y de la actuación post-penitenciaria”**.

Forman parte de su contenido toda clase de penas y medidas de seguridad, así como los medios de ejecución y aplicación de las mismas. Dentro de ellas ocupa un sector muy importante la *Ciencia Penitenciaria*, concebida como rama de la **Penología** que se ocupa de la pena de prisión, de sus métodos de ejecución y aplicación y de toda la problemática que la vida en prisión plantea. Los modernos medios de tratamiento en libertad trascienden de lo puramente penitenciario, pero quedan dentro de los límites de la **Penología**.



Aparece ésta, concebida del modo expuesto como ciencia del tratamiento de los individuos infractores de las normas Penales.

Con este contenido y límite se configura como una disciplina de naturaleza mixta, que no encuentra acomodo ni entre las ciencias normativas, ni entre la causal- explicativas. Concebida de esta forma, le son aplicables las tres notas que, según García Basalo, caracterizan su naturaleza: **Jurídica en su Base, Pedagógica en sus Medios y Social en su Fin.** Esto explica que la **Penología** utilice en la investigación de su objeto métodos propios de otras disciplinas, en particular los de las ciencias del hombre y los propios de las ciencias sociales. En cuanto a las normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y medidas de seguridad, forman parte de su contenido y la **Penología** habrá de utilizar para su estudio también el método jurídico²¹.

2. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS:

Se han establecidos Principios Básicos a nivel Internacional para el tratamiento de los Reclusos, adoptados y proclamados por la Asamblea

²¹.- [http://: www. Mailxmail.com](http://www.Mailxmail.com)



General de la Naciones Unidas en su resolución 45/111, del 14 de Diciembre de 1990²², entre los que se establecen los siguientes:

1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merece su dignidad y valor inherentes de seres humanos.
2. No existirá discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otros factores.
3. Sin perjuicio de lo que antecede, es necesario respetar las creencias religiosas y los preceptos culturales del grupo a que pertenezcan los reclusos, siempre que así lo exijan las condiciones en el lugar.
4. El personal encargado de las cárceles cumplirá con sus obligaciones en cuanto a la custodia de los reclusos y la protección de la sociedad contra el delito de conformidad con los demás objetivos del Estado y con su responsabilidad fundamental de promover el bienestar y el desarrollo de todos los miembros de la sociedad.

²² .- Principio Básico Para el Tratamiento de Reclusos. Documento de las Naciones Unidas.



5. Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los Derechos Humanos y las Libertades fundamentales consagradas en la Declaración Fundamental de los Derechos Humanos y cuando el Estado de que se trate sea parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como los demás derechos estipulados en los otros instrumentos de las Naciones Unidas.

6. Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana.

7. Se trata de abolir o restringir el uso del aislamiento en celdas de castigo como sanción disciplinaria y se alentará su abolición o restricción.

8. Se crearán condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales remuneradas y útiles que faciliten su reinserción en el



mercado laboral del país, que les permita contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio.

9. Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el país, sin discriminación por su condición jurídica.

10. Con la participación y ayuda de la comunidad, de instituciones sociales, y con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se crearán condiciones favorables para la reincorporación del ex recluso a la sociedad en las mejores condiciones posibles.

11. Estos principios que anteceden serán aplicados en forma imparcial y equitativamente conforme, a cada caso.



3. TRABAJO DEL INDIVIDUO PRIVADO DE LIBERTAD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO DE OCCIDENTE:

El trabajo penitenciario es utilizado conjuntamente con la educación como los pilares y herramientas fundamentales que posee la Institución Penitenciaria para concretar la reforma, reeducación y resocialización del individuo.

El trabajo en Sistema Penitenciario existe desde el momento en que la privación de libertad fue tomada como pena y aun antes, pero en la antigüedad la función laboral en prisión tenía cuestiones económicas y retributivas. En este sentido puede ejemplificarse el periodo de la cárcel como lugar de trabajos forzosos a favor del Estado.

Posteriormente la función y finalidad del trabajo penitenciario tornó de la retribución a ser un medio para la pretendida, resocialización, reeducación, readaptación o reorientación del penado. Esta posición del trabajo como medio del perfeccionamiento pretende una doble función utilitaria, por un lado en beneficio del interno para el proceso resocializador y por el otro el beneficio del establecimiento y del Estado ya que, tal y como es plasmado en el arto. 88 del Código Penal que establece; “no contará como abono legal el



*tiempo de trabajo, realizado a favor del Estado o en Obras Públicas a favor de la comunidad*²³, de esta manera se va reduciendo costos y ayudando a mantener la disciplina interna en procuración de la incorporación de los valores agregados a la economía nacional.

El trabajo en los Sistemas Penitenciarios no puede cabalmente ser integrado a la economía nacional a merito que la falta de inversión y equipos, no logrando así que el producido de los establecimientos coincida con los requerimiento de la sociedad libre ni del comercio moderno.

Nuestra legislación ha consagrado el Principio del Trabajo, como parte del tratamiento y en tal sentido aquel debería comprender la formación y capacitación del interno para un oficio, arte o profesión que pudiere serle útil al egresado de los Sistemas Penitenciarios Nacionales, sin embargo, las condiciones estructurales y la falta de empleo para todos los privados de libertad conllevan a transformar en letra muerta este principio fundamental.

En el Sistema Penitenciario de Occidente el trabajo penitenciario es una recompensa que otorga la administración de acuerdo con la conducta y la

²³ .- Código Penal de la República de Nicaragua.



disciplina del interno y que en nada atiende a la función de tratamiento que pretendidamente le es asignada.

Los problemas del trabajo en el Sistema Penitenciario de Occidente suelen resumirse en:

- ✓ Falta de ocupación plena de la población penal.
- ✓ Falta de formación profesional o capacitación de los internos en el Sistema Penitenciario acorde al trabajo que van a desempeñar.
- ✓ Deficiencias de la organización, tecnología y estado del trabajo.
- ✓ Falta de finalidad social reintegracionista del trabajo en el Sistema Penitenciario.

4. EDUCACIÓN EN EL SISTEMA PENITENCIARIO DE OCCIDENTE:

La educación es conjuntamente con el trabajo la otra gran herramienta formal que la legislación pretende utilizar para resocializar al individuo. En tal



sentido se pretende no solo la inserción social sino la elevación personal y cultural del interno y de acorde con lo establecido en la Constitución Política de la República de Nicaragua en su art. 116; *“tiene como objetivo la formación plena e integral del nicaragüense, dotarlo de una conciencia crítica, científica y humanísta; desarrollar su personalidad y el sentido de su dignidad y capacitarlo para asumir las tareas de interés común que demanda el progreso de la nación; por consiguiente, la educación es factor fundamental para la transformación y desarrollo del individuo y la sociedad”*.

“El Estado promueve la participación de la familia, de la comunidad y del pueblo en la educación.....” De acorde con la Constitución en su art. 118, por lo que el Sistema Penitenciario, como una Institución Nacional, debe de garantizar la participación de la familia en el proceso de educación de los privados de libertad.

Existe obligatoriedad de otorgar a los internos privados de libertad enseñanza primaria, no pudiendo ser otorgada coactivamente, su negativa de parte del condenado implicará la calificación de falta de conducta y su consecuencia será la inmediata pérdida de beneficios; tal y como lo contempla el art. 121 de la Constitución Política de la República de Nicaragua: *“El acceso a la*



educación es libre e igual para todos los nicaragüense. La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria en los centros del Estado.....”

En los últimos años y sobre todo con el advenimiento de la democracia se han instalado algunos programas de ayuda y cooperación de parte de los internos que poseen mayores estudios hacia los internos con un menor grado de educación.

5. LA RESOCIALIZACION:

En el desarrollo del marco legal de la pena privativa de libertad aparece el concepto de la readaptación social o resocialización del individuo privado de libertad, basado en la teoría de corrección del delincuente de la Iglesia Católica.

La resocialización se ha pretendido justificar y legitima bajo tres grandes ejes conceptuales²⁴:

1. Teorías que entienden a la resocialización como un proceso de reestructuración individual del penado.

²⁴ .- [http://: www.firefoxdocument.com](http://www.firefoxdocument.com)



2. Teorías que entienden a la resocialización como un correctivo del proceso socializador deficitario de la estructura social.

3. Teorías que entienden a la resocialización como un proceso de socialización de índole jurídica.

5.1 Las teorías que entienden a la **resocialización como un proceso de reestructuración individual del penado**; responden en un principio a la idea de corrección moral del privado de libertad, como parte de un proceso de readaptación del penado y con la finalidad formal de reinsertarlo socialmente.

Con el advenimiento del pensamiento positivista, donde la delincuencia pasa a ser reconocible como anormalidad, como la diversidad en el hecho biológico, el proceso resocializador se transforma en el remedio social útil para aliviar la enfermedad que representa el delito. Posición que se repetirá con el advenimiento del positivismo social, el positivismo psíquico y el positivismo espiritualista.



Estas posiciones, pretendidamente curativa de deformaciones y/o faltas fisiológicas, sociales, psíquicas o espirituales permiten someter a los privados de libertad a mediadas curativas por tiempo indeterminado que invariablemente tienen por eje el trabajo y disciplina interna.

Los propios representantes de la corriente **correccionalista** consideran el término resocialización como un poco adecuado para el proceso a que se vería sometido el privado de libertad, ya que el problema no es una cuestión social o estructural sino que responde a problemas de constitución personal, por lo que el proceso puede denominarse de mejora o de rehabilitación.

Este tipo de concepción de la resocialización o rehabilitación social pretende un cambio estructural de la personalidad del individuo infractor de la norma penal que prescinde del hecho delictivo que originó la detención. La corrección que se aplica al privado de libertad debe pretender no solo su reinserción social, sino especialmente la aniquilación de las causas del delito, haciendo sentir que la pena que se le aplicó era justa e indicada para sacarle el mal que le aquejaba.



Ante la posición resocializadora del tratamiento, éste ostentaba como último recurso y ante el fracaso del proceso del tratamiento resocializador la neutralización del individuo, mediante su reclutamiento permanente o eliminación física.

Respecto a la neutralidad del reo lo que en otras épocas significó deportaciones o reclusiones perpetuas, se ha convertido en la actualidad en tratamientos de alteraciones cromosomitas, cirugía cerebral o castración.

Posteriormente el correccionalismo clásico derivó en una escuela que pretendió encontrar el proceso de resocialización en el sistema educativo. La función de la cárcel no se diferencia de la de la escuela del instituto o la academia, en este caso el penado deberá aprender no solo el error y la forma de subsanar el hecho delictivo, sino la forma del normal proceso completo de educación.

La pedagogía criminal es un proceso que afecta la personalidad del infractor de la norma penal en su conjunto e inevitablemente tiene por sustratos un ser anormal. Este concepto permite al Estado imponer valores y pautas a costa de la autonomía individual.



Para el grupo de teóricos partidarios de asignar a la resocialización una función de **defensa social**, el Estado no solo debe de intervenir para castigar a los infractores de la norma penal (función negativa del Derecho Penal) sino que debería orientar a la defensa positiva de la sociedad.

La defensa social como base de la resocialización pretende reformar la personalidad del delincuente y adaptarlo a las pautas sociales hegemónicas.

En esta concepción, el Estado está absolutamente legitimado para intervenir en la forma que considere conveniente ante la producción de un delito.

El sistema jurídico debe tener no solo una finalidad objetiva de orden o defensa social como un reflejo útil sino una finalidad dominante, directa y sustancial del perfeccionamiento de la sociedad a través de la adaptación, de la mejora y en términos más complejo de la socialización del individuo.

5.2 Las teorías que entienden a la **resocialización como un correctivo del proceso resocializador deficitario de la estructura social**, pretenden girar el ángulo de resocialización colocando en primer plano como objeto del



proceso resocializador a las condiciones que generan la criminalidad en la sociedad, para luego observar la problemática del infractor de la norma penal. Entre ellas mencionaremos las teorías del psicoanálisis de izquierda o Marxistas y de la criminología crítica:

● 5.2.1 Teorías del Psicoanálisis:

Esta corriente pretende encontrar las causas de la criminalidad en la sociedad y la cura del infractor de la norma penal en la superación del sentimiento de culpa social.

La compensación de la culpa no es más que una posición retributiva de la pena. Para los psicoanalistas el hombre tiene una tendencia antisocial siendo el desarrollo vivencial personal el que determina su conducta comunitaria posterior, es decir, la resocialización pretende frenar los impulsos retributivos a la sociedad que se encuentran en la denominada conciencia colectiva.



● 5.2.2 Teorías Marxistas:

Este grupo de teóricos se basa en la postura filosófica Marxista, para la cual el delito no puede explicarse en otra forma que en la oposición a una situación económica y política respecto a los medios de producción. Esta posición no escapa del determinismo al asignar como función excluyente del proletariado la destrucción de la división de clases.

El crimen y el infractor de la norma penal son fenómenos tan normales como el cumplimiento del Derecho, todos son sucesos sociales. En tal sentido la resocialización solo puede procurar un cambio estructural en la esfera social.

● 5.2.3 Teorías de la Criminología Crítica:

Nuevas posiciones teóricas dentro del contexto criminológico y denominada criminología crítica, nueva criminología, criminología alternativa, se basaron en la predica del Labelling Approach de Becker y Lemert, teniendo por sentado que es la sociedad la que etiqueta como desviados determinados actos y asigna tal rotulación en particular solamente a determinados individuos.



Dentro de estas nuevas corrientes la preocupación debe centrarse en el estudio de las instancias de control social que rotulan al sujeto y en la aplicación de que aquellas hagan la agencia de control social.

Todo pensamiento correctivo en base a un déficit estructural de la sociedad encierra el peligro de exculpar totalmente al sujeto de la comisión del delito.

5.3 Los teóricos enrolados en la postura que **entiende a la resocialización como un proceso de socialización de índole jurídico**, entiende que el infractor de la norma penal es un ser normal e integrante del cuerpo social, en tanto posee valores diferentes de las normas dominantes y generalmente aceptada.

En esta línea de análisis la finalidad última de la **resocialización es a la reinserción del privado de libertad a la sociedad**, respetando los valores individuales y pretendiendo demostrarle la bondad del modelo de valores subyacentes.



De una parte, por medio de este proceso no puede aspirarse a otra cosa que no sea la reincorporación del recluso a la comunidad jurídica; de otra, la pena a de evitar influir directamente sobre la personalidad del condenado.

La resocialización en este contexto trata de **evitar la reincidencia en el delito y en su inserción al modelo de valores de la sociedad.**

Entre las críticas que se han formulado a estas posiciones estipula que:

- No existe un programa específico de reinserción social, lo cual lo torna en una mera declaración teórica.
- Aun cuando no es la finalidad del sistema, la pena tiene un elemento retributivo.
- Es imposible identificar desviación con violación de la normativa legal

La resocialización legal tiene por aspiración central la vida futura sin delito en responsabilidad social, entendiendo por tal una vida libre de pena en el futuro.



La teoría desconoce el estudio de la problemática social del delito y no se preocupa por los caminos a seguir para arribar a una resocialización legal. Otro elemento crítico que puede centrarse en fatigamente la resocialización legal del infractor de la norma penal solo puede conseguirse por medios represivos e intimidatorios.

La resocialización como plan de vida sostiene que la pena no solo debe defender a la comunidad del infractor de la norma penal, sino ofrecerle a éste alternativas a su comportamiento criminal, así el concepto de resocialización se confunde con el concepto de sociabilización.

Existe una contradicción respecto a la realización de una elección de vida cuando se impone un modelo autoritario de tratamiento.

La resocialización terapéutica entiende que es un tratamiento terapéutico dirigido a la integración social del privado de libertad. Es una tendencia humanizadora de la pena que cobra importancia en la medida que disminuye la necesidad de prevención general dicha terapia implica el reconocimiento de ciertas anomalías en la personalidad del infractor de la norma penal.



La concepción resocializadora de la pena ha pretendido que el trabajo y la educación penitenciaria sean las herramientas concretas para lograr la transformación moral, la reinserción social y la domesticación de los privados de libertad.

Estos elementos de tratamientos (trabajo y educación), son medios de control social por una parte y formas de mantener el control interno del Sistema Penitenciario, por el otro. En el mejor de los casos, en la prisión se crean internos que pretenden adherir a los valores-actitudes del sistema, ello solo al objeto de disfrutar los privilegios del mismo, aun sin compartirlo.

Para Antón Oneca, ha tenido gran significado los antiguos precedentes de que goza la idea resocializadora, objeto esencial de un tratamiento reestructurador de la personalidad del culpable, moción que es modernamente entendida como rehabilitación interno-inhibidora del reo que le sitúa ante la ley como un ciudadano más, respetuoso de la misma: la definitiva superación de un derecho retributivo y vengativo se ha consumado, en el postulado de que la venganza no puede ser el fin lícito de la pena²⁵.

²⁵ .- García Valdés, Carlos; Teoría de la Pena. Pág. 167



Los criterios modernos sobre el tratamiento penitenciario, en el que intervienen las Ciencias de la Conducta, podrían resumirse en las notas de voluntariedad y respeto a los Derechos Constitucionales de los penados. Por consiguiente, se derivan las consecuencias de tales premisas, las cuales son: la ausencia de coactividad y el rechazo de los métodos psíquico quirúrgicos (castración terapéutica o lobotomía) en el mismo²⁶.

6. CARÁCTER LEGAL DE LA PENA EN NICARAGUA:

Una vez recibida la condena, mediante sentencia firme tal y como lo plasma el código Penal²⁷ en su arto. 73 y el Código de Procedimiento Penal²⁸ en su arto. 85, las penas no podrán aplicarse sino en virtud de sentencia ejecutoriada, la que deberá ser dictada al infractor de la norma penal dentro de tercero día contado a partir de la audiencia, el juez dictará su resolución en base al arto. 1 del Código de Procedimiento Penal que establece el principio de legalidad, donde nadie podrá ser condenado a una pena o sometido a una medida de seguridad, sino mediante una sentencia firme dictada por un tribunal competente y en un proceso conforme a los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política de la República de

²⁶ .- Op. Cit. Teoría de la Pena. Pág. 169; 170.

²⁷ .- Op. Cit. Código Penal de la República de Nicaragua.

²⁸ .- Código de Procedimiento Penal de la República de Nicaragua.



Nicaragua, en su Título IV, Capítulo I, referente a los derechos individuales que posee el ser humano²⁹, entre los que se contemplan la inviolabilidad del derecho a la vida, la cual es inherente a la persona humana, el derecho que tiene toda persona a su seguridad, al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica, a la igualdad ante la ley y a su igual protección, a no ser objeto de ningún tipo de discriminación, a la libertad de conciencia, pensamiento y religión, a expresar sus pensamientos en público y privado, a no estar obligado a hacer lo que la ley no mande ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, a no ser detenido o sometido a prisión arbitraria, ni a ser privado de su libertad, salvo las causas fijadas por la ley, a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. En virtud de lo anterior la finalidad del proceso consagrado en el Código de Procedimiento Penal en su Título Preliminar de Principios y Garantías Procesales³⁰, tendrá por fin solucionar los conflictos de naturaleza penal y restablecer la paz jurídica y la convivencia social armónica, mediante el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad de los acusados, la aplicación de las penas y medidas de seguridad necesarias.

²⁹ .- Op. Cit. Constitución Política de la República de Nicaragua.

³⁰ .- OP. Cit. Código de Procedimiento Penal de la Republica de Nicaragua.



Dicho proceso debe realizarse con apego al respeto de la dignidad humana que establece el Código de Procedimiento Penal en su arto. 3; en el proceso penal toda persona debe ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, con protección de los derechos que de ella deriva y en condiciones de igualdad. De lo antes dicho, con estricto apego al principio acusatorio contemplado en el arto. 10 del Código de Procedimiento Penal, donde no existe proceso penal alguno sin acusación formulada por el Ministerio Público, esto es, sin acusación no hay proceso, no hay sentencia.

Con base a la sentencia recaída al infractor de la norma penal la pena no trascenderá de la persona del condenado tal y como lo mandata la Constitución Política de Nicaragua en su arto. 37 y ésta, o sea la pena, no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la misma favorezca al reo, lo anterior, en concordancia con el arto. 74 del Código Penal vigente.

Tal y como se trató en el capítulo II de esta investigación, y por no estar demás recalcar que la Constitución Política de Nicaragua establece en su arto. 39 el carácter humanitario del sistema penitenciario, el cual tiene por objetivo la transformación del interno, sobre el cual ha recaído una sentencia



firme y condenatoria, para reintegrarlo a la sociedad, con correlación directa a lo estipulado en esta ley suprema, que en el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los Derechos Humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de los Derechos Humanos.

De lo anterior se deduce que es obligación por ministerio de ley que el Juez de Distrito de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, una vez que la sentencia se encuentra firme y conforme a lo estipulado en el Código de Procedimiento Penal en su arto. 407 en el que ejercerá las atribuciones siguientes:

- Hacer comparecer ante si a los condenados o a los funcionarios del sistema penitenciario, con fines de vigilancia y control.



- Mantener, sustituir, modificar o hacer cesar las penas y las medidas de seguridad así como las condiciones de su cumplimiento.
- Visitar los centros de reclusión, por lo menos una vez al mes con el fin de constatar el respeto de los derechos fundamentales y penitenciarios de los internos y ordenar las medidas correctivas que estimen convenientes.
- Resolver, con aplicación de procedimientos previstos para los incidentes de ejecución, las peticiones o quejas que los internos formulen con relación con el régimen y tratamiento penitenciario en cuanto afecte su derecho.
- Resolver, por vía de recurso, las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias.
- Aprobar las sanciones de ubicación en celdas de aislamiento por más de 48 horas.
- Dar seguimiento y controlar el cumplimiento de las penas no privativas de libertad.



En el caso específico de los Juzgados de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de León es Constatado que dicho Juez mantiene un trato constante con el Sistema Penitenciario y los privados de libertad.

Otro punto importante a recalcar es lo plasmado en el Título II, Capítulo Único de la coordinación institucional del Código de Procedimiento Penal, en el que se da la creación de una Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal de la República de Nicaragua, la que estará conformada, tal y como lo plasma en su art. 415 del Código de Procedimiento Penal de la siguiente manera:

- Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
- Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
- Fiscal General de la República.
- Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.
- Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
- Director de la Defensoría Pública.
- Director Nacional de la Policía Nacional.
- Director de la Auditoría Militar.
- Director del Instituto de Medicina Legal.



- Director del Sistema Penitenciario Nacional.

Esta Comisión elegirá anualmente de su seno a un Coordinador y a un Secretario y se reunirá trimestralmente en forma ordinaria y extraordinariamente cuando así lo considere.

Dicha comisión tendrá las atribuciones que le confiere el Código de Procedimiento Penal en su arto. 416, las siguientes:

- Coordinar acciones interinstitucionales encaminadas a garantizar la implementación del proceso de reforma Procesal Penal, la efectiva capacitación de los operadores del sistema y facilitar los medios para el desempeño de sus respectivas funciones.
- Intercambiar criterios acerca de propuestas de políticas institucionales que demande la modernización del sistema de justicia Penal y mejore la eficiencia del servicio que prestan al país.
- Evaluar periódicamente las acciones institucionales referidas en el inciso primero e informar a la ciudadanía, en conjunto o por separado sobre los resultados obtenidos.
- Formular recomendaciones en materia Política Criminal.



- Cualquier otra que contribuya con la realización efectiva de la justicia Penal.

7. VISIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE OCCIDENTE:

El Sistema Penitenciario Nacional es una entidad de carácter civil, de seguridad pública, organizada jerárquicamente, constituida por una Dirección General del Ministerio de Gobernación cuya estructura, organización y competencia está determinada por la Ley N° 290 "Ley de Organización , Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo", Publicada en la Gaceta N°. 102 del 3 de Junio de 1998 y su Reglamento.

En nuestro país, el Sistema Penitenciario Nacional fue constituido como un Centro de Tratamiento y Rehabilitación para los privados de libertad a partir del año 1980, anterior a esta fecha los Centros Penales eran cárceles sin ninguna política de tratamiento, es más sin normas de registro estandarizadas. Cada cárcel tenía su propia forma de control.



Una vez que es constituido el Sistema Penitenciario Nacional, como una Institución Humanitaria, encargada de brindar un tratamiento especial a los privados de libertad, acorde a lo establecido en las reglas mínimas internacionales, tratados y otros instrumentos relacionados al quehacer penitenciario, se definen sus objetivos:

1. La reeducación del interno para reintegrarlo a la sociedad.
2. La ejecución de las sanciones penales y las medidas privativas de libertad, dictadas por los Tribunales de Justicia.
3. Promover la unidad familiar, la salud y la ocupación productiva.

Aunque aún no existe un marco legal aprobado, nuestra labor se basa en una serie de normativas dispersas que regulan el quehacer penitenciario.

Nuestra Constitución Política establece en su Arto. 39, lo siguiente:

"En Nicaragua el Sistema Penitenciario es humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para integrarlo a la sociedad. Por medio del sistema progresivo promueve la unidad familiar, la salud, la superación educativa, cultural y la ocupación productiva con remuneración salarial para el interno. Las penas tienen un carácter reeducativo..." Este precepto fue el punto de partida para diseñar el programa de tratamiento en el proceso de rehabilitación del privado de libertad, a fin de prepararlo como



una persona útil en su incorporación a la sociedad.

8. ¿Qué es Tratamiento Penitenciario en el Sistema de Occidente?

El tratamiento Penitenciario consiste en el conjunto de actividades organizadas con el objetivo de desarrollar una actividad de auto-respeto, responsabilidad individual y social del interno con respecto a su familia y a la sociedad en general, logrando con ello el alcance de los fines de la reeducación y reinserción social de los internos. Dentro de las acciones de tratamiento, las principales son:

1. La educación en sus diferentes modalidades (alfabetización, primaria, secundaria) y gestión de becas de estudio para acceder a la Universidad.
2. Capacitación Técnica.
3. El Trabajo Productivo.
4. Recreación, Cultura y Deporte.
5. Acceso a biblioteca.
6. Atención Psicológica.
7. Atención médica especializada.



8. Promoción de la Unidad Familiar a través de visitas ordinarias, especiales y conyugales.
9. Comunicación con el mundo exterior, etc.

9. CONSIDERACIONES DEL JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y VIGILANCIA PENITENCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE LEÓN.

Para el Dr. Sergio Berrios Vallejos, Juez de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria del departamento de León, considera: *“La humanización de penas desde un punto de vista de ejecución de la pena, y la misma tiene lugar en las figuras de los diferentes beneficios legales y algunas otras figuras que ya están establecidas en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal, como es el caso de la Condena Condicional, Libertad Condicional, Libertad Vigilada, así como la ejecución diferida y los diferentes incidentes, por los cuales la ley considera motivos para que los privados de libertad, por alguna razón, puedan gozar de estos beneficios o ventajas; es una forma de suavizar las penas interpuestas, sin embargo hay que diferenciar en el caso de los incidentes por enfermedad y la ejecución diferida, las cuales tienen muchas similitudes pero se diferencian en que uno suspende la ejecución de la pena, en cambio el otro continua corriendo en su*



computo. La ejecución diferida tiene la particularidad para efecto en estado de embarazo o mujeres con niños menores de un año en estado de lactancia, en el cual se suspende la ejecución de la pena y la otra figura planteada en esta situación en el caso de los incidentes por enfermedad, se da cuando las personas privadas de libertad poseen múltiples enfermedades y que lógicamente, en detrimento de su salud se le concede que cumpla la pena en otro lugar en el cual continua corriendo el computo”.

En base a lo plasmado en la Constitución Política de la República de Nicaragua, en su arto. 39 acerca del carácter humanitario de los sistemas penitenciarios el referido Juez, explica:

“En el sentido de protección, cuidado, atención, la forma de dirigirse a los privados de libertad y hacerlos convivir en toda esa comunidad de privados, si poseen un trato humanitario, en rasgos generales, sin embargo no se puede dejar por fuera que por las múltiples limitaciones económicas, los problemas de infraestructura y el asinamiento posiblemente se alcance una vulnerabilidad en algunos derechos que poseen los privados de libertad, pero obedece principalmente al bajo presupuesto asignado a los Sistemas Penitenciarios, pero no implica que por el asinamiento u otros problemas los oficiales o los superiores de éstos, estén tratando de manera deshumanizada



a los privados de libertad, el problema principal radica en la falta de materiales e infraestructura, que pueden mejorar la situación de estos privados de libertad y que ya no está en mano de los Jueces resolverla, sino que es una situación que se vive en todo el país. En el caso específico, por ejemplo, del Sistema Penitenciario de Occidente, hay celdas acondicionadas para ocho personas, en las cuales actualmente se encuentran catorce o quince personas, como consecuencia directa de la sobrepoblación existente”.

En el caso específico de la reeducación y reinserción, considera:

“Tiene que ver con la conducta que adopte el privado de libertad y la posición que ellos estimen más conveniente para pasar ese tiempo que dura la condena en el Sistema Penitenciario, y al salir le traiga más beneficio a éste, a su familia y por ende a la sociedad, por lo que tendremos a una persona restaurada, con una conducta distinta y que no va a salir a infringir la norma, sino que va a contribuir a mejorar la calidad de la seguridad del país, sin embargo en el Sistema Penitenciario de Occidente en medio de todas sus limitaciones, se hacen esfuerzos desde el punto de vista de mejorar la educación a través de convenios con el Ministerio de Educación para que los privados de libertad puedan culminar sus estudios a través de programas especiales, pero lógicamente dependerá del interno el aprovechar dichos



programas, por lo que habrán algunos que no muestren interés y se dediquen a cumplir en un completo encierro el tiempo de la condena, demostrando así un resentimiento hacia las autoridades judiciales, así también con las de auxilio judiciales, ya que ellos no admiten que fueron ellos los que tuvieron el error.

Hay también, sin embargo muchos que se involucran, en su gran mayoría, a las prácticas de diversos deportes y disciplinas artísticas, y en Nicaragua por ser un estado laico hay diversas religiones, por lo que habrán muchos privados de libertad que se involucran en estos programas religiosos de distintas creencias, respetando siempre la pluri-religiosidad que existe en Sistema Penitenciario de Occidente, por lo que realizan estos grupos diferentes programas de estudios religiosos”.

En el caso del trabajo el Dr. Berrios continúa expresando:

“Por su propia naturaleza, el trabajo es voluntario, sin embargo es parte integral del tratamiento reeducativo que se lleva para la reinserción social del privado de libertad, por lo que forma parte de todo el universo de reeducación y lleva como única finalidad que la persona que sale del Sistema Penitenciario posea o haya tenido una verdadera reinserción social. En cuanto al abono de la pena por trabajo realizado en Sistema Penitenciario, es



necesario que se entienda conforme lo establecido en el art. 88 del Código Penal, donde solo se considerará como abono a la pena el trabajo que se lleve a efecto durante la realización del juicio, donde todavía no ha sido condenado, entonces solo se abonará el tiempo trabajado hasta la conclusión del juicio. En el caso de que la persona desempeñe un trabajo utilitario, es decir, que realice diversas actividades en el Sistema Penitenciario que ayuden al mantenimiento del mismo, éste planteamiento es muy criticado por algunos fiscales, que mantienen la postura de que no se debe de tomar en cuenta como abono ese trabajo, ya que no es una obra del Estado ni de utilidad pública para la sociedad, sino que es una obligación del privado de libertad hacer esas tareas, criterio que no es compartido por dicho Juez, ya que perjudica el derecho que le da la ley al privado de libertad”.

En el caso de la efectividad de los diferentes proyectos impulsados por las diversas instituciones para disminuir la sobrepoblación del Sistema Penitenciario de Occidente y contribuir a la humanización en el trato de los privados de libertad, dicho Juez considera:

“Ha habido algunos proyectos encaminados a este fin, pero por lo general piden la extinción de la ejecución de la pena, por cumplimiento de la misma, en base a la Mora Penitenciaria, alegando que una persona que fue



condenado, por ejemplo a cinco años y lleva dos y medio cumplidos, el mismo ya terminó su condena, porque desde que llegó ha sido incorporado al trabajo Penitenciario, contrario a lo referido en el art. 88 del Código Penal, que como ya sostuvo anteriormente solo abonará el tiempo de trabajo realizado mientras duró el juicio. Lo más idóneo sería intentar el trámite de algún beneficio, ya que la intención es la misma, al final lo que se pretende es sacar a la persona del Sistema Penitenciario y de esta manera lo hará a través de una figura que te de la oportunidad de hacerlo mediante ley, por lo que la efectividad de esos proyectos de Moras Penitenciarias no han tenido mucho impacto”.

En cuanto al funcionamiento de la Comisión Interinstitucional referida en el art. 415 del Código de Procedimiento Penal, el mismo Dr. Berrios, considera:

“La Comisión Interinstitucional realmente funciona y él como parte de la misma ha empujado en los diversos niveles de la misma de que en León debe construirse un Sistema Penitenciario, destinado a atender dicha zona, lo que sería una forma inmediata y propicia para aprovechar la reinserción de la persona al salir del Sistema Penitenciario, reintegrándose a su familia y sociedad, ya que se tendrá menos presión y una atención más personalizada,



que es un factor determinante en la humanización y tratamiento de privados de libertad, ya que el Sistema Penitenciario de Occidente esta colapsado y no hay una tendencia a disminuir la sobrepoblación Penitenciaria, sino a aumentar, en una forma de espiral que tiende a crecer”.



CONCLUSIONES

NOSOTROS EN NUESTRO TRABAJO MONOGRÁFICO HEMOS

LLEGADO A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

- Actualmente la misión de nuestro Derecho sustantivo Penal vigente, es tratar de impedir que se cometan delitos y alcanzar eficazmente este objetivo, lo que no se logra con altas penas privativas de libertad ni con una ejecución rigurosa de las misma, pues de un lado, el ciudadano se puede apartar del delito al saber amenazada tal conducta con una sanción que va a cumplirse, a lo que se le denomina Principio de Certeza de la Pena, sin dependencia de la medida o extensión temporal y severidad de ésta; y por el otro la prisión clásica y tradicional no solo es inadecuada en la lucha antidelictiva, sino que opera como estímulo de la sociedad al tener presente dos datos experimentales: El encierro riguroso produce en el sujeto más idoneidad social de la poseída al entrar en el Sistema Penitenciario y a nadie se le puede enseñar a vivir en sociedad manteniéndole apartado de la misma.



- No es determinante el tiempo de la condena que se le da a un individuo privado de libertad para que éste se reintegre a la sociedad, sino que este reintegro dependerá de la actitud que el mismo tome y de el carácter humano, educativo y resocializador de la pena.

- El Sistema Penitenciario de Occidente cumple con el carácter humanitario establecido en la Constitución Política de Nicaragua y en sus leyes generales, pero hay que tener en cuenta que dicho carácter sobrevive con las limitaciones económicas y de infraestructura, lo que hace dificultoso un trato más humanitario.

- Actualmente existe una sobre población en el Sistema Penitenciario de Occidente por lo que dificulta que en el mismo se de un trato determinado a cada individuo privado de libertad, además de la carencia de programas específicos que integren al individuo directamente a la sociedad, una vez que estos salen del Sistema Penitenciario no se le brinda un seguimiento post-institucional que garantice su reinserción.

BIBLIOGRAFÍA

- **Bengoa, Bayardo. Derecho Penal Uruguayo.**
- **Castellón Barreto, Ernesto (q.e.p.d) y Hernández León, Luís. Apuntes de Derecho Penal.**
- **Código Penal de la Republica de Nicaragua.**
- **Código Procesal Penal de la Republica de Nicaragua.**
- **Constitución Política de la Republica de Nicaragua.**
- **Convención Americana de Derechos Humanos.**
- **Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.**
- **Convención Internacional Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles.**
- **Declaración Universal de Derechos Humanos de Las Naciones Unidas.**
- **García Valdez, Carlos. Teoría de la Pena.**
- **[http://: www.dicciobibliografia.com](http://www.dicciobibliografia.com).**
- **[http://: www.firefoxdocument.com](http://www.firefoxdocument.com).**
- **[http://: www.mailxmail.com](http://www.mailxmail.com).**
- **Ley de Régimen Penitenciario de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria Ley 473.**
- **Morales Silva, Oscar. Sistemas Penitenciarios en Nicaragua.**
- **Mayorga Ramírez, Francisco. Tesis La Pena.**

- **Pactos Internacional de Deberes Civiles y Políticos de Las Naciones Unidas.**
- **Principios Básicos Para el Tratamiento de Reclusos de la Naciones Unidas.**
- **Reglamento a la Ley 473, Ley de Régimen Penitenciario de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria.**
- **Resolución 1503 de Las Naciones Unidas.**



JÓVENES PRIVADOS DE LIBERTAD REALIZANDO LABORES ARTÍSTICAS EN PINTURA



JÓVENES PRIVADOS DE LIBERTAD RECIBIENDO EDUCACIÓN EN EL SISTEMA PENITENCIARIO DE OCCIDENTE.



PRIVADOS DE LIBERTAD ASISTIENDO A PROGRAMAS DE ESTUDIOS



PRIVADOS DE LIBERTAD EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.



PRIVADOS DE LIBERTAD REALIZANDO TRABAJOS DE EBANISTERÍA.

LEY DEL REGIMEN PENITENCIARIO Y EJECUCIÓN DE LA PENA

LEY No. 473, Aprobado el 11 de Septiembre del 2003

Publicado en La Gaceta No. 222 del 21 de Noviembre del 2003

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo Nicaragüense que:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En uso de las facultades;

HA DICTADO

La siguiente:

LEY DEL REGIMEN PENITENCIARIO Y EJECUCIÓN DE LA PENA

CAPITULO I

DEL OBJETO, EJERCICIO Y NATURALEZA DEL SISTEMA PENITENCIARIO

Artículo 1.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer las normativas y reglas generales para el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional y regular la actividad d0e éste en la ejecución de las penas y medidas cautelares privativas de libertad, tales como control, reeducación, seguridad penal y la reinserción social de los privados de libertad.

La ejecución de la pena tiene como fin primordial la reeducación y reinserción del privado de libertad a las actividades de la sociedad.

Artículo 2.- Ejercicio de la actividad del Sistema Penitenciario Nacional. La actividad del Sistema Penitenciario Nacional se ejercerá de conformidad con las garantías y principios establecidos en la Constitución Política y demás leyes de la República, reglamentos de la materia, el Código de Conducta y los instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por Nicaragua.

Artículo 3.- Actuación del Sistema Penitenciario Nacional. El Sistema Penitenciario Nacional es la institución del Estado, en cuanto a organización y estructura de éste y la sociedad nicaragüense, con facultades expresas para la

ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por las autoridades judiciales del país y el fin primordial es la reeducación y reinserción del privado de libertad a las actividades de la sociedad.

La actividad del Sistema Penitenciario Nacional se ejerce exclusivamente por medio de sus jefes, oficiales y el personal profesional designado para el ejercicio de la guarda, custodia y seguridad de los privados de libertad.

Artículo 4.- Naturaleza del Sistema Penitenciario Nacional. El Sistema Penitenciario Nacional es un cuerpo armado, de naturaleza civil, profesional, apolítico, apartidista, no deliberante, organizada jerárquicamente y con rango de Dirección General dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Gobernación, con estructura, organización y competencia definida en la Ley N° 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, número 102 del 3 de Junio de 1998; su Reglamento y por lo dispuesto en la presente Ley.

Le corresponde al Ministro de Gobernación, coordinar, dirigir y administrar el Sistema Penitenciario Nacional a través del Director General que al efecto nombre por medio de Acuerdo Ministerial. Su uniforme, distintivos, escudo, bandera y lema son de uso exclusivo.

Artículo 5.- Ámbito de competencia del Sistema Penitenciario Nacional. El Sistema Penitenciario Nacional tiene su ámbito de competencia en todo el territorio nacional con funciones de control, reeducación y seguridad penal. Su autoridad se ejerce por medio del director general, quien es nombrado de entre sus miembros activos de máxima jerarquía por el Ministro de Gobernación.

La Dirección del Sistema Penitenciario Nacional tiene su sede principal en la ciudad de Managua, pudiendo establecer centros penales en cualquier lugar del país, todo de conformidad a las normativas técnicas y las directrices administrativas pertinentes, según sea el caso.

CAPITULO II

DE LOS OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y FUNCIONES

Artículo 6.- Objetivos del Sistema Penitenciario Nacional. Son objetivos fundamentales del Sistema Penitenciario Nacional los siguientes:

1. La ejecución de las sentencias penales y las medidas cautelares privativas de libertad, dictadas por los tribunales de justicia;

2. La reeducación del interno para su reintegración a la sociedad ; y
3. Promover la unidad familiar, la salud y la ocupación productiva del interno.

Artículo 7.- Ejercicio y fundamento del Sistema Penitenciario Nacional. El Sistema Penitenciario Nacional se fundamenta en el reconocimiento de la Dignidad de la persona y el respeto a los derechos humanos. En ningún caso los internos serán sometidos a torturas, penas, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se prohíbe el maltrato físico o psicológico y cualquier otro procedimiento que atente en contra de la dignidad humana del interno.

Artículo 8.- Principio de igualdad. En el ejercicio de la actividad penitenciaria, queda prohibida la discriminación para los internos por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político o religioso, raza, sexo, edad, idioma, opinión, origen, estrato social y capacidad económica.

Artículo 9.- Separación de procesados y condenados a causa del sexo. Las internas mujeres bajo proceso de detención y/o condenadas, deberán de permanecer en centros penales distintos a los que albergan a los hombres, debiendo ser el personal de custodia del orden interior del mismo sexo, salvo el personal de seguridad y traslado.

Artículo 10.- Centros de atención especial para menores. En los casos de los menores infractores, cuya edad oscile entre los 15 y 18 años de edad, se les procurará una atención provisional o definitiva en centros especializados dirigidos y administrados bajo la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional.

Artículo 11.- Cooperación. Durante el proceso de la ejecución de la pena o de las medidas cautelares privativas de libertad, le corresponde al Sistema Penitenciario Nacional la facultad de poder o no convenir la cooperación y asistencia con las diferentes asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, en el diseño y ejecución de los diferentes programas educativos, culturales, promoción ambiental y de salud, formación técnica y trabajos prácticos, así como otras actividades encaminadas al rescate y fortalecimiento de los valores humanos, morales y las actividades religiosas.

Artículo 12.- Internos y finalidad del Sistema Penitenciario Nacional. Para los fines y efectos de la presente Ley se consideran internos a todas las personas privadas de libertad, sea por encontrarse bajo detención provisional o por estar sentenciadas al cumplimiento de una pena.

En todos los casos, la actividad del Sistema Penitenciario Nacional tiene por finalidad la readaptación social integral de los privados de libertad que se encuentren internos en el Sistema, en beneficio de la familia y la sociedad nicaragüense.

Artículo 13.- Autoridad de aplicación y sus funciones. Para los fines y efectos de la presente Ley, se designa como autoridad de aplicación de ésta, a la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, siendo sus funciones las siguientes:

1) En el ámbito de las políticas públicas sobre el Sistema Penitenciario podrá:

1.1 Proponer al Ministro de Gobernación las políticas penitenciarias y proporcionarle asesoría en la ejecución de las mismas;

1.2 Ejecutar las políticas penitenciarias;

1.3 Presentar al Ministro de Gobernación, proyectos y propuestas de reformas legales y sociales vinculadas al tratamiento del interno, así como a la prevención del delito en el interior de los centros penitenciarios;

1.4 Promover el intercambio de cooperación técnica y científica a nivel nacional e internacional en asuntos relacionados al sistema penitenciario;

1.5 Coordinar y supervisar las diversas actividades que desarrollen dentro del Sistema Penitenciario Nacional, las diferentes instituciones del Estado nicaragüense;

1.6 Cualquier otra que le faculte la ley y su reglamento;

2) Con relación a los internos:

2.1 Hacer cumplir las sanciones penales y medidas cautelares de privación de libertad dictadas por las autoridades judiciales competentes;

2.2 Presentar a los internos ante los tribunales de justicia, según sea el caso, y garantizar su custodia, todo de conformidad por lo establecido por la autoridad competente;

2.3 Promover la aplicación, control y ejecución de programas de reeducación para los internos, con el objetivo de su reinserción gradual a la sociedad por medio del Sistema Progresivo, tanto en los centros penitenciarios ordinarios y/o especiales;

2.4 Promover la asistencia, la participación y la unidad familiar de los internos durante el proceso de tratamiento y rehabilitación;

2.5 Cuidar por la vida, integridad física y moral, así como la seguridad y custodia de los internos dentro de las instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional y durante el proceso de las diligencias que realizare fuera de las instalaciones del Centro Penitenciario;

2.6 Garantizar la seguridad interna y externa de los centros penitenciarios ordinarios y especiales, así como la disciplina y control sobre la población penitenciaria de acuerdo con el reglamento interno respectivo.

2.7 Levantar y mantener la información legal relativa a los internos actualizada, así como facilitar el acceso a ésta cuando la soliciten las autoridades judiciales, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Comisión Pro Derechos Humanos y la Paz de la Asamblea Nacional, la Policía Nacional o cualquier otro órgano competente del Estado, así como las diferentes organizaciones de derechos humanos jurídicamente reconocidas y establecidas en el país y los familiares de los internos o sus defensores.

2.8 Promover, coordinar, ordenar y supervisar la participación y apoyo de las diferentes entidades públicas, sean estas nacionales o extranjeras, públicas o privadas; y de la sociedad civil, así como de aquellas personas interesadas a título particular en el proceso de asistencia y atención post penitenciaria.

3) En lo relativo a la organización interna:

3.1 Administrar y controlar la actividad penitenciaria, evaluar su funcionamiento de conformidad con las directrices establecidas por el Ministerio de Gobernación;

3.2 Administrar y controlar el proceso de selección, ingreso, formación, capacitación, rotación, especialización y promoción en la carrera penitenciaria del personal penitenciario;

3.3 Proponer , administrar, ejecutar y controlar el presupuesto asignado al Sistema Penitenciario Nacional de conformidad a la ley de la materia y a las normativas específicas establecidas por el Ministerio de Gobernación y la Contraloría General de la República;

3.4 Divulgar todo lo relativo con la política y programas desarrollados por la administración del Sistema Penitenciario Nacional;

3.5 Establecer el sistema administrativo, técnico y financiero que brinde efectiva garantía al funcionamiento de los diferentes centros penitenciarios del país, todo de conformidad con las normas establecidas en la presente Ley y las diferentes instancias de dirección del Ministerio de Gobernación;

3.6 Organizar y ejecutar los diferentes mecanismos de controles estadísticos de la población penal; y

3.7 Cualquier otro que al respecto establezca la presente Ley y los reglamentos específicos.

CAPITULO III

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y SUS FUNCIONES

Artículo 14.- Estructura del Sistema Penitenciario Nacional. El Sistema Penitenciario Nacional está organizado y estructurado de la forma siguiente:

1. La Dirección General, integrada por un Director General, dos Subdirectores Generales y un Inspector General.

El Director General es el superior jerárquico y máxima autoridad del Sistema, a quien se le subordinan todos los demás funcionarios y empleados del Sistema Penitenciario Nacional;

2. Las Especialidades Nacionales;

3. Los Órganos Nacionales de Apoyo; y

4. Las Direcciones Penitenciarias.

Artículo 15.- Funciones del Director General del Sistema Penitenciario Nacional. El Director General del Sistema Penitenciario Nacional es el encargado de ejecutar la política penitenciaria establecida por el Gobierno de la Republica, debiendo prestar estricto cumplimiento a la Constitución Política, la presente Ley y su Reglamento, así como cualquier otra ley vinculada a estas materias y los Acuerdos y Resoluciones Ministeriales.

Para tal efecto, al Director General se le establecen las siguientes funciones:

1) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política, el ordenamiento jurídico del Estado nicaragüense, así como los acuerdos, tratados y convenios

internacionales relativos a la materia y demás disposiciones de carácter general que regulen la actividad penitenciaria;

2) Dirige el proceso de selección, por medio del concurso por oposición, para el nombramiento, promoción y remoción del personal penitenciario, de conformidad a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento;

3) Administrar los recursos técnicos y materiales y de la ejecución presupuestaria de conformidad a lo establecido en Presupuesto General de la República;

4) Supervisar el cumplimiento y desempeño del personal del Sistema Penitenciario Nacional;

5) Girar las instrucciones y disposiciones generales necesarias para el funcionamiento de la institución;

6) Presentar al Ministro de Gobernación, para su respectiva aprobación, los planes, programas y proyectos que vaya a desarrollar el Sistema Penitenciario Nacional;

7) Dirigir, supervisar y controlar la actividad de los diferentes órganos administrativos del Sistema Penitenciario Nacional;

8) Informar de manera sistemática y constante al Ministro de Gobernación sobre todas las actividades que se realicen en el Sistema Penitenciario Nacional y de aquellos acontecimientos, que por su naturaleza sean de relevancia;

9) Realizar, previa consulta con el Ministro de Gobernación, las coordinaciones con los diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales, públicos o privados, nacionales o extranjeros, con el objetivo de facilitar la ejecución de los objetivos y políticas penitenciarias;

10) Garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del personal penitenciario, todo de conformidad a lo establecido en la legislación vigente;

11) Presentar al Ministro de Gobernación informe trimestral, semestral y anual de todas las actividades realizadas en el Sistema Penitenciario;

12) Proponer las mejoras y reformas que considere necesarias para el mejor funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, así como corregir las

irregularidades del servicio penitenciario, de acuerdo con la presente Ley y su Reglamento y cualquier otro reglamento específico que se establezca;

13) Proponer al Ministro de Gobernación el otorgamiento de reconocimientos y condecoraciones para el personal que labore en el Sistema Penitenciario Nacional y personalidades que se destaquen en el apoyo al trabajo del Sistema;

14) Otorgar los reconocimientos y condecoraciones propias del Sistema Penitenciario Nacional que se encuentren autorizadas y reguladas por normativas internas del Sistema;

15) Representar legalmente al Sistema Penitenciario Nacional, con funciones de Apoderado General de Administración;

16) Determinar los locales que serán destinados al alojamiento de privados de libertad para el cumplimiento y ejecución de pena.

17) Cualquier otra función que le establezca la presente Ley.

Artículo 16.- Otros Cargos y Auxilio al Director General del Sistema. Para el ejercicio del cargo y sus funciones, el Director General del Sistema Penitenciario Nacional, dispondrá del respaldo y auxilio de dos Subdirectores Generales y del Inspector General, quienes son los inmediatos y principales colaboradores en cualquier asunto inherente a la gestión del Sistema Penitenciario Nacional.

Las funciones de los Subdirectores Generales son aquellas que les delegue el Director General del Sistema Penitenciario Nacional.

Artículo 17.- Funciones del Inspector General. El Inspector General tiene la función de fiscalizar, inspeccionar e informar al Director General sobre las actuaciones de los funcionarios, empleados y demás personal del Sistema Penitenciario Nacional, el cumplimiento de las normativas penitenciarias, así como del cuidado del funcionamiento y prestigio de la Institución.

También podrá hacer propuestas y recomendaciones con relación a las medidas y sanciones disciplinarias que se les aplicarán a los miembros del Sistema Penitenciario Nacional que incurran en faltas o delitos.

Artículo 18.- Consejo Directivo Nacional. Crease el Consejo de Dirección Nacional, como el órgano de asesoría y consulta del Sistema Penitenciario Nacional y que está integrado por el Director General, los dos Subdirectores Generales, el Inspector General, los directores de especialidades nacionales,

los directores de los órganos de apoyo y los directores de los centros penitenciarios del país.

Este Consejo de Dirección Nacional sesionará por lo menos una vez al mes de forma ordinaria, pudiendo reunirse de forma extraordinaria cuando a criterio del Ministro de Gobernación o del Director General sea considerado necesario.

Artículo 19.- Consejo Técnico. El Consejo Técnico es el órgano asesor del Director General, integrado por los Directores de Especialidades Nacionales y cualquiera de los otros jefes, que a criterio del Director General, sea considerado necesario designar para la integración y funcionamiento de éste.

Artículo 20.- Especialidades Nacionales. Las Especialidades Nacionales ejercen funciones rectoras de asesoría, definición de normativas generales de carácter nacional; teniendo la responsabilidad de la supervisión, control, análisis y evaluación de los diferentes programas que se desarrollen en el Sistema, para tal efecto, deberán tener una estrecha relación funcional con los órganos de ejecución.

Son Órganos de Especialidades Nacionales las siguientes:

- 1) Dirección de Reeducción Penal;
- 2) Dirección de Control Penal; y
- 3) Dirección de Seguridad Penal.

Artículo 21.- Funciones de la Dirección de Reeducción Penal. La Dirección de Reeducción Penal tiene la función de brindar asesoría, planificación, control y evaluación de los diferentes programas y actividades de rehabilitación social destinados a la reinserción del interno a las actividades productivas, de su familia y de la sociedad.

Artículo 22.- Funciones de la Dirección de Control Penal. La Dirección de Control Penal tiene la función especial de asesorar, planificar, controlar y evaluar todo lo relativo al registro, control administrativo y estadístico de cada uno de los internos vinculados al ingreso, egreso, expedientes penitenciarios y toda la situación jurídica de los internos.

Artículo 23.- Funciones de la Dirección de Seguridad Penal. La Dirección de Seguridad Penal tiene la función de asesorar, planificar, controlar y evaluar las actividades y planes de seguridad de las instalaciones penitenciarias y el

movimiento diario de los internos fuera de las instalaciones físicas del Sistema Penitenciario Nacional.

Artículo 24.- Integración de las Direcciones. La definición de la integración de estas Direcciones será establecida en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 25.- Órganos Nacionales de Apoyo y sus funciones. Para los fines y efectos de la presente Ley y su Reglamento, son Órganos Nacionales de Apoyo los siguientes:

- 1) División Administrativa Financiera;
- 2) División de Personal;
- 3) División de Información, Planificación y Estadística;
- 4) División de Escuela para Estudios Penitenciarios;
- 5) División de Asesoría Jurídica;
- 6) División de Auditoría Interna;
- 7) División de Servicios Médicos; y
- 8) División de Proyectos e Inversiones.

Los Órganos Nacionales de Apoyo tienen la función de asesorar, asistir, capacitar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Institución, en beneficio de los privados de libertad y los funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional.

Artículo 26.- Direcciones Penitenciarias. Las Direcciones Penitenciarias son órganos de ejecución, que tienen bajo su responsabilidad la administración, control y resguardo de los privados de libertad o internos remitidos por las autoridades judiciales competentes para el cumplimiento de las sanciones penales y medidas cautelares privativas de libertad.

Están integradas por estructuras homólogas de las especialidades y órganos de apoyo nacionales. Estas Direcciones ejecutan las actividades penitenciarias en materia de rehabilitación, seguridad y control penal.

Los responsables de estas áreas se subordinan al director del Centro, el que a su vez se subordina al Director General del Sistema Penitenciario Nacional.

Artículo 27.- Autorización a los funcionarios para el uso de armas de fuego en el ejercicio de sus funciones. Los funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional, en general, como parte integrante del sistema de seguridad de la nación, quedan autorizados para el uso de armas de fuego en el ejercicio de sus funciones.

El procedimiento para el uso y empleo de la fuerza y armas de fuego se establecerá en el Reglamento de la presente Ley, y que se limita por el principio de racionalidad y proporcionalidad de acuerdo a las exigencias de las circunstancias, tales como la defensa propia o de terceros, cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves, en los casos de fuga de una persona sometida a custodia o detención.

La portación de armas de cualquier tipo en el interior del penal queda limitada salvo por las circunstancias de motín, secuestro, fuga y la preservación de las instalaciones del Centro.

CAPITULO IV

DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Artículo 28.- Coordinaciones. Para el logro de los fines y objetivos de la presente Ley, las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, deberán de establecer las respectivas coordinaciones con las autoridades judiciales que corresponda, el o los representantes del Ministerio Público, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Oficina de Ejecución y Vigilancia de las Sanciones Penales a los Adolescentes, el Patronato Nacional para los Privados de Libertad, la Policía Nacional y las diferentes agencias o asociaciones promotoras de los derechos humanos de interés.

Artículo 29.- Colaboración. Las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, deben brindar la respectiva colaboración e información que resulte necesaria, a solicitud de las autoridades referidas en el artículo 28 de la presente Ley, así como lo dispuesto en el artículo 216 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Artículo 30.- Asociaciones civiles y religiosas para el apoyo del Sistema. La Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional y las diferentes asociaciones civiles y religiosas que se formen para el apoyo del trabajo penitenciario, deberán orientar sus planes y proyectos para ser desarrollados con las instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, procurando la reincorporación del privado de libertad a la sociedad.

CAPITULO V

DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA Y LOS CENTROS PENITENCIARIOS

Artículo 31.- Centro penitenciario. El centro penitenciario es un establecimiento administrativo y funcional que tiene su propia organización jerárquica. Cada centro está formado por los departamentos o unidades que faciliten la distribución y separación interior de los internos, de acuerdo a los criterios establecidos en la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 32.- Dependencias y ambientes del Sistema. Los centros penitenciarios procurarán un conjunto de dependencias y ambientes que puedan llegar a permitirle al interno una convivencia adecuada y el alcance de los fines y objetivos propuestos.

Los ambientes básicos de los que debe disponer son los siguientes:

1. Área para brindar atención médica y psicológica;
2. Escuela, biblioteca e instalaciones deportivas y recreativas;
3. Dormitorios, baños, patios e instalaciones sanitarias;
4. Talleres y lugares para la actividad productiva;
5. Comedor, cocina, salones para visitas, así como área para los encuentros conyugales;
6. Cualquier otra instalación que resulte necesaria para el cumplimiento y ejecución de la pena, así como las actividades conexas del privado de libertad y de las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional.

Artículo 33.- Unidades de atención a las privadas de libertad en condiciones de pre y post natal. Los centros penitenciarios, dentro de sus instalaciones, procurarán contar con ambientes o unidades especiales para la atención a las privadas de libertad que se encuentren en la etapa de pre y post natal. Se procurará que el parto se realice en un establecimiento asistencial de salud fuera del centro penal, en los casos en que el niño nazca dentro de las instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional no debe de hacerse constar esta circunstancia en su partida de nacimiento, sino que se tendrá como lugar de nacimiento el nombre del municipio en donde este ubicado el centro.

En los casos en que el centro penitenciario no tenga las instalaciones especiales para el período pre y post natal, las privadas de libertad deben ser ubicadas bajo el régimen de convivencia familiar hasta que el niño o niña cumpla los seis meses de edad propicios para la lactancia materna. Este artículo será para las privadas de libertad donde la ley penal no contempla ningún tipo de fianza o beneficio.

En los otros casos se respetará la convivencia familiar hasta que el niño o niña cumpla los dos años de edad.

Las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional deben de realizar los trámites pertinentes de forma escrita, de éstos se debe llevar un registro en forma de expediente por caso, del que se deben dejar copia como soporte ante cualquier suceso futuro.

Artículo 34.- Locales para el alojamiento de los privados de libertad. Los locales para el alojamiento de los privados de libertad, así como aquellos en que donde se desarrolle la vida comunitaria de éstos, deben tener garantizados el espacio físico necesario, así como las instalaciones higiénico sanitarias básicas para la satisfacción de las necesidades de éstos, el acondicionamiento para la circulación de aire suficiente, la iluminación natural y artificial de todas las áreas; condiciones se deben ajustar a los recursos materiales del Sistema y los factores climáticos del país.

Artículo 35.- Centros especiales para adolescentes. Son centros especiales de detención provisional y de internamiento para adolescentes, aquellos que se establezcan para éstos de conformidad a lo establecido en el artículo 227 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Artículo 36.- Remisión de los privados de libertad. Para el cumplimiento de los objetivos y fines de la presente Ley, las personas condenadas con privación de libertad o los acusados y apremiados que estando detenidos hayan sido puesto a la orden de autoridad judicial competente deberán ser remitidos al centro penal que designe la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional. Los requisitos para la recepción de detenidos serán las sentencias, prisión preventiva, o sentencia condenatoria, órdenes o mandamientos judiciales respectivos y la remisión de detenidos.

Artículo 37.- Confección de expediente del privado de libertad. A los ciudadanos privados de libertad, al momento de su ingreso al Sistema Penitenciario Nacional, se les confeccionará un expediente penitenciario, en el

cual se le deberá de levantar toda la información relativa a su situación procesal y penitenciaria, dicho expediente deberá de contener lo siguiente:

1. Nombre y apellidos y demás generales de ley, número de cédula;
2. Causa o causas judiciales y autoridad judicial competente que conoció y resolvió, acompañado de copia de la sentencia del judicial;
3. Registro dactilar y fotos de frente y de perfil del privado de libertad; y
4. Acumulación cronológica de las diligencias sucesivas de carácter penal, procesal y penitenciario que se practiquen.

Artículo 38.- Chequeo médico. A cada uno de los ciudadanos privados de libertad, al momento de su ingreso a los centros penitenciarios, deberá de practicárseles un chequeo médico con el fin de verificar y establecer su estado de salud físico y mental.

En los casos en que el privado de libertad presente algún tipo de lesión, se debe de informar de inmediato a la autoridad judicial correspondiente para que esta adopte las medidas pertinentes de conformidad con la ley procesal penal vigente.

Artículo 39.- Clasificación de los privados de libertad. La clasificación de los privados de libertad en los diferentes centros penitenciarios se efectúa atendiendo los criterios siguientes:

- 1) Por situación legal:
 - 1.1 Acusados; y
 - 1.2 Condenados.
- 2) Por sexo:
 - 2.1 Masculino; y
 - 2.2 Femenino.
- 3) Por edad:
 - 3.1 Adolescentes, entre 15 y 18 años no cumplidos;
 - 3.2 Jóvenes, entre 18 y 21 años;

3.3 Adultos.

4) Por patología física o psíquica, que imposibilite su permanencia en el régimen común de la población penal.

5) Por régimen penitenciario:

5.1 Adaptación;

5.2 Laboral;

5.3 Semi abierto;

5.4 Abierto; y

5.5 Convivencia Familiar.

Artículo 40.- Reglamento de los centros penitenciarios. Al ingresar un ciudadano en calidad de privado de libertad en cualquiera de los centros penitenciarios, se le dará a conocer los reglamentos respectivos y se le explicará de forma sencilla y clara, cuáles son sus derechos y obligaciones, así como las normativas disciplinarias existentes y los procedimientos para formular peticiones y quejas.

En los casos en que los privados de libertad sean ciudadanos extranjeros, las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional deben de informar por escrito a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores para que estos notifiquen a los representantes diplomáticos del país del interno.

Artículo 41.- Registro y requisa. Cuando un ciudadano privado de libertad ingrese a un centro penitenciario, serán registrados y requisados todas sus pertenencias, objetos de valor y dinero, de conformidad al reglamento específico, debiendo prestársele el debido respeto a su dignidad humana.

El dinero, objetos de valor y demás prendas propias que le sean retiradas, se depositarán en lugar destinado exclusivamente para tal fin por las autoridades del centro penitenciario, hasta ser entregadas al familiar o persona que indique el privado de libertad o su entrega al interno hasta su excarcelación.

Al momento del retiro de los objetos requisados se debe de elaborar un acta de ocupación que debe de firmar el interno y de la cual se le debe de entregar una copia al privado de libertad o a su familiar o persona que este designe. La entrega se debe de realizar en presencia del interno.

Artículo 42.- Destino de valores y objetos requisados. En los casos en que el privado de libertad se de a la fuga o cuando este fallezca, todos los valores y objetos requisados que aún permanezcan en el centro penitenciario, deben de ser entregados a sus familiares; en caso de no ser reclamados por la familia en el plazo de seis meses, todos los valores y objetos pasan a ser propiedad del centro penitenciario correspondiente, para ser utilizados en beneficio de los demás privados de libertad.

Artículo 43.- Separación en caso de enfermedad. En los casos en que el privado de libertad llegase a presentar signos de enfermedad mental o cualquier enfermedad infecto- contagiosa, el médico del centro penitenciario debe de separarlo del resto de la población penal y sin mayor trámite deberá de informar al director del centro, quien a su vez debe dar cuenta al juez para que este proceda de acuerdo al Código Penal vigente.

Artículo 44.- Información a la familia. En los casos de enfermedad grave o muerte del privado de libertad, las autoridades del centro penitenciario deben de informar de inmediato a los familiares de éste o sus allegados, trámite que deberá de realizarse de conformidad a los procedimientos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 45.- Libertad del interno. La libertad del interno únicamente podrá realizarse por medio de orden escrita librada por la autoridad judicial competente, quien deberá dirigir la orden al director del centro penitenciario quien sin mayor trámite y dilación procederá a la excarcelación del interno, salvo que éste tuviere otras causas o penas pendientes.

En los casos en que la Asamblea Nacional otorgue indulto o amnistía, bastará la presentación de la ley o del decreto legislativo al director del centro penitenciario, por medio del cual se le concede al privado de libertad el perdón para su reinserción a la sociedad y las actividades productivas.

Artículo 46.- Otorgamiento de beneficios legales. El director del centro penitenciario podrá proponer a la autoridad judicial competente el otorgamiento de los beneficios legales relativos a la suspensión de penas y la libertad condicional en favor de los privados de libertad que reúnan los requisitos establecidos en el Código Penal. El Director General del Sistema Penitenciario Nacional, por medio del Ministro de Gobernación, elaborará al Presidente de la República, listas de privados de libertad para que gocen del beneficio del indulto y su posterior reinserción social.

Artículo 47.- Inspección de los centros penales. Las autoridades judiciales, procuradores penales, los fiscales, procuradores para la defensa de los derechos humanos, diputados, y los funcionarios de la oficina de ejecución y vigilancia de las sanciones penales a los adolescentes, el Inspector General del Sistema Penitenciario, de conformidad con la legislación vigente, en todo tiempo y momento y sin mayor trámite, podrán inspeccionar los centros penitenciarios para verificar si el cumplimiento de las sanciones penales y medidas de privación de libertad se efectúan en la forma y modalidad previstas por la presente Ley.

Artículo 48.- Traslado de los internos condenados. El traslado de un centro penitenciario a otro de los privados de libertad o internos que hayan sido condenados, únicamente podrá ser ordenado por el director general del Sistema Penitenciario Nacional, quien a su vez deberá informar al juez de ejecución de la pena.

En los casos en que los traslados se realicen por medidas de seguridad, se procederá a realizar éste de manera inmediata, debiendo comunicársele al juez en las subsiguientes veinticuatro horas de realizado el traslado.

En cualquier caso, el interno tiene derecho a ser trasladado con todas sus pertenencias, si las tuviere, y que su familia sea informada de inmediato o en ausencia de éstas a las personas que señale el interno.

Artículo 49.- Traslado y conducción de los privados de libertad. Los traslados y conducciones de los privados de libertad o internos ante la autoridad judicial, clínicas, hospitales o cualquier otro sitio a los que deban ser conducidos con autorización expresa, se deben de realizar de tal forma que la seguridad no atente ni perjudique la dignidad y los derechos humanos del privado de libertad ni represente peligro para la sociedad.

Artículo 50.- Seguridad interior de los centros penitenciarios. La seguridad interior de los centros penitenciarios se garantizará a través de la observación directa de los internos, haciendo uso de medios técnicos y auxiliares, recuentos, registros personales, requisas en las pertenencias de éstos, así como controles y requisas en las instalaciones y dependencias del centro. Toda requisas debe de realizarse en presencia del interno.

Artículo 51.- Horario de actividades. Los centros penitenciarios deben de disponer de un horario de actividades de los internos quienes están obligados a cumplirlo y regirse por dicho horario en la realización de todas y cada una de las labores ordinarias y extraordinarias del centro.

Para cualquier actividad que se organice para los privados de libertad o internos, el horario debe ser conocido y cumplido por la totalidad de la población penal.

CAPITULO VI

DEL RÉGIMEN PENITENCIARIO

Artículo 52.- Régimen Penitenciario. El régimen penitenciario es el conjunto de normas jurídicas y legales, establecidas por la Ley y su Reglamento, así como las disposiciones de carácter administrativo para regular las condiciones y circunstancias que norman, tutelan y controlan la convivencia pacífica de la población penal privada de libertad, la disciplina y el orden en los centros penales, con la finalidad de crear el ambiente adecuado para el alcance de los fines y objetivos del Sistema Penitenciario Nacional.

Artículo 53.- Equipo interdisciplinario. Para los efectos de la ubicación, clasificación, tratamiento, progresión o regresión en régimen y otras funciones propias del régimen penitenciario, en cada uno de los diferentes centros penitenciarios del país debe existir un equipo interdisciplinario, con autonomía funcional en el ámbito profesional.

Los privados de libertad o internos podrán presentar peticiones y quejas al juez de ejecución de la pena en relación al régimen y tratamiento penitenciario.

El equipo interdisciplinario se integra de la manera siguiente:

1. El Director del Centro Penitenciario, quien lo preside;
2. El jefe de reeducación;
3. Psicólogos;
4. Trabajadores Sociales;
5. Sociólogos; y
6. Médicos.

Su funcionamiento estará regulado por el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 54.- Sustento de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena se sustenta en el sistema progresivo, el cual constituye un medio y un instrumento para brindar el tratamiento penitenciario.

La clasificación, definición del tipo de seguimiento y la atención que se debe de brindar al privado de libertad o interno; le corresponde al equipo interdisciplinario efectuar la valoración de cada uno de los internos, momento a partir del cual se determinará en que régimen serán ubicados éstos, tomando en consideración los diferentes regímenes establecidos en los artículos 56, 57, 58, 59 y 60 de la presente Ley.

Artículo 55.- Prisión preventiva. Los ciudadanos que ingresen a los diferentes centros penitenciarios con prisión preventiva en calidad de acusados, deberán ser ubicados en ambientes separados de los condenados, para el solo efecto de asegurar su comparecencia ante la autoridad judicial correspondiente durante el proceso y no deberán ser sometidos al Sistema Progresivo.

Artículo 56.- Régimen de adaptación. En el régimen de adaptación deberán ser ubicados aquellos privados de libertad que ingresen condenados por medio de sentencia firme emitida por el judicial que conoció de la causa; los procedentes de prisión preventiva que hayan sido sentenciados y que durante su permanencia en el mismo hayan tenido o demostrado mal comportamiento y los que hayan sido regresados en régimen. Estos permanecen dentro de sus celdas bajo un estricto control y vigilancia, con participación limitada en todas las diferentes actividades artísticas y recreativas del Sistema.

El Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento.

Artículo 57.- Régimen laboral. Los privados de libertad o internos ubicados en el régimen laboral son aquellos que voluntariamente aceptaron el tratamiento reeducativo y han solicitado la integración en las diversas actividades del penal, su ubicación será en las galerías y celdas sin candados y/o de acuerdo a las condiciones físicas del centro penitenciario.

El Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento.

Artículo 58.- Régimen semiabierto. El régimen semiabierto se caracteriza por mantener al privado de libertad o interno bajo un sistema de control y seguridad acorde al grado y nivel de confianza que las autoridades del centro penitenciario tengan en el interno. En este régimen se debe promover y fomentar la responsabilidad del interno y acrecentar la auto confianza; el fin y el objetivo es prepararlo para su ingreso al régimen abierto, ubicándole en áreas internas o externas del centro penitenciario.

El Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento.

Artículo 59.- Régimen abierto. El régimen abierto está fundamentado en la disciplina aceptada voluntariamente por el privado de libertad o interno y la ausencia de controles rígidos, ubicándolos en áreas externas del Centro Penal.

En este régimen se deben de planificar y elaborar programas cuyos objetivos específicos y particulares sean el trabajo, posibilidad de actividades laborales externas o trabajos eventuales en el exterior del centro penitenciario, y otras actividades de carácter educativas o formativas, culturales o cualquier otra, que permitan preparar a los privados de libertad o internos para su reinserción en la sociedad.

El Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento.

Artículo 60.- Régimen de convivencia familiar. El régimen de convivencia familiar se establece como un período previo a la libertad definitiva, su objetivo es fortalecer las relaciones del privado de libertad con su núcleo familiar, preparándolo para su vida social al recuperar su libertad.

En este régimen, los privados de libertad conviven en el exterior del centro penitenciario junto a su familia de origen o adquirida, estos internos aún se encuentran vinculados al Sistema Penitenciario Nacional. Para el control de éstos, se deben establecer los mecanismos de control y registros que al efecto consideren pertinente las autoridades del Sistema para dar garantía plena a quién goce del beneficio de este régimen y cuanto resulte necesario.

Bajo este régimen, se podrán ubicar a los ciudadanos que en general carezcan de antecedentes penales, siempre y cuando los delitos por los cuales hayan sido procesados y condenados no sean aquellos que por su naturaleza no aceptan fianza de ningún tipo.

La incorporación a este Régimen es a propuesta del director general del centro penitenciario, quien debe de coordinar con el juez executor de la pena, en base a los criterios y las recomendaciones del equipo interdisciplinario.

El Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento de este régimen.

Artículo 61.- Permanencia en un régimen. La permanencia o progresión de los privados de libertad o internos condenados en uno u otro régimen está determinado exclusivamente por el estudio y caracterización que de forma

individualizada realice equipo interdisciplinario y el nivel de comportamiento del interno.

Artículo 62.- Progreso y permanencia en cualquier régimen. Para los casos en que el privado de libertad progrese o se mantenga en régimen, es necesario que cumpla con el plazo de permanencia establecido para cada uno de ellos así como la concurrencia favorable de los factores siguientes:

- 1) Valorar los antecedentes penitenciarios;
- 2) Observar buena conducta;
- 3) Participar en las actividades que lo preparen para su reinserción a la sociedad al recuperar la libertad; tener una valoración general sobre sus actitudes, comportamiento y acciones en el centro penitenciario; y
- 4) No tener otras causas pendientes por hechos delictivos dentro del centro penitenciario.

Artículo 63.- Excepción de ubicación. Los ciudadanos que sean privados de libertad a consecuencia de sentencia judicial firme emitida por autoridad competente, deben de ser ubicados en el régimen semiabierto desde el momento de la notificación de la sentencia condenatoria, aún cuando inicialmente hayan sido clasificados en el régimen laboral, en el caso de los privados de libertad o internos condenados a penas correccionales que reúnan, por lo menos, los elementos establecidos en numerales 1) y 4) del artículo 62 de la presente Ley.

Para los privados de libertad que por su comportamiento o inadaptación extrema representen un alto grado de peligrosidad y riesgo para la convivencia de los demás internos del centro penitenciario, las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, establecerá un local y un contingente de seguridad para atender estos casos.

Artículo 64.- Regresión a un régimen inmediato inferior. La regresión del privado de libertad a un régimen inmediato inferior se hará efectivo en los casos siguientes:

1. Cuando se cometa un nuevo delito;
2. En los casos en que de manera reiterada y manifiesta el interno se negare a cumplir las normas propias de su régimen;

3. Cuando se tratare de internos implicados en fugas, motines o cualquier tipo de violencia o intento de estos.

En estos casos le corresponde al equipo interdisciplinario valorar los hechos, circunstancias y factores que intervinieron en cada caso concreto, debiendo ubicar al interno en el régimen que corresponda, inclusive en unidades de máxima seguridad si resultase necesario, sin perjuicio de lo que en última instancia decida el juez de ejecución de la pena.

CAPITULO VII

DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO

Artículo 65.- Tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades organizadas con el objetivo de desarrollar una actividad de auto-respeto, responsabilidad individual y social del privado de libertad o interno con relación a su familia y a la sociedad en general, logrando con ello el alcance de los fines y objetivos de la reeducación y reinserción social de los internos.

Artículo 66.- Objetivos del tratamiento penitenciario. El objetivo del tratamiento penitenciario es proporcionar a los privados de libertad o internos, a través de servicios, atención y seguimiento, diferentes oportunidades para la superación académica, técnica y vocacional, brindarles las posibilidades para desempeñar un oficio y prepararlos para la vida, teniendo como punto de partida la aceptación voluntaria del interno y el respeto a su dignidad.

Artículo 67.- Formas organizativas de los Centros Penitenciarios. Los centros penitenciarios son las instancias en donde se instituyen los instrumentos y elementos del tratamiento penitenciario, así como las diversas formas de organización de éstos. El Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento.

En los centros podrán organizarse consejos disciplinarios y consejos evaluativos los que tendrán participación activa en la educación formal e informal, enseñanza y capacitación de un oficio, así como la participación en las actividades laborales, culturales y deportivas, o de aquellas otras actuaciones específicas que se puedan diseñar encaminadas a la reinserción en la sociedad del interno.

Artículo 68.- Aplicación del tratamiento penitenciario. Para la aplicación del tratamiento penitenciario, el Sistema Penitenciario Nacional deberá de promover e impulsar las diferentes formas de participación de la familia de los

privados de libertad, sea por medio de los diferentes comités de familiares de los internos, así como la participación de las diferentes asociaciones civiles sin fines de lucro, organismos e instituciones y ciudadanos en general preocupados por la recuperación y el bienestar de los ciudadanos internos en el Sistema.

El Reglamento de la presente Ley establecerá los procedimientos y mecanismos de participación de la sociedad civil en el proceso de reinserción de los privados de libertad.

CAPITULO VIII

DE LOS PERMISOS DE SALIDA, COMUNICACIONES Y VISITAS

Artículo 69.- Permisos extraordinarios. Los directores de los centros penitenciarios, en casos de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, hermanos, cónyuge o compañero (a), en unión de hecho estable y de los hijos, previa solicitud del interesado, podrán otorgar al privado de libertad o interno un permiso de salida extraordinario para que temporalmente y no más de 72 horas, con las medidas de seguridad pertinentes, puedan asistir o concurrir ante la familia.

De lo establecido en el párrafo anterior se exceptúan los permisos para los internos de alta peligrosidad y los que por medidas de seguridad no puedan visitar el lugar en donde se cometió el acto punible.

Todo lo relativo a los permisos extraordinarios, el director del centro penitenciario, deberá de informarlo por escrito a la autoridad judicial competente de la causa, a la orden de quien se encuentra el acusado o condenado, en un término no mayor de 24 horas posteriores a la decisión tomada.

Los permisos extraordinarios de salida transitoria, serán normados de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 70.- Derecho a la comunicación y las visitas. Para los fines y efectos de la presente Ley, se reconoce el derecho de los privados de libertad a tener comunicación y visitas, de acuerdo al régimen en que se encuentren ubicados, de parte de sus familiares y personas allegadas al núcleo familiar o de representantes legales acreditados que se interesen por su situación legal o de salud, sin restricción alguna.

Artículo 71.- Formas de comunicación. Las autoridades de los centros penitenciarios deberán facilitar las posibilidades a los privados de libertad para que éstos se puedan comunicar con sus familiares, personas allegadas al

núcleo familiar y representantes legales acreditados de forma oral, escrita o telefónica.

Estas comunicaciones no tendrán más restricciones que las impuestas por la seguridad y el orden; el procedimiento para la periodicidad de las comunicaciones y las visitas serán establecidas en el Reglamento de la presente Ley. .

Artículo 72.- Visitas conyugales y sus locales. Las visitas conyugales para los privados de libertad serán únicamente para esposas o compañeras en unión de hecho estable debidamente registradas en el expediente del interno.

Las autoridades de los diferentes centros penitenciarios deberán procurar establecer locales especiales para estas visitas conyugales y familiares que se realizarán de acuerdo a las prerrogativas establecidas para cada régimen penitenciario, en el caso de los internos ubicados en régimen semi abierto y abierto la visita conyugal será cada ocho días.

El Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento.

Artículo 73.- Asistencia espiritual. Los privados de libertad o internos gozan del derecho del ejercicio del culto religioso y a comunicarse con sus guías espirituales llamados por ellos o por aquellos que presten colaboración en el centro penitenciario.

Artículo 74.- Conocimiento de noticias veraces. Cuando la dirección del centro penitenciario tenga noticias confirmadas de la defunción o enfermedad grave de familiares directos o parientes cercanos hasta en un cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, se debe de informar de inmediata al privado de libertad.

Artículo 75.- Acceso a los centros penitenciarios. Tienen acceso a los centros penitenciarios del país las diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como las de derechos humanos y religiosas de diferentes denominaciones; también tienen derecho al acceso a los centros aquellas personas naturales debidamente acreditadas que deseen colaborar con el Sistema Penitenciario Nacional en las labores de rehabilitación, atención y promoción de los derechos humanos de los internos.

Artículo 76.- Evaluación de las actividades. Todas las actividades realizadas por las organizaciones, entidades o personas naturales o jurídicas comprendidas en el artículo 30 de la presente Ley, serán evaluadas periódicamente, en conjunto con las autoridades superiores del Sistema

Penitenciario Nacional con el propósito de ratificar los proyectos y programas que se desarrollan así como el mantenimiento, modificación, suspensión o supresión de los programas.

CAPITULO IX

DEL TRABAJO PENITENCIARIO Y SU FUNCIÓN REHABILITADORA

Artículo 77.- Participación en el trabajo penitenciario. La participación del privado de libertad o interno en el trabajo penitenciario, es el elemento fundamental para hacer posible el tratamiento penitenciario, por lo que los internos deben de cumplir con las características siguientes:

- 1) Voluntad expresa del privado de libertad o interno;
- 2) No tener carácter aflictivo, ni ser considerado una medida correctiva;
- 3) No atentar contra la dignidad del interno;
- 4) En lo posible, debe ser suministrado por la administración del centro penitenciario; sin embargo se podrán realizar contratos de trabajo de prestación de servicios con empresas o particulares fuera del centro, todo bajo la responsabilidad, supervisión y custodia de las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional;
- 5) El trabajo debe de tener carácter formativo y productivo, con el único objetivo de preparar al interno para su reinserción al mercado laboral al momento de que éste recupere su libertad;
- 6) Organizar el trabajo teniendo en cuenta, en lo posible, el perfil ocupacional del interno;
- 7) Determinar las condiciones y circunstancias de seguridad, salud e higiene laboral.

La remuneración salarial de los privados de libertad estará en correspondencia al tipo de trabajo, modalidad y características del mismo; todo lo relativo a las medidas de seguridad del interno es por cuenta y responsabilidad exclusiva de la dirección del Sistema Penitenciario Nacional.

Artículo 78.- Excepciones en trabajo penitenciario. Para los fines y efectos del trabajo penitenciario, quedan exceptuados de trabajar los mayores de

sesenta años, los sometidos a tratamiento médico, los incapacitados permanentes, las mujeres embarazadas, conforme a las normas laborales vigentes y los que por medidas de seguridad se establezcan.

En el caso de los internos exceptuados en el párrafo anterior, éstos podrán optar al trabajo y solicitarlo a la dirección del centro penitenciario en donde se encuentren internos; en estos casos el trabajo que se les ofrezca debe estar de acuerdo a su salud y la condición física.

Las excepciones establecidas en este artículo no limitan los beneficios penitenciarios que se les otorgan.

CAPITULO X

DEL CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN PENITENCIARIO

Artículo 79.- Centro Nacional de Producción Penitenciario. Crease el Centro Nacional de Producción Penitenciario, que en lo sucesivo se le denominará Centro de Producción, como un ente desconcentrado del Ministerio de Gobernación, con capacidad propia para adquirir obligaciones y derechos, y cuyo objeto primordial constituye esencialmente contribuir a la función social de reforma del privado de libertad y al financiamiento de las actividades del Sistema Penitenciario Nacional; su organización, estructura y funcionamiento lo define la presente Ley y su Reglamento.

Las autoridades del Ministerio de Hacienda y Crédito Público deben de tener inscrito y registrado al Centro de Producción Penitenciaria como uno de los proveedores del Estado para que este proceda a ofertar sus servicios y productos elaborados.

Artículo 80.- Dirección del Centro de Producción. El Centro de Producción está dirigido por una Junta Directiva que se integra con los representantes de las instituciones siguientes:

1. El Ministro de Gobernación o su representante, quien asume la presidencia y representación de la Junta Directiva;
2. El Director General del Sistema Penitenciario Nacional;
3. Un representante del Patronato Nacional de Reos;

4. El gerente general del Centro de Producción, deberá ser un oficial del Sistema Penitenciario con idoneidad para el cargo; y

5. Un supervisor, dándole la participación a las organizaciones civiles o religiosas. Estas eligen su representante a la Junta Directiva.

El nombramiento del gerente del Centro de Producción, a propuesta de la Junta Directiva, le corresponde únicamente al Ministro de Gobernación.

En ningún caso los miembros de la Junta Directiva recibirán pago de dieta, incentivos, salarios y ningún otro tipo de retribución por pertenecer a la Junta Directiva.

Artículo 81.- Patrimonio del Centro de Producción. Para el cumplimiento de los fines y objetivos del Centro de Producción, se deben contabilizar como patrimonio de éste la totalidad de los bienes muebles e inmuebles que actualmente tiene asignados de parte del Sistema Penitenciario Nacional.

También constituyen parte del patrimonio de éste, los bienes que obtenga a cualquier título, sea gratuito u oneroso, la reinversión de las utilidades generadas por sus áreas productivas o los que provengan de aportes o donaciones, legados, subvenciones de cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sean estas nacionales o extranjeras, así como las asignaciones ordinarias o extraordinarias provenientes del Estado.

Artículo 82.- Objetivos del Centro de Producción. Para los fines y efectos del funcionamiento del Centro de Producción, se establecen como objetivos los siguientes:

1) Promover, impulsar, desarrollar, y fortalecer los diferentes programas de reinserción social de los privados de libertad;

2) Promover e impulsar permanentemente la creación de empleos para los privados de libertad para su posterior incorporación a las actividades socio económicas de la sociedad;

3) Desarrollar y ampliar los diferentes programas productivos del Sistema Penitenciario Nacional con alto nivel de calidad y productividad;

4) Realizar las inversiones que resulten necesarias para mejorar la calidad de las condiciones de vida de los privados de libertad, y de los funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional; y

5) Establecer relaciones comerciales con cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, para ofertar y comercializar los productos provenientes de las actividades agropecuarias y agroindustriales, así como aquellos otros productos cuyo origen radique en las actividades industriales, artesanales, grupos culturales o artísticos, o de otra índole generados por el Centro de Producción.

Artículo 83.- Autorización para la realización de proyectos. El Centro de Producción, puede establecer diversos proyectos o actividades productivas en todos los centros penitenciarios del país, asumiendo bajo su cuenta y responsabilidad, la formulación, aprobación, ejecución y administración de éstos.

La Junta Directiva del Centro Nacional de Producción podrá solicitar apoyo económico a los organismos nacionales e internacionales para la realización de los proyectos.

Artículo 84.- Parámetros de los proyectos. Los proyectos que impulse el Centro de Producción deben de cumplir con los parámetros siguientes:

1. Viabilidad y factibilidad económica y financiera;
2. Vocacionalmente formativos;
3. Contribuir al sostenimiento y la unidad de la familia del privado de libertad;
4. Que su función sea de carácter social y su realización sea para la natural incorporación a la vida social del privado de libertad, así como que sus componentes sean de carácter educativo y formativo; y
5. Que no representen riesgos potenciales a la seguridad pública y ciudadana.

Artículo 85.- Autorización para el trabajo de los privados de libertad en el Centro de Producción. La dirección general del Sistema Penitenciario Nacional pondrá a disposición del centro de producción a los privados de libertad, siempre y cuando no representen mayor riesgo y peligro para la seguridad de los centros penitenciarios y el personal del Sistema, para la realización y ejecución de las diferentes actividades productivas.

Artículo 86.- Uso de las utilidades. El cien por ciento de las utilidades netas generadas por las diferentes actividades productivas del Centro de Producción, serán destinadas para la creación y ampliación de los diferentes proyectos productivos que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 6 y 84

de la presente Ley, y para el mejoramiento de las condiciones alimenticias, médicas y de infraestructura del Sistema Penitenciario.

Artículo 87.- Prioridad a los bienes y servicios. Para contribuir al logro de los fines y objetivos establecidos en el artículo 6 de la presente Ley, los representantes legales de cada una de las diferentes instituciones del Estado deberán establecer prioridad en la adquisición de bienes y servicios ofrecidos por el Centro de Producción.

Corresponde al Sistema Penitenciario Nacional la elaboración de las placas para el parque automotor que circule en el país; en este caso deberá cumplir con las medidas y demás requisitos técnicos que al respecto establezca la Policía Nacional por medio de la Especialidad de Tránsito así como observar las medidas de calidad, control y seguridad que resulten necesarias. También podrán elaborar aquellas otras que normal y habitualmente son utilizadas por los diferentes gobiernos locales.

CAPITULO XI

DE LA EDUCACIÓN, INSTRUCCIÓN Y DEPORTES

Artículo 88.- Educación y formación de los internos. Los centros penitenciarios deben de disponer de una escuela en la que se desarrolle la educación y formación básica de los privados de libertad o internos, especialmente para analfabetas y jóvenes de bajo nivel académico.

El sistema educativo para los privados de libertad debe ser administrado, técnica y financieramente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, por lo que la enseñanza impartida debe de ajustarse a los programas y políticas oficiales del Estado. En todos los casos la instrucción y educación para los privados de libertad debe de estar orientada a que éstos puedan alcanzar los niveles académicos y títulos respectivos.

La promoción de la enseñanza y la capacitación técnica de los internos, debe fomentar la participación de los diversos organismos del Estado y la sociedad civil, indistintamente de su naturaleza, con la finalidad y objetivo de ayudar al Sistema Penitenciario y al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para crear las condiciones técnicas y materiales necesarias para facilitar la reinserción social del privado de libertad.

Artículo 89.- Derecho a la educación, cultura y deportes. Los privados de libertad o internos tienen derecho a disponer de locales apropiados para el desarrollo de las diferentes actividades educativas, culturales y deportivas,

orientadas a su desarrollo físico, psíquico y mental, así como textos oficiales o libros diversos, revistas y periódicos de libre circulación en el país que les facilite su formación académica.

El proceso informativo y académico también puede realizarse a través de audiciones radiofónicas, televisivas u otros medios similares.

La única limitación con relación al derecho a la educación está determinada por razones de seguridad penitenciaria.

Artículo 90.- Apoyo al sistema educativo. Los privados de libertad de mayor nivel y formación académica y técnica podrán servir de multiplicadores de los diferentes programas de formación académica que desarrolle el Sistema Penitenciario Nacional en coordinación con las autoridades del Ministerio de Educación Cultura y Deportes y por la vía de convenios con las diferentes universidades y/o centros de estudios superiores y técnicos del país, esa participación como multiplicadores será tomada en cuenta para los efectos de la liquidación de la pena del reo.

CAPITULO XII

DE LA SALUD E HIGIENE

Artículo 91.- Servicios médicos. El Sistema Penitenciario Nacional, en cada uno de los diferentes centros penitenciarios, debe tener una unidad de servicios médicos básicos y preventivos para atender a los privados de libertad que en el se encuentren internos, los que sin excepción deben de ser atendidos y asistidos sin discriminación alguna en las diferentes instalaciones del Ministerio de Salud o sus respectivas unidades de salud pública.

Artículo 92.- Cuerpo médico del Sistema. La unidad de servicios médicos del Sistema Penitenciario Nacional, es la encargada de brindar los servicios de supervisión control y vigilancia de la higiene y la salubridad básica requerida para cada uno de los diferentes centros penitenciarios de acuerdo a las normativas establecidas por las autoridades superiores de la referida unidad y la dirección del Sistema.

Artículo 93.- Otros servicios médicos. Los internos podrán a su costa, solicitar los servicios médicos especializados que brinden los centros asistenciales privados, previo dictamen del Instituto de Medicina Legal y la valoración del médico del centro penitenciario, debiéndose movilizar al interno al centro referido, salvo que por razones de seguridad no sea conveniente su traslado.

Artículo 94.- Promoción de proyectos y programas ambientales. El Sistema Penitenciario Nacional, podrá promover la realización y desarrollo de proyectos y programas sostenibles de carácter ambiental, con la participación de los privados de libertad, teniendo siempre presente el régimen en que estos se encuentren.

CAPITULO XIII

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

Artículo 95.- Derechos de los privados de libertad. Para los fines y efectos de la presente Ley y sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, los privados de libertad tienen derecho a lo siguiente:

1. Al respeto de su dignidad en cualquier circunstancia, por lo que las autoridades y funcionarios de la administración del Sistema Penitenciario Nacional deben mantener una relación de estricto respeto y un trato adecuado; así como a la práctica de la libre expresión de pensamiento, conciencia y credo religioso;
2. A ser asesorado jurídicamente por un profesional del derecho y tener acceso a la justicia y garantía sobre su seguridad personal, así como a recibir de parte de la administración penitenciaria, el cuidado y resguardo de su seguridad física, personal, moral, educación y recreación;
3. A tener libre acceso para con su defensor y a comunicarse privadamente con él;
4. A ser asesorado jurídicamente por un profesional del derecho y tener acceso a la justicia y recibir información escrita sobre su situación procesal y penitenciaria;
5. A ser informado para conocer de los reglamentos y las demás disposiciones de carácter general emitidas por las autoridades competentes que regulen la ejecución de las penas;
6. A entrevistarse privadamente con el director del centro penitenciario cuando exista circunstancias o hechos que de alguna manera pongan en riesgo o que afecten sus derechos;
7. A realizar de forma escrita a la autoridad que corresponda, las peticiones y quejas que estime pertinente, de las cuales debe de obtener una pronta

resolución escrita, sea esta satisfactoria o no, en todos aquellos asuntos que sean estrictamente de la competencia de la administración penitenciaria;

8. A un régimen alimenticio adecuado y a poseer enseres y utensilios, prendas de vestir y artículos de uso personal de conformidad a lo normado por las autoridades del centro penitenciario;

9. A escuchar radio, leer periódicos y revistas, así como tener y conservar las relaciones con el exterior del centro penitenciario, de conformidad a la normativa del centro penitenciario;

10. A un trabajo remunerado, que éste no sea aflictivo y a que se le brinde capacitación para el trabajo que desempeñará.

11. A disponer, dentro de los establecimientos de detención, de locales adecuados y dignos para la realización de visitas familiares, conyugales y especiales, de acuerdo con las disposiciones vigentes y las condiciones materiales del centro penitenciario;

12. A recibir tratamiento penitenciario y a gozar de los beneficios derivados del Sistema Progresivo, en caso de los condenados;

13. A mantener relaciones de familia e interrelación con personas u organismos de apoyo comunitario, sin más limitaciones que las estrictamente necesarias en virtud de la seguridad interna del centro penitenciario;

14. A participar en las actividades del centro penitenciario, con las limitaciones derivadas por su ubicación en determinado régimen penitenciario;

15. A formular peticiones y quejas ante las autoridades competentes; especialmente al juez de ejecución de la pena;

16. A mantener permanente comunicación con el equipo interdisciplinario que participa en su valoración y la movilidad dentro del centro penitenciario, de acuerdo al régimen en que se encuentre ubicado;

17. A convivir en un ambiente adecuado, de acuerdo con la clasificación y ubicación en régimen; así como participar en aquellas actividades que contribuyan a desarrollar sanamente sus potencialidades y aptitudes;

18. A las y los privados de libertad mayores de 70 años o los que padezcan de enfermedades crónicas o en fase terminal se les otorgará el beneficio del régimen de convivencia familiar, previa valoración del médico forense.

19. Los demás derechos que le determine la presente Ley y su Reglamento o que sean establecidos en otros cuerpos dispositivos de nuestro ordenamiento jurídico, siempre que no contradiga lo preceptuado por la presente Ley.

Artículo 96.- Obligaciones de los privados de libertad. Para los fines y efectos de la presente Ley y su Reglamento, se establecen a los privados de libertad las obligaciones siguientes:

1. Permanecer en el centro penitenciario a disposición de la autoridad judicial hasta su debida liberación o cumplimiento de la respectiva condena impuesta;
2. Cumplir con las normas de régimen interior y con las disposiciones orientadas por los funcionarios penitenciarios en el ejercicio de sus funciones, así como las medidas restrictivas y sanciones que se le impongan de acuerdo a su conducta y disciplina en el centro penitenciario previstas por la presente Ley y su Reglamento;
3. Colaborar para alcanzar una adecuada convivencia, respetar al personal del Sistema Penitenciario Nacional, a los otros internos y a las demás personas que entraren a los recintos penitenciarios;
4. Asistir y cumplir con la disciplina laboral;
5. Cuidar del aseo e higiene personal, así como de las instalaciones del centro penitenciario;
6. Realizar labores de limpieza y saneamiento de las instalaciones del centro penitenciario, así como de sus artículos personales;
7. Participar en las actividades formativas, educativas, laborales, sociales deportivas y culturales que se definan como necesarias para el desarrollo de sus capacidades y habilidades; y
8. Cualquier otra que establezca la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 97.- Derechos de los adolescentes. De conformidad a lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, los adolescentes, durante la ejecución de las medidas cautelares de privación de libertad, gozan de los derechos siguientes:

- 1) A recibir información sobre:

1.1 Sus derechos en relación con las personas responsables del centro de detención;

1.2 Los reglamentos internos sobre comportamiento y vida en el centro, en especial lo relativo a las medidas disciplinarias que puedan aplicársele. Estas medidas deben colocarse en lugar público y visible para que las conozcan todos los privados de libertad;

1.3 El contenido del plan individual de ejecución orientado a reinsertarlo en la sociedad; y

1.4 La forma y medios de comunicación con el mundo exterior, permisos de salida y régimen de visita.

2) A que se le mantenga, en cualquier caso, separado de los condenados por la legislación penal común;

3) A que se le ubique en un lugar apto para el cumplimiento del plan de ejecución de la pena y a que no se le traslade arbitrariamente;

4) A no ser incomunicado ni sometido a régimen de aislamiento o imposición de penas corporales. Cuando la incomunicación o aislamiento deban ser aplicados para evitar actos de violencia contra el adolescente o un tercero, esta medida se notificará a la Oficina de Ejecución y Vigilancia de las Sanciones Penales a los Adolescentes y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que, de ser necesario, la revisen y fiscalicen;

5) A recibir servicios de salud, educativos y sociales adecuados a su edad y condiciones, así como a ser asistido por personas con la formación profesional requerida;

6) A dirigir peticiones y quejas ante la administración del centro penitenciario, la oficina de ejecución y vigilancia, autoridades judiciales competentes, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos u otras autoridades y organizaciones de derechos humanos;

7) A contar con asesoría y defensa especializada; y

8) Los demás derechos que le otorgue el centro penitenciario establecido para los adultos y que sean aplicables a los adolescentes.

Artículo 98.- Sometimiento a plan individual. Para la ejecución de las medidas de privación de libertad, los adolescentes deben someterse al plan

individual establecido para tal efecto el que será controlado y supervisado por la oficina de ejecución y vigilancia de las sanciones penales a los adolescentes.

CAPITULO XIV

DEL PATRONATO NACIONAL PARA PRIVADOS DE LIBERTAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Artículo 99.- Creación del Patronato Nacional para privados de libertad en el Sistema Penitenciario. Crease el Patronato Nacional para Privados de Libertad en el Sistema Penitenciario Nacional, como un organismo de apoyo a la administración penitenciaria y de gestión comunitaria en beneficio de los privados de libertad, siendo sus objetivos los siguientes:

1. Apoyar el tratamiento y gestión reeducativo;
2. Elaborar y promover programas, proyectos, convenios, y campañas tendientes al beneficio económico y financiero de la Institución, con el objetivo único de mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad;
3. Brindar apoyo a los ciudadanos que recuperan su libertad, en especial lo relativo a lo laboral, social y moral.

Artículo 100.- Integración del Patronato. El Patronato Nacional para los Privados de Libertad estará integrado de la manera siguiente:

1. Un representante del Ministro de Gobernación, quien lo preside o en quien delegue;
2. Dos representantes del Sistema Penitenciario Nacional;
3. Cuatro representantes de la sociedad civil y gremiales;
4. Tres miembros de los clubes de servicio comunitario;
5. Dos representantes de la iglesia católica;
6. Dos representantes de la iglesia evangélica;
7. Las diferentes organizaciones promotoras de los derechos humanos;
8. Cualquier otra que a criterio del Ministro de Gobernación resulte necesario.

Artículo 101.- Funcionamiento del Patronato. Para el funcionamiento del Patronato Nacional para atención a los privados de libertad ubicados en el Sistema Penitenciario Nacional se integrará una Junta Directiva, cuya composición, integración y funcionamiento será establecido en el Reglamento de la presente Ley.

Los fondos destinados para el funcionamiento del Patronato Nacional para atención a los privados de libertad se constituirá con las donaciones, legados y subvenciones provenientes de cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, sea ésta pública o privada, más el aporte ordinario o extraordinario que a tal efecto realice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el que será incluido en el Presupuesto General de la República a través del Ministerio de Gobernación.

La Junta Directiva en ningún caso podrá tener más de nueve miembros con sus respectivos suplentes.

Artículo 102.- Funciones del Patronato Nacional. El Patronato Nacional para Atención a los Privados de Libertad internos en el Sistema Penitenciario Nacional tendrá las funciones siguientes:

1. Organizar los diferentes patronatos departamentales para atención a los privados de libertad internos en el Sistema Penitenciario Nacional en dependencia de la localización de los centros penitenciarios;
2. Cuidar y tutelar por los derechos de las personas privadas de libertad ubicadas en prisión preventiva, sin perjuicio de la institución en la que se encuentren internos; y
3. Cualquier otra que al respecto establezca la presente Ley y su Reglamento.

CAPITULO XV

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SUS ESTÍMULOS

Artículo 103.- Régimen y objetivos disciplinarios. El régimen disciplinario de los privados de libertad está dirigido a garantizar la seguridad y una convivencia ordenada, a fin de desarrollar el sentido de responsabilidad y la capacidad de autocontrol, elementos básicos para la consecución de los fines y objetivos de la presente Ley y su Reglamento.

Las autoridades del Sistema Penitenciario deben de establecer en cada uno de los centros penitenciarios un organismo que contribuya a las actividades de los

privados de libertad; su integración, organización y funcionamiento se regulará por medio del Reglamento de la presente Ley.

Artículo 104.- Corrección y aplicación de sanciones al interno. Los privados de libertad deben ser corregidos disciplinariamente de acuerdo a los casos que se determinen reglamentariamente, debiendo aplicárseles las sanciones que expresamente se detallan en la presente Ley y su Reglamento, estas correcciones las determina el equipo interdisciplinario.

Contra toda medida correctiva o sanción disciplinaria que se aplique a un privado de libertad, cabe el recurso, por parte del interno, ante el juez de ejecución de la pena.

Artículo 105.- Clasificación de las faltas. Para los fines y efectos de la presente Ley y su Reglamento las infracciones se clasifican de la forma siguiente:

1. Muy graves;
2. Graves; y
3. Leves.

Artículo 106.- Medidas disciplinarias. Las autoridades penitenciarias, deben imponer de tal forma que no afecten la salud ni la dignidad del interno, las medidas siguientes:

1. Amonestación verbal o escrita;
2. Privación de participación en actos recreativos ordinarios y extraordinarios;
3. Privación de permisos de salida de hasta tres veces consecutivas;
4. Internamiento en su celda;
5. Internamiento en celda individual; y
6. Regresión en Régimen.

Artículo 107.- Condiciones de las celdas en caso de internamiento. En los casos de internamiento en las celdas individuales, los privados de libertad deben tener las condiciones básicas necesarias para no perjudicar la salud

física y mental de éstos, razón por la cual las condiciones físicas de las celdas deben de ser inspeccionadas y evaluadas por el médico del penal.

La sanción de internamiento en celda, únicamente le será aplicada al privado de libertad cuando en los hechos cometidos por el interno se aprecie la notoria y manifiesta agresividad y violencia o en los casos en que de forma reiterada y progresivamente, altere la convivencia en el centro penitenciario o cuando se ponga en riesgo la seguridad interna del centro o la vida del personal o de los demás internos. Esta medida correctiva no le será aplicada a los privados de libertad de sexo femenino que se encuentren en proceso de gestación; las que se encuentren lactando, sino hasta doce meses después del parto, también se excluyen a las que tuviesen a los hijos consigo.

El internamiento se debe aplicar previa autorización escrita del director del centro penitenciario y después que el médico de éste examine al interno (a) y que certifique que se encuentra en condiciones adecuadas de salud.

El médico del centro esta obligado a visitar todos los días a los privados de libertad que están cumpliendo tales sanciones y posteriormente informar al director del centro del estado de salud del interno.

Artículo 108.- Medidas cautelares en caso de riesgo. En los casos en que esté en riesgo la integridad física de los privados de libertad y su familia, así como el orden y la seguridad en el centro penitenciario o de su personal, se deben tomar las medidas cautelares siguientes:

1. Ubicación del privado de libertad en unidades de máxima seguridad dentro del mismo centro; y/o
2. Ubicación del interno en las unidades de seguridad en otro centro penitenciario.

Las medidas cautelares se utilizarán exclusivamente como forma de prevención y solución circunstancial y temporal ante situaciones de inminente peligro personal o institucional. En cualquiera de los casos estas medidas deben de ser razonadas y fundamentadas por escrito por parte del director del centro penitenciario, todo debe de hacerse constar en el expediente del privado de libertad y comunicárselo de forma personal al interno.

Estas medidas no se deben de aplicar a las mujeres embarazadas, a las madres en proceso de lactancia de sus hijos, sino hasta doce meses después del parto o a las que tuviesen hijos consigo.

Artículo 109.- Información de la infracción y la sanción. Los privados de libertad deberán de ser sancionados únicamente cuando de previo se les haya informado de la infracción que se les señala o atribuye, siempre y cuando este haya presentado los argumentos válidos en su defensa. Las sanciones solamente podrán ser impuestas cuando el equipo interdisciplinario del centro donde está ubicado el interno las haya expuesto al director del centro para que éste las apruebe.

Los internos sujetos a sanciones disciplinarias podrán hacer uso de la petición de revisión de la medida correctiva que se le aplique, el Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento.

Artículo 110.- Utilización de medidas coercitivas. Para vencer la resistencia activa o pasiva de los privados de libertad ante las órdenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo o para sofocar y abortar cualquier acto contrario al orden y la seguridad del centro, le corresponde en todo tiempo y de forma exclusiva al director de éste, autorizar la utilización de los medios coercitivos que al respecto establezca el Reglamento de la presente Ley, siempre y cuando su objetivo sea impedir cualquier acto de evasión, violencia entre los internos, disturbios o quebrantamientos de la disciplina del centro que atenten contra la seguridad de éste y sus agentes o que se causen daños entre ellos, a otras personas o a sí mismo.

Su uso está dirigido al restablecimiento de la total normalidad.

Artículo 111.- Estímulos a los internos. En los casos de los privados de libertad que pongan de manifiesto la buena voluntad por medio de la buena conducta, espíritu de trabajo y sentido de responsabilidad podrán ser estimulados de conformidad al programa de estímulos que al respecto establezca el Reglamento de la presente Ley.

CAPITULO XVI

DEL PERSONAL Y LA CARRERA PENITENCIARIA

Artículo 112.- Sobre el personal. Para los fines y efectos de la presente Ley, el Sistema Penitenciario Nacional debe disponer del personal profesionalmente calificado, teniendo presente el tipo, la singularidad y las características de las labores profesionales apropiadas que se requieran.

Artículo 113.- Carrera Penitenciaria y los principios que la regulan. Se establece la Carrera Penitenciaria, reconociéndoles a los actuales funcionarios y demás personal sus derechos por antigüedad y especialización.

La Carrera Penitenciaria del personal del Sistema Penitenciario se rige bajo los principios de:

1. Selección;
2. Capacidad profesional;
3. Concurso por oposición pública;
4. Igualdad de oportunidades para ambos sexos;
5. Idoneidad;
6. Respeto a los derechos humanos;
7. Disciplina; y
8. Méritos.

La presente Ley y su Reglamento establecerán las normas para su regulación.

Artículo 114.- Formación y actualización del personal. El personal del Sistema Penitenciario Nacional, bajo los parámetros establecidos en la Carrera Penitenciaria, antes de su ingreso y nombramiento, así como durante el desempeño de sus funciones en virtud del cargo que desempeña, deben de recibir los cursos de formación y actualización que establezca la escuela para estudios penitenciarios, así como someterse a los exámenes de selección establecidos.

En general, el ingreso del personal estará a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, y únicamente podrán ser nombrados y recibir promociones aquellos empleados y funcionarios miembros del Sistema Penitenciario Nacional que hayan cursado y aprobado los diferentes programas de estudio y capacitación impartidos por el Sistema Penitenciario Nacional o por el Ministerio de Gobernación en coordinación con cualquier otro ente, sea este público o privado, nacional o extranjero.

Para el ingreso al Sistema Penitenciario Nacional, los interesados deberán haber cursado y aprobado al menos el tercer año de educación secundaria.

El Reglamento de la presente Ley establecerá las normativas de carácter procedimental.

Artículo 115.- Clasificación del personal del Sistema. Para los fines y efectos de la presente Ley y su Reglamento, el personal del Sistema Penitenciario Nacional se clasifica de la forma siguiente:

- 1) Personal Penitenciario; y
- 2) Personal Administrativo.

En el desempeño de sus funciones, el personal penitenciario y el personal administrativo se rigen por la Carrera Penitenciaria; como norma supletoria se le aplicarán las normas establecidas en las leyes de Servicio Civil y la de Carrera Administrativa, en lo que fuese pertinente y que no requiera de reglamentación, así como lo establecido en el Código del Trabajo, siempre que no contradigan la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 116.- Requisitos y políticas para ingresar al personal del Sistema. Para su ingreso, el personal del Sistema Penitenciario Nacional debe cumplir los requisitos existentes en las políticas de personal que se establecen en la presente Ley, su Reglamento y la Carrera Penitenciaria.

Artículo 117.- Representantes de la ley y compensación económica. Los funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional, en el desempeño de sus funciones, son representantes de la ley y como tales gozan de la calidad de agentes de la autoridad pública, y no tienen más responsabilidades de los que expresamente la ley y su reglamento les otorga.

Los haberes económicos tales como salarios, prestaciones y beneficios de seguridad social, entre otros, de los funcionarios y personal general del Sistema Penitenciario, deben ser equivalentes a los máximos estándares aplicados a las otras estructuras afines del Ministerio de Gobernación.

CAPITULO XVII

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL PERSONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO

Artículo 118.- Obligaciones del personal. Para los fines y efectos de la presente Ley y su Reglamento, son obligaciones del personal del Sistema Penitenciario Nacional las siguientes:

1. Cumplir y respetar la Constitución Política de la República de Nicaragua, la presente Ley y su Reglamento, los tratados, convenios y acuerdos internacionales y demás disposiciones comprendidas dentro del ordenamiento jurídico nicaragüense que regulen el trabajo penitenciario;
2. Respetar la dignidad humana del privado de libertad, proteger y defender los derechos humanos de éstos; y
3. Hacer uso de la fuerza en aquellos casos, que por su naturaleza y agravante, resulte estrictamente necesario, medida que deberá de ser racional, proporcional a la causa que le de origen y que la situación lo requiera.

Artículo 119.- Consejo de Género. Crease el Consejo de Género del Sistema Penitenciario Nacional, como una instancia de análisis debate de inquietudes, intereses y problemática de las y los funcionarias y funcionarios del Sistema, así como buscar soluciones adecuadas, presentar propuestas y sugerencias, aportes y recomendaciones para que puedan ser valoradas y consideradas por la Jefatura Nacional de la institución.

Artículo 120.- Derechos de los funcionarios. Para los fines y efectos de la presente Ley y su Reglamento, son derechos de los funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional, los siguientes:

1. Estabilidad en el desempeño de su cargo, únicamente podrán ser retirados o dados de baja del servicio por las causales previstas por la presente Ley y su Reglamento;
2. Percibir un salario de acuerdo al cargo que se desempeña, nivel académico, capacidad, especialidad, antigüedad y riesgo;
3. Ser promovido en cargo, de acuerdo a los requisitos establecidos, reglamentados y cumplidos, teniendo presente la igualdad de oportunidades, tomando en cuenta los méritos y capacidad demostrada;
4. Ser dotado de los medios técnicos, materiales y el avituallamiento necesarios para el cumplimiento de las misiones y funciones, así como las condiciones básicas mínimas para poder laborar en otra región cuando las exigencias del cargo y la función lo requieran;
5. Recibir asistencia legal de parte de la institución en los procesos judiciales que tenga que enfrentar a consecuencia del ejercicio de sus funciones;

6. Tener y gozar de un régimen especial de seguridad social obligatorio y un programa para el desarrollo humano para todo el personal del Sistema Penitenciario Nacional, sin exclusión, que entre otros aspectos deberá de comprender el seguro social, así como cualquier otro beneficio que se le otorgue a los asegurados bajo este régimen, dicho régimen debe ser establecido por el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano del Ministerio de Gobernación, de conformidad a lo establecido en la Ley 228, Ley de la Policía Nacional, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, número 162 del 28 de Agosto de 1996 y su Reglamento;

7. Para el ejercicio de la fuerza pública, el personal del Sistema Penitenciario Nacional debe ser dotado de las armas de fuego y los medios técnicos defensivos apropiados y necesarios por parte del Ministerio de Gobernación; y

8. Cualquier otro que le establezca la presente Ley y su Reglamento o cualquier otra Ley de la República.

CAPITULO XVIII

DE LAS DENOMINACIONES, PERMANENCIA, ROTACIÓN Y BAJA.

Artículo 121.- Determinación de la jerarquía. La jerarquía está determinada por la denominación jerárquica y del cargo que desempeñe u ocupe el funcionario. La correspondencia entre la jerarquía del cargo y la denominación está determinada por la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 122.- Exclusividad de las denominaciones y su uso. Para los fines y efectos de la presente Ley y su Reglamento, las denominaciones aquí establecidas, son de uso exclusivo del Sistema Penitenciario Nacional, siendo éstas las únicas que se imponen a sus miembros.

Artículo 123.- Denominaciones. Con el objeto normativo y funcional del personal y del cumplimiento de la carrera penitenciaria, se establecen las denominaciones siguientes:

1. Prefecto;
2. Subprefecto;
3. Alcalde;
4. Subalcaide;

5. Primer Alguacil;
6. Alguacil;
7. Sub alguacil; y
8. Agente.

Artículo 124.- Denominaciones. Corresponde al Director General del Sistema Penitenciario Nacional la denominación de Prefecto y a los dos Subdirectores Generales e Inspector General la de Subprefecto.

La denominación de Alcalde recae sobre los directores de Especialidades Nacionales, directores de centros penitenciarios y directores de órganos nacionales de apoyo; en los casos de los subdirectores de las respectivas estructuras se les denominan Subalcaide.

A los cargos de Jefe de Departamento u Oficina se les denomina Primer Alguacil; los Jefes de Sección y Unidades son denominados como Alguacil y en los casos de los Oficiales, se les denomina Sub Alguacil.

Al personal base del Sistema Penitenciario Nacional se le denominará Agente.

Artículo 125.- Simbología de las denominaciones penitenciarias. Para los fines y efectos de la presente Ley, la simbología de las denominaciones penitenciarias, la promoción y tiempo de permanencia en el cargo se determinará en el Reglamento específico que para tal efecto se establezca.

Artículo 126.- Nombramiento del Director General. El Director General del Sistema es nombrado por el Ministro de Gobernación, para un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de su nombramiento, selección que se realizará a propuesta del Consejo de Dirección Nacional, de entre los miembros de la carrera penitenciaria que tengan las mayores denominaciones.

Artículo 127.- Requisitos para el nombramiento. Para los fines y efectos del nombramiento del Director General del Sistema Penitenciario Nacional se deben de cumplir con los requisitos siguientes:

1. Ser nacional de Nicaragua;
2. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
3. Haber cumplido al menos 25 años de edad;

4. Tener grado académico mínimo profesional;

5. No tener antecedentes penales.

6. No haber incurrido en infracciones catalogadas como graves por el Reglamento Disciplinario del personal del Sistema, o que por su naturaleza atenten o lesionen el prestigio de la institución.

Artículo 128.- Nombramiento de los Subdirectores Generales y del Inspector General. Los nombramientos en los cargos de los dos Subdirectores Generales y del Inspector General, a propuesta del Consejo de Dirección Nacional, es facultad exclusiva del Ministro de Gobernación, de entre los miembros de la Carrera Penitenciaria que tengan las denominaciones mayores por un periodo igual al del Director General del Sistema, pudiéndose ratificar en el cargo hasta por un periodo más.

El nombramiento de los otros cargos y la permanencia en los mismos es competencia de la Jefatura Nacional de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 129.- Integración de la Jefatura Nacional del Sistema. La Jefatura Nacional del Sistema Penitenciario Nacional está integrada por el Director General, los dos Subdirectores Generales y el Inspector General, quienes en conjunto constituyen el nivel superior de mando de la Institución.

Artículo 130.- Promociones del personal del Sistema. Las promociones del personal del Sistema Penitenciario Nacional están determinadas por el tiempo de permanencia en el cargo, el nivel y grado académico obtenido, los estudios de especialización, los cursos penitenciarios recibidos, así como por la eficiencia y la disciplina demostrada en el desempeño de sus funciones.

Artículo 131.- Privación de la denominación y el cargo. La denominación y el cargo pueden privarse por efecto de sentencia ejecutoriada dictada por autoridad judicial competente.

Artículo 132.- Causales de baja. Son causales de baja del personal del Sistema Penitenciario Nacional las siguientes:

1) Renuncia, previo trámite correspondiente;

2) Abandono del servicio sin causa justificada;

- 3) Por incurrir en infracciones catalogadas como graves por el Reglamento Disciplinario del Personal del Sistema, o que por su naturaleza atenten o lesionen el prestigio del Sistema;
- 4) Por interdicción civil;
- 5) Discapacidad total o permanente;
- 6) Expiración del contrato de trabajo;
- 7) Retiro;
- 8) Jubilación; y
- 9) Muerte.

CAPITULO XIX

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO DEL PERSONAL

Artículo 133.- Disciplina del personal de la institución.

El personal del Sistema Penitenciario Nacional está sujeto a la disciplina institucional que garantice el cumplimiento de los principios de jerarquía, ética y profesionalismo, así como los deberes establecidos en el Reglamento Disciplinario del Personal.

Artículo 134.- Procedimiento para la aplicación de sanciones. Para los fines y efectos de la aplicación de la presente Ley y su Reglamento, se establecerá un Reglamento Disciplinario para el personal, en el que se estipule el procedimiento para la aplicación de las sanciones pertinentes; en todos los casos se deja a salvo el derecho a la defensa del afectado.

CAPITULO XX

DEL RETIRO Y LA JUBILACIÓN

Artículo 135.- Retiro y beneficios. Concluido el periodo para el que haya sido nombrado el Director General y los periodos de los Sub Directores Generales e Inspector General, respectivamente, pasarán a retiro activo en tanto no cumplan con la edad establecida por la ley para adquirir la condición de pensionado, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 228, Ley de la Policía Nacional para ser ubicado en la categoría de pensionado.

Los beneficios que recibirán por la condición de retiro activo comprende la sumatoria de todas las prestaciones económicas y de seguridad que por razón de su cargo hayan recibido durante el plazo en que se hayan desempeñado, sin embargo estos podrán ser convocados a prestar el servicio activo en caso de extrema necesidad hasta cumplir la edad para la condición de pensionados.

Artículo 136.- Retiro activo. Los miembros del Consejo de Dirección Nacional del Sistema Penitenciario Nacional, pasarán a retiro activo al haberse agotado todas las posibilidades de promoción y rotación, aún en aquellos casos en que no hubiesen cumplido el tiempo de servicio activo ni la edad requerida para adquirir la condición de pensionado.

Artículo 137.- Haberes. Los haberes en concepto de retiro activo están a cargo del Ministerio de Gobernación el que deberá de incluir la partida presupuestaria en el Presupuesto General de la República. Una vez asegurados los haberes, el retiro se hará efectivo, de conformidad al procedimiento establecido en el Reglamento de la presente Ley.

CAPITULO XXI

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 138.- Exenciones y exoneraciones. Con el propósito de reforzar el presupuesto del Sistema Penitenciario Nacional y hacer posible el cumplimiento de sus fines y objetivos, así como su misión y función social, las compras locales, las importaciones, donaciones, legados, subvenciones provenientes de personas naturales o jurídicas, o de organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, con destino al Sistema Penitenciario Nacional, están exentas del pago de todo tipo de impuesto municipal o fiscal. Este será deducible del impuesto sobre la renta del donante, de conformidad a lo establecido en la ley de la materia vigente.

Artículo 139.- Centros penitenciarios especiales. El Estado, en cumplimiento de las normas especiales vigentes, debe de construir y equipar los centros penitenciarios especiales para adolescentes e internas embarazadas; temporalmente, mientras no existan este tipo de centros, los privados de libertad a los que se refiere esta norma, deben de permanecer en los centros penitenciarios existentes en los que se deben de crear las condiciones materiales adecuadas para tal fin.

Artículo 140.- Coordinación. Las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, en coordinación con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Salud, deberán de crear las condiciones materiales en los centros

penitenciarios del país para aquellos privados de libertad a quienes les sobreviniere disminución de sus facultades mentales.

Artículo 141.- Tratamiento psiquiátrico. En caso de que un privado de libertad presente un trastorno mental temporal o permanente será referido para su tratamiento a las unidades de salud especializadas del Ministerio de Salud. Si el privado de libertad presenta por dictamen médico un trastorno mental permanente será trasladado al Hospital Nacional Psiquiátrico..

Artículo 142.- Selección y capacitación. La Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional debe de seleccionar y capacitar a los funcionarios que trabajarán y brindarán atención especializada a los adolescentes privados de libertad.

Artículo 143.- Reconocimiento de tiempo en servicio. A todos los funcionarios y demás personal penitenciario, que a la fecha de la entrada en vigencia de la presente Ley se encuentren prestando servicio activo en el Sistema Penitenciario Nacional, se les reconoce el tiempo transcurrido para el cómputo de la carrera penitenciaria.

Para los fines y efectos del retiro, en el caso del Director General, los cinco años de permanencia en el cargo se le contabilizan a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

Artículo 144.- Área especial. Los funcionarios públicos miembros del Poder Judicial, Contraloría General de la República, el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, Ministerio Público, del Sistema Penitenciario Nacional, que se involucraren en algún hecho delictivo y fuesen procesados o condenados, por motivo de su seguridad personal, en todos los casos deben de ser ubicados en un área especial e independiente y separada del resto de la población penal interna en los centros penitenciarios respectivo.

Artículo 145.- Participación técnica de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional. Toda obra de construcción o remodelación en cualquiera de los centros penitenciarios del país, se debe de realizar con la participación técnica de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional.

Artículo 146.- Derechos y deberes contraídos por la Dirección de Régimen Laboral o Dirección de Producción Industrial. Los derechos y deberes contraídos por la Dirección de Régimen Laboral o Dirección de Producción

Industrial, sin solución de continuidad, son asumidos por el Centro de Producción Penitenciario.

Artículo 147.- Valor y vigencia de grados. A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley y su Reglamento, quedan sin valor ni vigencia los grados que actualmente tiene el personal del Sistema Penitenciario Nacional y que fueron otorgados de conformidad a la Ley No.54, "Ley de Grados del Ministerio del Interior" y se pone en vigencia la jerarquía penitenciaria que dispone la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 148.- Reglamentación. El Presidente de la República, de conformidad al artículo 150, numeral 10) de la Constitución Política de la República, reglamentará la presente Ley.

Artículo 149.- Derogaciones. La presente Ley de la República deroga las siguientes leyes y normas administrativas que regulan el funcionamiento y la actividad del Sistema Penitenciario Nacional:

1. El Reglamento para las Cárceles de la ciudad de Managua de 1879;
2. El Reglamento para las Penitenciarías en Managua de 1901;
3. El Reglamento Interior de la Cárcel y Casas de Mujeres publicado en 1914;
4. El Reglamento para Gobierno y Disciplina de la Guardia Nacional y de las Cárceles Penitenciarias de 1929, reformado en 1943 y convertido en Código Jurídico Militar en 1949;
5. La Ley de Patronato Nacional y los Patronatos Departamentales de reos de 1946 y su Reglamento de 1947, reformado en 1948;
6. Las Normas y Procedimientos de Control, Reeducción y Seguridad Penal contenidas en las Ordenes No. 023, 028, 034 y 035 de 1987 del Ministerio del Interior;
7. El Documento Base para la Reeducción Penal comprendido en la Orden No. 069 - 86 del Ministro del Interior de 1986, y
8. El Decreto No. 62-90: Creación de la Comisión Nacional Penitenciaria.

Artículo 150.- Vigencia. La presente Ley es de orden público y entrará en vigencia sesenta días después de la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dada en la ciudad de Managua en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional a los once días del mes de Septiembre del año dos mil tres.- **JAIME CUADRA SOMARRIBA**, Presidente de la Asamblea Nacional, **MIGUEL LÓPEZ BALDIZON**. Secretario de la Asamblea Nacional.

Por Tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, veintiuno de Noviembre del año dos mil tres. **ENRIQUE BOLAÑOS GEYER**, Presidente de la República de Nicaragua.

REGLAMENTO DE LA LEY No.473, LEY DEL REGIMEN PENITENCIARIO Y EJECUCIÓN DE LA PENA

DECRETO No. 16-2004, Aprobado el 12 de Marzo del 2004

Publicado en La Gaceta No. 54 del 17 de Marzo del 2004

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA,

En uso de sus facultades que le confiere la Constitución Política,

HA DICTADO

El siguiente:

DECRETO

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- Objeto. El presente Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones reglamentarias para la aplicación de la Ley No. 473, Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 222 del 21 de noviembre de 2003, en adelante denominada la Ley.

Artículo 2.- Objetivos específicos. Para los fines y efectos del presente Reglamento, se establecen los siguientes objetivos:

1. Establecer y regular los procedimientos de las actividades del Sistema Penitenciario Nacional.
2. Garantizar el cumplimiento de la ejecución de las sentencias penales y las medidas cautelares privativas de libertad.
3. Ejercer las actividades de control, seguridad y reeducación penal que resulten necesarias para el buen funcionamiento del Sistema Penitenciario.

CAPITULO II

Principios Generales de la Actividad Penitenciaria

Artículo 3.- Internos. Se consideran internos, a todas aquellas personas que se encuentren privadas de libertad por la aplicación de la prisión preventiva o detención provisional, y los que están sometidos al cumplimiento de una pena.

Artículo 4.- Ningún interno podrá ser sometido a la realización de actividades penitenciarias a las que puede renunciar y que no contradicen sus deberes y obligaciones contenidas en la Ley y el presente Reglamento, así como al cumplimiento de medidas disciplinarias no establecidas en los mismos.

Artículo 5.- Ejercicio y Fundamento del Sistema Penitenciario. La actividad penitenciaria se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad de la persona y el respeto a los derechos humanos. En ningún caso, los internos serán sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6.- Principio de Igualdad. En la ejecución de las sentencias penales y las medidas cautelares privativas de libertad, se prohíbe toda forma de discriminación por motivos de nacimiento, sexo, raza, edad, nacionalidad, idioma, religión, credo político, origen, estrato social y capacidad económica.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Director del Centro Penitenciario donde esté ubicado el interno, podrá limitar algunos derechos por motivos de seguridad y tratamiento.

Artículo 7.- Internos en prisión preventiva. En lo posible por su condición procesal, los internos en prisión preventiva, en cualquiera de sus modalidades, podrán acceder a las actividades sociolaborales, educativas, formativas, deportivas y culturales que en sentido general se realicen en los Centros Penitenciarios, en igualdad de condiciones que los formalmente sentenciados por resolución judicial firme.

CAPÍTULO III

De la Autoridad de Aplicación de la Ley, Organización y Funcionamiento.

Artículo 8.- Máxima Autoridad. Corresponde al Ministro de Gobernación coordinar, dirigir y administrar el Sistema Penitenciario a través de su Director General, de conformidad con la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 9.- Estructura. El Sistema Penitenciario Nacional está organizado y estructurado de la siguiente manera:

1. Dirección General, integrada por un Director General.
2. Dos Subdirectores, uno para atender el área administrativa y el otro para el área operativa.
3. Un Inspector General.
4. Los Directores de las Especialidades Nacionales.
5. Los Órganos Nacionales de Apoyo.
6. Los Directores de Centros Penitenciarios.

De conformidad al arto. 129 de la Ley, los miembros titulares a que se refieren los numerales 1, 2 y 3, conforman la Jefatura Nacional del Sistema Penitenciario.

Artículo 10.- Director General. El Director General es el superior jerárquico y máxima autoridad del Sistema Penitenciario, a quien se le subordinan todos los demás funcionarios y empleados del Sistema Penitenciario Nacional.

Artículo 11.- Funciones. Además de las funciones establecidas en la Ley, le corresponde:

1. Proponer al Ministro de Gobernación, para su aprobación, el proyecto de presupuesto del Sistema Penitenciario Nacional, para ser enviado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
2. Conocer de las ausencias temporales de todo el personal.
3. Dictar disposiciones, instrucciones, circulares, manuales y reglamentos específicos, que garanticen el cumplimiento de la Ley y el presente Reglamento.

4. Solicitar la intervención de la Policía Nacional, en caso de alteraciones graves al orden interior, motines, fugas, secuestros y otros, para restablecer el orden en los Centros Penitenciarios;
5. Proponer la construcción y remodelación de los Centros Penitenciarios;
6. En caso de ausencia temporal por más de 15 días que no exceda de seis meses, delegar la Dirección del Sistema Penitenciario al Sub-Director General que designe;
7. Informar anualmente al Ministro de Gobernación del inventario y registro de armas de fuego asignadas al Sistema Penitenciario Nacional;
8. Proponer al Ministro de Gobernación la adquisición de armas de fuego y equipos técnicos para la vigilancia y control de los privados de libertad;

Artículo 12.- Sub- Directores Generales. A los Sub-Directores Generales, además de lo contemplado en la Ley, les corresponde:

1. Auxiliar al Director General en lo que se refiere al régimen y administración penitenciaria y en todos aquellos casos en que se deban tomar decisiones urgentes, comunicando de forma inmediata al Director General de las disposiciones que dictaren en cumplimiento de sus atribuciones.
2. Ejercer control sobre las áreas que atienden, orientar y asesorar de forma sistemática, desarrollando iniciativas en la solución de los problemas que se presenten.
3. Dictar las instrucciones que estimen convenientes para el desarrollo de sus labores.
4. Dar parte al Director General de las novedades ocurridas, las que por su gravedad o naturaleza deban ser comunicadas de inmediato.
5. En ausencia temporal del Director General, asumir la Dirección del Sistema Penitenciario cuando sea designado.

Artículo 13.- Inspector General. El Inspector General, además de las funciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento, cumplirá con las instrucciones que reciba del Director General del Sistema Penitenciario.

Artículo 14.- Órganos Consultivos. Son órganos consultivos, los siguientes:

1. Consejo Directivo Nacional: Es el órgano de asesoría y consulta del Sistema Penitenciario y está integrado por el Director General, quien lo presidirá, los dos Sub-Directores Generales, el Inspector General, los Directores de Especialidades Nacionales, Directores de órganos Nacionales de Apoyo y Directores de Centros Penitenciarios. El jefe de Información, Planificación y Estadística hará las veces de Secretario de Actas de este Consejo.
2. Consejo Técnico: Es un órgano asesor del Director General, está integrado por: los Directores de Especialidades Nacionales y cualquiera otro de los jefes que se considere necesario, a criterio del Director General.

Artículo 15.- Funcionamiento de los órganos Consultivos. El Consejo Directivo Nacional sesionará de forma ordinaria una vez al mes y de manera extraordinaria, cuando el Ministro de Gobernación o el Director General lo convoque.

El Consejo Técnico sesionará cuando el Director General lo considere necesario.

Artículo 16.- División de Asesoría Jurídica. Las funciones de la Asesoría Jurídica son:

1. Brindar asesoramiento a la Dirección General, Especialidades Nacionales, órganos de Apoyo, Direcciones Penitenciarias y Personal Penitenciario debidamente autorizado.
2. Brindar con aprobación del Director General, asistencia legal a los funcionarios penitenciarios, que en el cumplimiento del deber, se vean involucrados en procesos judiciales.
3. Autenticar los Convenios, contratos u otras diligencias que la Dirección General oriente y los emitidos por las autoridades penitenciarias a nivel nacional.
4. Asesorara la Dirección General en juicios, comparendos y citaciones, de los cuales deberá informar periódicamente al Ministerio de Gobernación, a través del Director General.
5. Participar en la formulación, elaboración de propuestas de normas legales, reglamentarias, administrativas, vinculadas al ámbito de competencia del Sistema Penitenciario Nacional y que deberán ser presentadas a la Dirección General.

Artículo 17.-División de Información, Planificación y Estadística. El Director de la División de Información, Planificación y Estadística es el encargado de recibir, organizar, planificar y evaluar la información, con el fin de asesorar y apoyar las decisiones de la Dirección General y dirigir el Puesto de Mando Central.

Artículo 18.- Funciones. Al jefe de la División de Información, Planificación y Estadística, le corresponden además las siguientes funciones:

1. Coordinar la elaboración y/o modificación de los documentos rectores del sistema de información del Sistema Penitenciario.
2. Organizar y velar por el cumplimiento en la aplicación de los métodos de dirección establecidos para el funcionamiento del Sistema Penitenciario.
3. Tramitar las orientaciones, disposiciones y afectaciones correspondientes, que las instancias superiores consideren pertinentes, dando seguimiento a la ejecución y resultados obtenidos.
4. Asegurar el flujo y reflujo de la información, a través del cumplimiento oportuno y eficiente del documento rector del sistema de información.
5. Administrar los sistemas de información automatizados.
6. Ejercer por delegación del Director General labores de relaciones públicas y de divulgación, mientras se crea la División de Prensa y Relaciones Públicas.
7. Canalizar la información relativa al trabajo realizado por las distintas estructuras de la Institución, con el fin de mantener informada a la Jefatura Nacional.
8. Consultar a la Jefatura Nacional, información de interés para el cumplimiento de los eventos de dirección.
9. Presentar al Director General, propuestas de planes para su aprobación.

Artículo 19.- División de Auditoría Interna. La Auditoría Interna es el órgano facultado para fiscalizar, inspeccionar, vigilar y controlar, los recursos materiales y financieros del Sistema Penitenciario Nacional y tiene las siguientes funciones:

1. Evaluar las operaciones administrativas financieras del Sistema Penitenciario Nacional, a través de exámenes y revisiones periódicas.
2. Analizar y dar seguimiento al cumplimiento de leyes, normas y procedimientos relacionados al manejo y control de los recursos.
3. Formular recomendaciones para mejorar las operaciones contables de control, informando al Director General sobre las debilidades observadas durante el examen realizado y sugerir las soluciones del caso.
4. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República, auditoría interna del Ministerio de Gobernación y por la auditoría del Sistema Penitenciario.
5. Realizar las pruebas correspondientes de control, a fin de detectar las irregularidades, errores o deficiencias en las operaciones contables.
6. Efectuar exámenes especiales, cuando el caso lo requiera.
7. Elevar el informe sobre las auditorías o exámenes especiales, al Director General del Sistema Penitenciario Nacional, para conocimiento y posterior remisión al Ministro de Gobernación, en un plazo no mayor de treinta días.

Artículo 20.- División de Proyectos e Inversiones. Corresponde al jefe de esta División, las funciones siguientes:

1. Hacer levantamiento de necesidades en materia de proyectos de inversiones públicas del Sistema Penitenciario Nacional, relativas a infraestructura y otras.
2. Formulación de fichas y perfiles de proyectos de infraestructura y otras obras del Sistema Penitenciario Nacional.
3. Formular de manera quinquenal, proyectos de inversiones públicas.
4. Hacer levantamiento de obras en materia de infraestructura y otras obras del Sistema Penitenciario Nacional.
5. Participar en reuniones de la Dirección de Inversión Pública del Ministerio de Gobernación y otras instituciones.
6. Participar en reuniones del Comité de Licitación.

Artículo 21.- Participación de la División de Proyectos e Inversiones. En toda obra de construcción o remodelación, se debe contar con la participación técnica de la División de Proyectos e Inversiones de la Dirección General del Sistema Penitenciario y en cualquier otra obra civil que resulte necesaria para el cumplimiento y ejecución de la pena de los privados de libertad.

Artículo 22.- División de Servicios Médicos. El Jefe de la División de Servicios Médicos es el responsable de ejecutar acciones de prevención, promoción y protección de la salud de los privados de libertad.

Artículo 23 Funciones. Al Jefe de la División de Servicios Médicos, además de lo establecido en la Ley, le corresponde:

1. Asesorar al Director General en materia de salud penitenciaria, a través de la planificación, organización, vigilancia y evaluación del cumplimiento de la actividad sanitaria en los servicios médicos penitenciarios.
2. Garantizar que los privados de libertad gocen del derecho a la salud en los Centros Penitenciarios, los que contarán con las instalaciones médicas, equipos, instrumentales y fármacos necesarios para estos fines, de acuerdo al presupuesto asignado al Sistema Penitenciario.
3. Prestar atención médica ginecológica a las privadas de libertad y brindar atención especializada al recién nacido.
4. Ejecutar planes y programas destinados a garantizarla higiene y salubridad básica y preventiva en los Centros Penitenciarios.
5. Garantizar la debida asistencia médica especializada a los privados de libertad, a través del Ministerio de Salud.

Artículo 24 Personal médico. Los Centros Penitenciarios contarán con un equipo de salud, constituido por el siguiente personal: médico general, odontólogo, psiquiatra, psicólogo y un ginecólogo, así como personal auxiliar necesario para brindar una adecuada asistencia médica.

Artículo 25.- Elaboración del expediente clínico. El médico de cada Centro Penitenciario deberá elaborar y mantener actualizado, desde su ingreso, el expediente clínico de los privados de libertad.

Artículo 26 Servicios médicos especializados. Los privados de libertad podrán solicitar a su costa, servicios médicos especializados en centros asistenciales privados, previa valoración del médico del Centro Penitenciario.

Artículo 27.- Instrumento rector. Para fines de garantizar la ejecución de las políticas de supervisión, monitoreo, control, vigilancia y evaluación de las actividades de los servicios médicos penitenciarios, se establece como instrumento rector de la misma, las normas de salud penitenciaria.

Artículo 28.- Separación en caso de enfermedad. Los jefes de Centros Penitenciarios, de acuerdo a las condiciones materiales y de infraestructura, deberán separar del resto de la población penal a los internos con enfermedad mental e infecto-contagiosa, con base a dictámenes facultativos, de los cuales se informará al Juez que corresponda.

Artículo 29.- División Administrativa Financiera. El Jefe de la División Administrativa Financiera es el encargado de la administración, control y distribución de los recursos financieros, técnicos y materiales de la institución, así como de la ejecución presupuestaria.

Artículo 30.- Funciones. El Jefe de la División Administrativa Financiera tendrá las siguientes funciones:

1. Asesorar al Director General en la implementación y seguimiento de los sistemas de control interno, financieros y administrativos, de acuerdo a las leyes y normativas reguladoras de la materia.

2. Preparar y presentar al Director General la propuesta anual de requerimientos materiales y financieros para su aprobación y envío al Ministerio de Gobernación.
3. Suministrar oportunamente a la Jefatura Nacional, los diferentes informes financieros necesarios en la toma de decisiones, así como asesorarla en todo lo relacionado a la materia administrativa financiera.
4. Hacer efectivo el cumplimiento de los mecanismos de control interno, en la ejecución y uso de los recursos materiales y financieros.
5. Realizar las gestiones pertinentes ante las entidades correspondientes, en el proceso de adquisición de los medios materiales requeridos en el que hacer penitenciario, de acuerdo a las disponibilidades y programaciones de recursos.
6. Normar y supervisar la aplicación y control de las normativas de control interno en los Centros Penitenciarios.
7. Fortalecer los métodos de control interno financiero, a través del cumplimiento y actualización del Manual de Procedimientos Administrativos Financieros del Sistema Penitenciario, instrumentos que reglamentan los procesos administrativos relacionados al manejo y control de los recursos de la institución.

Artículo 31 División de Personal. Las funciones del Jefe de Personal son:

1. Establecer el control del personal.
2. Efectuar la captación, selección, ingreso y ubicación del personal, de conformidad a la Carrera Penitenciaria.
3. En el ámbito de Seguridad Social, se responsabiliza de garantizar la correcta aplicación de los beneficios que se otorgan y de las prestaciones sociales que brinda el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano.
4. Garantizar el registro y control del personal, conformando y controlando los expedientes de la vida laboral de los miembros del Sistema Penitenciario.
5. Normar, otorgar y controlar la identificación del personal.
6. Efectuar trámites y realizar las coordinaciones necesarias con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la elaboración de la nómina fiscal.
7. Proponer la creación y cambios de estructura orgánica que estén fundamentados en los parámetros establecidos.
8. Respetar las plazas vacantes y el techo presupuestario, en todos los movimientos en la vida laboral de los funcionarios penitenciarios, de conformidad al presupuesto asignado por la Ley al Sistema Penitenciario.

Para la ejecución de estos movimientos el Director de Personal, se avocará con las autoridades correspondientes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 32.- División de Escuela para Estudios Penitenciarios. La División de Escuela para Estudios Penitenciario, es el órgano rector de la educación especializada en materia penitenciaria, dirigida a los funcionarios penitenciarios.

Artículo 33.- Funciones. Son funciones del jefe de la División de Escuela para Estudios Penitenciarios las siguientes:

1. Diseñar, planificar, dirigir, coordinar, supervisar y ejecutar los planes y programas de formación, capacitación y profesionalización de los aspirantes y demás personal penitenciario activo.
2. Efectuar el registro, control académico y certificación de los diferentes eventos de formación, capacitación y preparación del personal del Sistema Penitenciario.
3. Coordinar con Instituciones y Organismos vinculados a la materia, con el fin de garantizar los conocimientos necesarios en el actuar penitenciario del personal del Sistema Penitenciario.

Artículo 34.- Personal. La División Escuela para Estudios Penitenciarios cuenta con su propio personal profesional.

Artículo 35.- Autonomía funcional. El Director de la División de Escuela para Estudios Penitenciarios, contará con autonomía funcional dentro del ámbito de las necesidades de capacitación y profesionalización del personal del Sistema Penitenciario.

Artículo 36.- Reglamento Académico. La División de Escuela para Estudios Penitenciarios, en su actividad de formación, capacitación y preparación, se regirá por su propio Reglamento Académico Interno.

Artículo 37.- Subsistemas. El Sistema de Educación Especializada en materia Penitenciaria, está integrado por cuatro subsistemas, estos son:

1. Curso Elemental Penitenciario: dirigido a nuevos ingresos y agentes penitenciarios.
2. Curso Básico: dirigido a oficiales de especialidades y personal a promocionar, según el cargo a ocupar.
3. Curso Especializado: dirigido a personal que trabaja y brinda atención especializada a los privados de libertad.
4. Curso de Profesionalización Penitenciaria: dirigido a Jefes de Departamentos y Oficiales a promocionar y miembros del Consejo de Dirección.

Los cursos de profesionalización dirigidos al Consejo de Dirección podrán realizarse en el ámbito nacional o en el extranjero.

CAPÍTULO IV

Especialidades Nacionales, Órganos Nacionales de Apoyo y Direcciones Penitenciarias

Artículo 38.- Autoridad funcional. Los Directores de Especialidades Nacionales y de órganos Nacionales de Apoyo, ejercen su autoridad funcional en los Centros Penitenciarios, en virtud de la autoridad delegada por el Director General, con respecto a sus homólogos.

Artículo 39.- Jerarquía. Los Jefes de las Especialidades y de los Órganos de Apoyo en los Centros Penitenciarios, se subordinan funcionalmente a la Especialidad Nacional y Órganos Nacionales de Apoyo y jerárquicamente al Director del Centro Penitenciario, el que a su vez se subordina al Director General.

Artículo 40.- Funciones rectoras. Los Directores de Especialidades Nacionales y órganos Nacionales de Apoyo, ejercen funciones rectoras de: asesoría, definición de normativas, supervisión, control, análisis y evaluación dentro de la esfera de su competencia.

Artículo 41.- Presentación de propuestas. Corresponde a los Directores de Especialidades Nacionales y Jefes de órganos Nacionales de Apoyo, presentar propuestas a la Dirección General sobre: políticas, estudios, diagnósticos y proyectos dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 42.- Recuentos y cotejamientos físicos. En los Centros Penitenciarios, para mantener control sobre la población penal, se establecen recuentos y cotejamientos físicos que se clasifican en: ordinarios, extraordinarios y especiales.

Artículo 43.- Población penal femenina. En el caso de los Centros Penitenciarios con población penal femenina, su dirección y administración estará a cargo de personal del mismo sexo. Salvo por razones de orden técnico, servicios especializados, seguridad y traslado, los funcionarios serán del sexo masculino, bajo la supervisión y dirección del penal. Éstos no podrán desempeñar tareas de orden interior con la población penal femenina.

Artículo 44.- Centros Penitenciarios. Sin perjuicio de la existencia del Centro Penitenciario de mujeres, y mientras se construyen Centros Penitenciarios Especializados para adolescentes, los Centros Penitenciarios existentes son considerados mixtos, preservando la separación y clasificación de la población penal por sexo y edad.

Artículo 45 Área especial. En los Centros Penitenciarios se destinará un área especial y separada del resto de la población penal, para ubicar acusados y condenados que hayan sido miembros de las instituciones a que se refiere el arto. 144 de la Ley.

Artículo 46.- Integración al Sinapred. De conformidad con la Ley y demás disposiciones legales vigentes, la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional está integrada al Sistema de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (SINAPRED), a través de la Comisión de Seguridad ante Desastres.

Artículo 47.- Coordinación. De conformidad con el artículo anterior de este Reglamento, corresponde a los Directores de Centros Penitenciarios, establecer coordinaciones con los Comités Regionales, Departamentales o Municipales, para la prevención, mitigación y atención de desastres.

Artículo 48.- Seguridad interior. En los Centros Penitenciarios se garantizará la seguridad interior, a través de orden interno, mediante la observación directa de los privados de libertad, haciendo uso de medios técnicos y auxiliares, recuentos, registros personales, requisas 'y cotejamientos físicos de los mismos.

Artículo 49.- Puestos de Mando. Los Puestos de Mando son las unidades operativas de control y transmisión de información, y tienen las siguientes funciones:

1. Enlazar la Jefatura Nacional con las distintas instancias de Dirección y viceversa.
2. Garantizar la continuidad del mando.
3. Desencadenar los distintos planes ante contingencias.

CAPÍTULO V

Dirección de Control Penal Nacional

Artículo 50.- Dirección de Control Penal Nacional. La Dirección de Control Penal Nacional, está integrada por Departamentos y tiene como objetivo garantizar el estricto registro, control

administrativo y estadístico de la población penal nacional, a través de formas especializadas auxiliares y automatizadas.

Artículo 51.- Funciones. Al Director de Control Penal, además de lo contemplado en la Ley, le corresponden las funciones siguientes:

1. Velar por que se cumpla la captación de fotografías, sistema de información y diversas formas especializadas auxiliares establecidas en el Manual de Procedimientos de esta especialidad.
2. Suministrar información legal, que con relación a los internos soliciten las siguientes instituciones: Órganos Judiciales, Procuraduría de Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, Ministerio Público, Asamblea Nacional, Policía Nacional y Organizaciones de Derechos Humanos.
3. Mantener coordinaciones con las Autoridades Judiciales, Procuraduría, Defensoría Pública, Auditoría Militar, Policía Nacional, Migración y Extranjería, Bufetes Jurídicos de las Universidades y Organismos No Gubernamentales sin fines de lucro, Organismos de Derechos Humanos u otros órganos competentes del Estado y demás instituciones relacionadas con la materia.

Artículo 52.- Ingreso. Para efectos de la Ley y el presente Reglamento, se considera Ingreso, la entrada de los ciudadanos acusados o condenados, que sean remitidos a los Centros Penitenciarios con sentencia de prisión preventiva o sentencia condenatoria de Autoridades Jurisdiccionales Penales competentes, los cuales se registrarán en el Libro de Ingreso, que debe estar sellado y foliado, cuyo formato se especifica en el Manual de Procedimientos de la especialidad.

Artículo 53.- Requisitos para el Ingreso. Los requisitos de ingreso de ciudadanos privados de libertad a un Centro Penitenciario son los siguientes:

1. Auto de prisión preventiva o sentencia condenatoria con su respectivo número de causa judicial.
2. Remisión de acusado y/o condenado, sellada y firmada por el Jefe de Policía, la que debe contener generales de ley, número de cédula, síntesis del delito y fecha de captura.
3. Dictamen médico legal, para los casos de acusados y/o condenados que padezcan alguna enfermedad crónica, presenten golpes o lesiones y para internas embarazadas.
4. Registro o Decas Dactilares.
5. Fotos tamaño Carné (de frente y de perfil)
6. Antecedentes Policiales.

Artículo 54.- Ingreso denegado. Los Jefes de Centros Penitenciarios podrán denegar el ingreso de los ciudadanos privados de libertad, cuando no reúnan los requisitos señalados en el artículo anterior.

Artículo 55.- Ingreso de ciudadano extranjero. El ingreso de un ciudadano extranjero a un Centro Penitenciario, debe ser comunicado por la Dirección de Control Penal a la Dirección Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Dirección de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación, en un plazo no mayor de 72 horas hábiles.

Artículo 56.- Reingreso. Se denomina reingreso, cuando un interno que por determinada razón egresó del Sistema Penitenciario, sin haber cumplido su pena, es remitido nuevamente a un Centro Penitenciario.

Son causas de reingreso:

1. Por recaptura.
2. Por traslado: referido a los casos de internos, que estando en el Sistema Penitenciario Nacional, son remitidos definitivamente a la Auditoría Militar y después reingresan al Centro Penitenciario donde inicialmente estaban ubicados.
3. Por suspensión de beneficio legal: son los casos de internos que habiendo egresado bajo un beneficio legal, el Juez revoca el mismo.
4. Por suspensión de beneficio penitenciario: referido a aquellos internos, que gozando del beneficio de Convivencia Familiar incumplan las regulaciones establecidas en el presente Reglamento sobre Reeducción Penal o cometan un nuevo delito y son regresados al Centro Penitenciario.
5. Suspensión o cese de ejecución diferida o medidas cautelares de prisión preventiva por autoridad jurisdiccional penal competente.

Artículo 57.- Determinación de antecedentes penitenciarios. Los antecedentes penitenciarios de un interno se determinan de conformidad al artículo 108 del presente Reglamento.

Artículo 58.- Comisión de Ingresos. Para el ingreso de ciudadanos privados de libertad por mandato judicial en los Centros Penitenciarios, se crea la Comisión de Ingreso, la cual está integrada por oficiales de Control Penal, Reeducción Penal, el médico o enfermero y un psicólogo, cuyo funcionamiento se define en el Manual de Procedimientos de la Especialidad.

Artículo 59.- Expediente penitenciario. A todo interno que ingresa a un Centro Penitenciario, se le confecciona un expediente penitenciario, el cual se identificará con el código que corresponde al centro.

En caso que se requiera, la Especialidad de Control Penal Nacional es la única autorizada para crear Códigos.

Artículo 60.- Partes del expediente. El Expediente Penitenciario está constituido por tres partes, siendo éstas las siguientes:

1. Aspectos Generales.
2. Aspectos Legales.
3. Aspectos Penitenciarios.

En el Manual de Procedimientos de la Especialidad de Control Penal Nacional se establece el contenido del expediente penitenciario.

Artículo 61.- Registro. Para el registro de los diversos movimientos de la población penal, tales como: ingresos, egresos, cambios de situación legal y otros, se establecen diversas formas especializadas y auxiliares las cuales se especifican en el Manual de Procedimientos de la Especialidad de Control Penal Nacional.

Artículo 62.- Tarjeteros. Los tarjeteros o cualquier otro medio de información electrónica, constituyen un archivo o registro de la información de los privados de libertad y fuente para la actualización de la base de datos. Se establece para tal efecto los siguientes:

1 Tarjetero Activos: integrados por las tarjetas de los internos que se encuentren físicamente en los Centros Penitenciarios del país. Se subdivide en:

1.1 Tarjeta Básica.

1.2 Tarjeta de Registro de Diligencia.

1.3 Tarjeta de Ejecución de la Pena.

2. Tarjetero Inactivos o de Baja: integrados por las tarjetas básicas de los internos que causen baja definitiva de los Centros Penitenciarios, en virtud de: libertad, convivencia familiar, prófugos y fallecidos.

Artículo 63.- De los traslados. Es competencia del Director General del Sistema Penitenciario, ordenar traslados de privados de libertad de un Centro Penitenciario a otro, a solicitud del interno, de su familia, por medidas de seguridad, cuando la población penal supere el número de plazas o capacidad disponible en un Centro Penitenciario.

Los traslados de internos efectuados por solicitud propia, de su familia o cuando se supere el número de plazas y capacidad disponible del centro, serán únicamente para internos condenados, comunicándose de previo al Juez de ejecución de la pena.

Los traslados por medidas de seguridad son aplicables a internos acusados y condenados, lo cual debe ser comunicado al Juez competente en las 24 horas subsiguientes, así como a los familiares o allegados que designe el privado de libertad.

Artículo 64.- Tipos de Traslados:

1. Traslados Temporales: son movimientos que alteran la cantidad de la población penal física de un Centro Penitenciario, pero no sus estadísticas; tendrán un plazo máximo de 3 meses y serán autorizados por la autoridad penitenciaria que corresponda, informándose al Juez competente.

2. Traslados Permanentes: Son movimientos intercentros que alteran la cantidad de la población penal física y estadística de los centros involucrados, pero no la estadística de la población penal nacional.

Artículo 65.- Conducciones de internos. Los traslados y presentaciones de los internos ante la autoridad judicial, clínicas, hospitales o cualquier otro sitio, deben estar soportados con "Orden de Conducción".

Los Directores de Centros Penitenciarios son los responsables de garantizar la plena identificación de los internos a través de los documentos establecidos, así como la presencia de los internos en las presentaciones judiciales en lugar, hora y fecha que señala la autoridad competente.

Si por causas justificadas no se pueda cumplir con las presentaciones de internos a diligencias judiciales, se informará por escrito al Juez competente, explicando el motivo por el cual no se presentó al interno.

Artículo 66.- Cambio de situación legal. El Sistema Penitenciario Nacional debe actualizar y adecuar la información sobre el estado de las causas por la cual está siendo procesado el interno y sufre modificación en su situación legal, pasando de acusado a condenado y viceversa. Los cambios de situación legal se deben registrar en los libros auxiliares de ingresos y egresos, según corresponda.

De igual manera, cuando se reciba nueva causa de un privado de libertad, ésta será registrada en las formas correspondientes.

Artículo 67.- Egresos. Se considera egreso, a la baja física y estadística que altera la población penal en los Centros Penitenciarios, por motivo de libertad ordenada por juez penal competente, fuga, fallecimiento, amnistía e indulto.

Artículo 68.- Libertad del interno. El Director del Centro Penitenciario, una vez recibida la orden de libertad por escrito de autoridad competente, garantizará su plena identificación física, a través de la foto y demás documentos, realizando la excarcelación inmediata del mismo, salvo que tuviese otras causas o penas pendientes, las cuales se darán a conocer a las autoridades judiciales competentes.

En los casos de los internos beneficiados por indulto o amnistía, éstos serán excarcelados con la presentación de la Certificación de La Gaceta, Diario Oficial en que se haya publicado, previa comunicación del Director del Centro al Director General del Sistema Penitenciario Nacional.

Artículo 69 Registro de egresos. Todo egreso de interno será registrado en un libro habilitado para tales efectos, debidamente foliado y sellado. En el Manual de Procedimientos de Control Penal se establecerá toda la información y requisitos necesarios para realizarlo.

Artículo 70.- Evaluación de conducta. Cuando los Directores de Centros Penitenciarios reciban solicitudes de evaluaciones de conducta de los internos, de parte de las autoridades judiciales, legislativas y administrativas u otros casos, garantizarán su entrega en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la recepción de la solicitud.

Es responsabilidad de las Especialidades de Control Penal y Reeducción Penal, tramitar y elaborar, en lo que les corresponda, las evaluaciones de conducta, cuyo procedimiento y contenido se define en los manuales de estas especialidades.

Artículo 71.- Valoraciones médicas. La Especialidad de Control Penal es la encargada de tramitar las solicitudes de valoraciones médicas de los privados de libertad que remitan las autoridades judiciales, las que serán entregadas en un plazo máximo de setenta y dos horas hábiles.

De igual manera, le corresponde a esta especialidad gestionar ante la autoridad correspondiente, copia de los dictámenes médicos forense para el cumplimiento de las recomendaciones facultativas.

Artículo 72.- Coordinaciones. El Director o Sub-Director del Centro Penitenciario y el Jefe del Departamento de Control Penal deben participar en las reuniones interinstitucionales, con el fin de coordinar, evaluar y suministrar información referida a la población penal.

Artículo 73.- Otras responsabilidades. Es responsabilidad del Director de la Especialidad de Control Penal Nacional, dar seguimiento y evaluar las coordinaciones en las que participen los homólogos de los Centros Penitenciarios.

Artículo 74.- Coordinación. Los Directores de Centros Penitenciarios deben coordinar con Organismos e Instituciones de Derechos Humanos, Bufetes Jurídicos de las Universidades y

Organismos No Gubernamentales sin fines de lucro y autoridades judiciales competentes, para proponer beneficios legales a los internos de conformidad con la ley de la materia.

Artículo 75.- Juez ejecutor. Cuando se presente un Juez Ejecutor de un Recurso de Amparo, previa identificación, será atendido por el Director del Centro Penitenciario sin guardar antesala y en ausencia de éste por el Sub-Director y/o el Jefe de Departamento de Control Penal.

Artículo 76.- Acceso restringido. Los Directores de Centros Penitenciarios podrán restringir el acceso de representantes legales de los internos, autoridades judiciales y otros en las situaciones siguientes:

1. Brotes epidémicos.
2. Motines.
3. Secuestros.
4. Cualquier otra alteración grave al orden interior.

Artículo 77.- Los Directores de Centros Penitenciarios deben otorgar a los privados de libertad las facilidades necesarias, a fin de que estos puedan comunicarse libre y privadamente con el Juez Penal de la causa y con su abogado defensor debidamente acreditado, en correspondencia al Manual de Procedimientos de Control Penal.

CAPÍTULO VI

Dirección de Seguridad Penal Nacional

Artículo 78.- Seguridad penal. La Seguridad Penal es el conjunto de medidas, actividades y dispositivos que se establecen, con el fin de garantizar las conducciones, traslados, la integridad física de los internos, así como el personal penitenciario y público que visitan los Centros Penitenciarios, la infraestructura y bienes del Estado a cargo del Sistema Penitenciario Nacional.

Artículo 79.- Funciones. La Dirección de Seguridad Penal tiene la función de asesorar, planificar, controlar y evaluar las actividades y planes de seguridad de los Centros Penitenciarios y el movimiento diario de los privados de libertad, a lo interno y externo de los Centros Penitenciarios.

Artículo 80.- Planes operativos. Los Directores de Centros Penitenciarios, elaboran y actualizan los planes operativos de seguridad y anti-contingencias, los especiales y los de conducción y traslado. Estos planes serán revisados por el Director de Seguridad Penal Nacional y aprobados por el Director General del Sistema Penitenciario Nacional.

Artículo 81.- Cumplimiento de medidas de seguridad. Corresponde al Director de Seguridad Penal Nacional verificar el cumplimiento de las medidas y dispositivos de seguridad, elaborar análisis y diagnósticos relativos a la seguridad de los Centros Penitenciarios del país, determinar las recomendaciones para implementar nuevos procedimientos y adecuar los dispositivos de seguridad.

Artículo 82.- Seguridad externa: Es el conjunto de medidas y dispositivos de carácter externo, que regulan y garantizan las conducciones y traslados de los privados de libertad al exterior de los Centros Penitenciarios, así como la inviolabilidad a la seguridad perimetral de dichos centros.

Artículo 83.- Implementación de medidas. El Jefe del Departamento de Seguridad Penal en los Centros Penitenciarios, en la implementación de las medidas y dispositivos de seguridad, tendrá en consideración la clasificación y compartimentación de la población penal por régimen, atendiendo al

nivel de adaptación, el grado de peligrosidad y riesgos para la convivencia de los demás internos y personal penitenciario.

Artículo 84.- Máxima seguridad. Los Centros Penitenciarios dispondrán de locales de máxima seguridad para la ubicación en contingente de seguridad a los internos, que por su nivel de adaptación y grado de peligrosidad, pongan en riesgo la seguridad interna del penal, la vida e integridad física del personal y de los internos.

Artículo 85.- Prohibición de uso de armas. En los Centros Penitenciarios, se prohíbe el acceso armado al interior penal y áreas conexas en donde se movilicen privados de libertad, salvo por las circunstancias de motín, secuestro, fuga y la preservación de las instalaciones del centro penal.

Artículo 86.- Autorización para el uso de armas. Los funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional, en general, como parte integrante del sistema de seguridad de la nación, quedan autorizados para el uso de armas de fuego y medios técnicos en el ejercicio de sus funciones.

Se consideran medios técnicos, entre otros: escopetas con munición de goma, lanza granada de gases, bombas lacrimógenas, aerosoles disuasivos, pistolas de señales, clavos, bastones eléctricos, esposas, detectores, escudos, cascos, chalecos de protección, técnica canina, cámaras de circuito cerrado, mallas eléctricas.

Artículo 87.- Inventario de armas de fuego y equipos. El Director General del Sistema Penitenciario, remitirá al Ministro de Gobernación, informe detallado del inventario de armas de fuego y equipos que tiene a su disposición para ejercer las tareas penitenciarias.

Los funcionarios penitenciarios con las denominaciones de: Prefecto, Sub-Prefectos, Alcaldes y Sub Alcaldes, podrán portar armas de fuego defensivas, fuera de las instalaciones de los Centros Penitenciarios.

Artículo 88.- De conformidad con el arto. 27 de la Ley, los funcionarios del Sistema Penitenciario tendrán derecho de hacer uso racional de la fuerza para evitar la fuga, restablecer el orden interno, vencer la resistencia activa o pasiva de los internos, de sus familiares o cualquier otra persona.

Artículo 89.- Principio de Racionalidad y Proporcionalidad. Los funcionarios del Sistema Penitenciario, en última instancia, podrán utilizar armas de fuego bajo los principios de racionalidad, proporcionalidad y responsabilidad en los siguientes casos: legítima defensa, fuga e intento de fuga, amotinamiento y secuestro.

Artículo 90.- En el intento de fuga, el funcionario penitenciario debe efectuar dos disparos preventivos antes del disparo directo que se efectuará a los miembros inferiores, además se debe evitar poner en riesgo a terceros.

Tanto en el amotinamiento como en el secuestro, cuando los internos tengan armas de fuego en su poder y se haya agotado toda posibilidad de negociación, la autoridad superior del Centro Penitenciario autorizará el uso de armas de fuego bajo los principios de racionalidad proporcionalidad y responsabilidad.

Artículo 91.- Trabajo preventivo. La seguridad penal contará con la especialidad del trabajo de interés preventivo, que se encarga de la búsqueda, recopilación y procesamiento de la información relacionada a: planes de fugas, secuestros, amotinamientos, homicidios, asesinatos, suicidios, introducción de drogas y demás objetos prohibidos; pudiendo coordinar su actividad con la Policía Nacional. También dirige su actividad a la información y seguimiento de prófugos,

Artículo 92.- Técnica canina. Como actividad auxiliar, la seguridad penal cuenta con la técnica canina para el resguardo de los Centros Penitenciarios, detectar la introducción de drogas, persecución, búsqueda y captura de prófugos.

Artículo 93.- Conducción y traslado. En la ejecución de conducción y traslados de los privados de libertad fuera del Centro Penitenciario, por orden de autoridad judicial competente o penitenciaria en su caso, se elaborará la "Orden de Conducción y Traslado", la cual será firmada por el Director del Centro Penitenciario o a quien este delegare, guardando las medidas de seguridad para garantizar la integridad física del interno y de los funcionarios penitenciarios.

En casos especiales, para efectuar la conducción y traslados de los internos, el Director del Centro Penitenciario solicitará apoyo a la Policía Nacional.

Las Autoridades del Sistema Penitenciario, en la realización de conducciones y traslados de privados de libertad, están autorizadas para utilizar: sirenas, señales luminosas, silbatos, lámparas, guantes y otros dispositivos técnicos afines.

Artículo 94.- Determinación del área perimetral. Los Jefes de Centros Penitenciarios, en conjunto con la Especialidad de Seguridad Penal Nacional, determinarán el área perimetral de cada penal, como área restringida de seguridad, para evitar el acceso de personas ajenas al Centro Penitenciario. Las personas que no respeten la señalización del área perimetral, lo harán a su cuenta y riesgo.

Artículo 95.- Autorización para ingresar. Las personas que visiten los Centros Penitenciarios, para ingresara los mismos, requerirán de autorización, previa identificación y deberán acatarlas normas de seguridad establecidas en cada Centro Penitenciario.

Artículo 96.- Visita de funcionarios. Los funcionarios diplomáticos, consulares, Organismos Internacionales de Derechos Humanos, periodistas nacionales y extranjeros que deseen visitar los Centros Penitenciarios, pedirán autorización al Director General del Sistema Penitenciario.

Artículo 97.- Vestimenta de los internos. Por medidas de seguridad, la vestimenta de los privados de libertad será de color azul.

Artículo 98.- Manual de Procedimientos de Seguridad Penal. El Director de la Especialidad de Seguridad Penal, para el cumplimiento del presente Reglamento, garantizará en el Manual de Procedimientos de Seguridad Penal, lo establecido respecto a: servicio de guardia, uso y empleo de la fuerza y armas de fuego, trabajo de interés preventivo, conducciones, traslados, técnica canina, entre otros.

CAPÍTULO VII

Dirección de Reeducción Penal Nacional

Artículo 99.- Dirección de Reeducción Penal. La Dirección de Reeducción Penal está integrada por Departamentos y tiene por objetivo la rehabilitación social de los internos, con el fin de lograr la reinserción de éstos a la sociedad.

Artículo 100.- Funciones. Corresponde al Director de Reeducción Penal, además de lo contemplado en la Ley, las siguientes funciones:

1. Realizar las coordinaciones conforme a lo establecido en los artos. 11, 30 y 75 de la Ley.
2. Velar por la ejecución de programas reeducativos dirigidos a la población penal.

3. Garantizar el cumplimiento de las prerrogativas establecidas para cada una de las fases del sistema progresivo.
4. Promover y desarrollar actividades de orden educativo, deportivas, socio-laborales, recreativas y artísticas, que contribuyan a la estabilidad y el desarrollo físico, psíquico y emocional de la población penal.
5. Desarrollar actividades que involucren la participación del núcleo familiar del interno y la comunidad, como parte del proceso reeducativo de los mismos.
6. Dar seguimiento y evaluar el funcionamiento de los equipos interdisciplinarios, los distintos consejos, comités, asociaciones civiles y religiosas, nacionales y extranjeras que apoyen el trabajo penitenciario.
7. Controlar y evaluar la aplicación de los diferentes Regímenes del Sistema Progresivo.
8. Garantizar el respeto a los derechos de los internos y el cumplimiento de las obligaciones o deberes por parte de éstos.
9. Velar por la adecuada aplicación de las medidas restrictivas y sanciones a los internos.

CAPÍTULO VIII

Régimen Penitenciario

Artículo 101.- Régimen Penitenciario. El Régimen Penitenciario, es el conjunto de normas jurídicas establecidas por la Ley, el presente Reglamento y las disposiciones de carácter administrativas que tutelan y controlan la convivencia pacífica de la población penal, la disciplina y el orden interno en los centros penitenciarios.

Artículo 102.- Una vez ingresado un ciudadano acusado y/o condenado, las autoridades del Centro Penitenciario, le darán a conocer el reglamento y demás normativas disciplinarias.

Artículo 103.- Las autoridades del centro penitenciario le darán a conocer a los internos, el horario de actividades ordinarias y extraordinarias que se realizan en los mismos.

Artículo 104.- Sistema progresivo. El cumplimiento del objetivo de la ejecución de la pena y rehabilitación social del interno se sustenta en el sistema progresivo en sus diferentes fases. Para efectos de aplicación del sistema progresivo, se consideran internos en prisión preventiva, aquellos que no cuentan con sentencia condenatoria firme. Los internos en prisión preventiva no están sujetos al sistema progresivo.

Artículo 105.- El sistema progresivo no es aplicable a los adolescentes, por cuanto éstos deben someterse al plan individual establecido por el sistema penitenciario para tal efecto, el cual será controlado y supervisado por la Oficina de Ejecución y Vigilancia de las sanciones penales a los adolescentes.

Artículo 106.- Ejecución de la pena y medidas cautelares. La ejecución de la pena y las medidas cautelares privativas de libertad, se llevan a cabo en los centros penitenciarios, que son los establecimientos administrativos y funcionales que cuentan con locales y ambientes que facilitan la clasificación y separación de los internos.

Artículo 107.- Los Directores de centros penitenciarios tienen bajo su responsabilidad la administración, control y resguardo de los internos.

Artículo 108.- Antecedente penitenciario. Para efectos de seguridad y progresión, se considera antecedente penitenciario, a las veces que un interno ha estado en prisión en situación de condenado.

Si el interno ingresa por varios delitos independientes entre sí o estando con sentencia condenatoria, es juzgado y condenado por otro hecho anterior o posterior a la condena por la cual se encuentra privado de libertad, se le adecuará la ruta progresiva.

Artículo 109.- Régimenes del sistema progresivo. Para la aplicación del sistema progresivo, se establecen los siguientes regimenes:

1. Adaptación.
2. Laboral.
3. Semi-Abierto.
4. Abierto.
5. Convivencia Familiar.

Artículo 110.- Régimen de Adaptación: Es aquel en donde se ubican a los internos que ingresan condenados, los que estando en prisión preventiva hayan sido condenados, los que son regresados en régimen, los recapturados, los implicados en fugas, motines y cualquier hecho de violencia.

Los internos ubicados en este régimen deberán ser evaluados por el equipo interdisciplinario de cada centro penitenciario, en un periodo máximo de seis meses, pudiendo realizarse dicha evaluación antes de cumplirse este período.

En este régimen los internos permanecen dentro de las celdas bajo estricto control y vigilancia, con limitada participación en actividades artísticas y recreativas.

Artículo 111.- Régimen Laboral: Se ubican en este régimen a los internos que voluntariamente aceptan el tratamiento reeducativo, los que son regresados del Régimen Semi-abierto, los que estando en prisión preventiva son condenados y hayan demostrado buen comportamiento.

Los internos permanecen en galerías y celdas sin candado desde las 8:00 hrs. hasta las 21:00 hrs., y / o de acuerdo a las condiciones físicas del penal, salvo casos excepcionales.

Artículo 112.- Régimen Semi-Abierto: Es donde se ubican a los internos que han progresado del régimen laboral y los que regresan del Régimen Abierto; así mismo, se ubicarán en este régimen a los privados de libertad condenados a penas por la comisión de delitos menos graves y que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 62 de la Ley.

Estos internos permanecen en instalaciones dentro o fuera del penal, bajo condiciones mínimas de seguridad.

Artículo 113.- Régimen Abierto: En éste se ubican los internos que progresen del Régimen Semi-Abierto y los que regresan del Régimen de Convivencia Familiar. Se caracteriza por la ausencia de vigilancia y control rígido, con autorregulación de la disciplina por parte de los internos. En la medida de lo posible, se ubicará fuera del área perimetral del centro penitenciario.

Artículo 114.- Convivencia Familiar: A este régimen se incorporan los privados de libertad que progresan del Régimen Abierto, integrándose al núcleo familiar, desarrollando actividades comunes de todo ciudadano, manteniéndose bajo el control del Sistema Penitenciario, a través del Departamento de Reeducción Penal hasta el cumplimiento de su condena, o bien, hasta obtener un beneficio legal de autoridad judicial competente, indulto o amnistía. Para efectos de control del interno en Convivencia Familiar, se llevará un libro.

Artículo 115.- Progresión. Para la progresión al Régimen de Convivencia Familiar, el Director del Centro Penitenciario, previa coordinación con el Juez de Ejecución de la Pena, debe remitir la propuesta al Director de Reeducción Penal Nacional, para su revisión, a fin de que el Director General del Sistema Penitenciario la apruebe o deniegue.

Artículo 116.- Obligaciones. El interno a quién se le concede el beneficio de la Convivencia Familiar, debe cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Mantener permanentemente el respaldo del familiar que tutela su estadia en este Régimen ante el Sistema Penitenciario.
2. Reportarse al centro penitenciario correspondiente cada mes o cada dos meses, dependiendo de la distancia.
3. Reportar al centro penitenciario el cambio de domicilio o trabajo.
4. No concurrir a lugares de expendios de bebidas alcohólicas, casas de juegos, no participar en juegos de azar, abstenerse de transitar por lugares que estén restringidos por la sentencia, asimismo no provocar hechos que alteren el orden público ni violencia interfamiliar.
5. No salir del país, ni del departamento donde radica su domicilio. Si por razones de trabajo tiene que movilizarse, debe comunicar esto al centro penitenciario correspondiente, a fin de que le otorgue permiso.

Artículo 117.- Permisos de salida. Los internos que se encuentran en Régimen Semi-Abierto o Abierto, que por Ley no contemple ningún tipo de fianza o beneficio, no gozarán de las prerrogativas de permisos de salidas ni del Régimen de Convivencia Familiar.

Artículo 118.- Los internos con antecedentes penitenciarios multireincidentes, quedan privados del beneficio de Convivencia Familiar, así como gozar de las prerrogativas de permiso de salida.

Artículo 119.- Convivencia familiar extraordinaria. Los centros penitenciarios, de acuerdo con los recursos materiales que posean, procurarán acondicionar ambientes o unidades, para las internas en período pre y post natal. De no existir estas condiciones, se tramitará la Convivencia Familiar ante la autoridad judicial competente.

En el caso donde la Ley penal no admite fianza, se les otorgará a las internas Convivencia Familiar hasta por seis meses. Para los otros delitos, la Convivencia Familiar será hasta dos años.

Artículo 120.- A los privados de libertad mayores de 70 años o los que padezcan de enfermedades crónicas o en fase terminal, se les otorgará la Convivencia Familiar, previa valoración del médico forense.

Para los efectos de los artículos 33 y 95 numeral 18 de la Ley, el Director del centro penitenciario informará a la autoridad judicial competente las circunstancias o condición del interno.

Artículo 121.- Procedimientos para la progresión. La Progresión en régimen, se hace con base a la evaluación que realiza el equipo interdisciplinario al interno y es presentada al Director del Centro Penitenciario, el que se encargará de aprobar o denegar la propuesta.

La ruta progresiva se inicia a partir del Régimen Laboral.

Para los internos, con penas por la comisión de delitos menos graves, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 de la Ley y el presente Reglamento, exceptuándose aquellos internos con penas hasta de un año inclusive, quienes permanecerán en Régimen Semi-Abierto el total de la condena.

Artículo 122.- Porcentajes de Permanencia por Régimen.

Primarios con penas por la comisión de delitos menos graves:

Régimen Semi-Abierto: 35%

Régimen Abierto: 25%

Convivencia Familiar: 40%

Primarios con penas por la comisión de delitos graves:

Régimen Laboral: 40%

Régimen Semi-Abierto: 20%

Régimen Abierto: 10%

Convivencia Familiar: 25%

Reincidentes Penitenciarios:

Régimen Laboral: 60%

Régimen Semi-Abierto: 20%

Régimen Abierto: 10%

Convivencia Familiar: 10%

Multireincidentes Penitenciarios:

Régimen Laboral: 70%

Régimen Semi-Abierto: 20%

Régimen Abierto: 10%

Artículo 123.- Promoción.- Son promovidos en régimen, aquellos internos que de manera satisfactoria hayan cumplido con lo establecido en el artículo 62 de la Ley y las siguientes causales:

1. No haber sido objeto de medidas correctivas o sanciones disciplinarias severas o muy severas en los últimos seis meses.

2. Cumplir con el porcentaje de tiempo establecido en el régimen donde se encuentra.

Artículo 124 Excepciones del trabajo penitenciario. Los internos mayores de sesenta años, que por prescripción médica no deban trabajar, los que tengan problema de discapacidad permanente, las mujeres embarazadas, estén exceptuados de trabajar y esta condición no afectará su progresión en régimen.

Artículo 125.- Prorroga. Cuando se prorrogue la progresión en régimen de un interno, se establece un período de 3 a 6 meses para ser evaluado nuevamente por el equipo interdisciplinario, después de este período, presentará la propuesta de progresión ante el Director del Centro Penitenciario.

Artículo 126.- Medidas preventivas. Cuando esté en riesgo la integridad física y seguridad personal de un interno, el centro del centro penitenciario debe tomar las medidas preventivas pertinentes, ubicándolo en un local que garantice su protección o en otro centro penitenciario, sin perjuicio que continúe recibiendo las prerrogativas que le corresponde, según el régimen que pertenece.

Artículo 127.- Prerrogativas de los Regímenes. De conformidad a lo establecido en la Ley y el presente reglamento, los internos designarán a las personas que deseen que los visiten, hasta un máximo de ocho, quienes se identificarán y registrarán en la tarjeta de control de visitantes, extendiéndosele carné de visitantes.

Artículo 128.- Visitas familiares. En las visitas familiares, ingresarán al área de visita del centro penitenciario, hasta un máximo de seis personas mayores de 12 años por interno a visitar. Se permite la entrada de niños menores de 12 años, cuando vengan acompañados de sus padres, tutores o guardadores e ingresarán sin carné de visitantes.

A los visitantes mayores de 12 años y menores de 16 no se les requerirá identificación para extenderles carné de visitantes.

Artículo 129.- Plazos. Los plazos para hacer los cambios de algunos de los visitantes registrados y autorizados para visitas familiares, será de tres (3) meses. Para realizar cambio de cónyuge, compañera o compañero en unión de hecho estable, en la tarjeta de visita conyugal o familiar, el plazo será de seis (6) meses.

Los internos podrán registrar únicamente a un cónyuge, compañero o compañera en unión de hecho estable.

Artículo 130.- Periodicidad de visitas. La periodicidad de las visitas familiares y conyugales para los internos ubicados en los diferentes regímenes, será la siguiente:

Adaptación Laboral Semiabierto Abierto

Cada 21 días Cada 15 días Cada 8 días cada 8 días

Los privados de libertad que se encuentren en contingente de seguridad y máxima seguridad, recibirán visitas familiares, conyugales y comunicaciones telefónicas cada 30 días.

Artículo 131.- Duración de las visitas. Las visitas familiares tendrán una duración máxima de tres horas y las visitas conyugales tendrán una duración de dos horas.

Artículo 132.- Comunicación Telefónica. Para efecto de la comunicación telefónica, éstas se ejecutarán a través del servicio público, estableciéndose la siguiente periodicidad por régimen penitenciario.

Adaptación Laboral Semi-Abierto Abierto

Quincenal Semanal Dos veces a la semana sin restricciones

Las visitas y comunicaciones con familiares o personas allegadas al núcleo familiar, se regularán por un plan elaborado por el Jefe de cada centro penitenciario.

Artículo 133.- Duración de la comunicación. Las comunicaciones telefónicas tendrán duración máxima de 15 minutos y las mismas se efectuarán bajo supervisión de las autoridades penitenciarias, de lunes a viernes en horas hábiles de trabajo.

Artículo 134.- Prioridad de las visitas. El personal de atención y trámite de los centros penitenciarios, priorizará el ingreso durante la visita familiar a los ancianos, embarazadas y personas con problemas de discapacidad, a quienes se les facilitará la comodidad en locales o áreas especiales, mientras no se cuenten con las condiciones adecuadas.

Artículo 135.- Identificación. Toda persona que ingrese al interior de los centros penitenciarios debe identificarse con su cédula. Las personas que visitan a los privados de libertad, deben presentar el carné de visitante el que contendrá su fotografía.

Artículo 136.- Permiso de salida. A los internos ubicados en los regímenes Semi-Abierto y Abierto, se les otorga permiso de salida sin custodia. El procedimiento para otorgarlo y el término de duración de este, se establecerá en el Manual de Procedimientos de Reeducción Penal y no excederá de un máximo de seis días calendario. La periodicidad de estos permisos es la siguiente:

Semi-Abierto Abierto

Permiso de salida Cada 60 días Cada 45 días

Permiso de salida ampliada No goza Cada 6 meses

Artículo 137.- Otras prerrogativas. Las demás prerrogativas otorgadas a los internos, según el régimen en que se encuentran, se regularán en el Manual de Procedimientos de Reeducción Penal.

Artículo 138.- Regresión del Régimen. Para la regresión a un régimen inmediato inferior comprendidos en los Regímenes Laboral, Semi Abierto y Abierto, el equipo interdisciplinario del centro penitenciario realizará evaluación del interno, que presentará al Director del Centro Penitenciario quién la aprobará o denegará.

La regresión en régimen se hará efectiva considerando las causales establecidas en el artículo 64 de la Ley. Para los internos que gozan del Régimen de Convivencia Familiar se considerará además de lo señalado anteriormente, el incumplimiento de las obligaciones indicadas en el artículo 116 del presente Reglamento.

Artículo 139.- Regresión. La regresión del Régimen de Convivencia Familiar, será aprobada por el Director General del Sistema Penitenciario Nacional, a propuesta del Director del Centro Penitenciario.

Artículo 140.- Visitas especiales. Las visitas especiales son aquellas que de forma excepcional se les otorga a los internos por espacio de una hora, atendiendo a las siguientes razones:

1. Al ingresar el interno al Centro Penitenciario.
2. Cuando es visitado por un pariente o amigo residente en el exterior o región lejana del centro penitenciario.
3. Por estímulo.
4. A los familiares que por causas justificadas no pudieron asistir a la visita familiar planificada.
5. Cuando cause traslado el interno de un Centro Penitenciario a otro.
6. Cuando el que solicita la visita sea un pariente o amigo que de forma regular no visita al interno.

La autoridad facultada para autorizar estas visitas será establecida en el Manual de Procedimientos de Reeducción Penal.

CAPÍTULO IX

Tratamiento Penitenciario

Artículo 141.- Tratamiento Penitenciario. El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades organizadas por la Dirección de Reeducción Penal y garantizadas por los Directores de los Centros Penitenciarios, con el objetivo de desarrollar una actitud de auto-respeto, responsabilidad individual y social del privado de libertad, con relación a su familia y la sociedad.

Artículo 142.- Sistema de contingente. El Sistema de Contingente, es la organización básica que se utiliza en los centros penitenciarios para efecto del tratamiento y reeducación de los internos, el cual está conformado por grupos de 30 a 60 internos denominados contingentes.

Artículo 143.- Equipo Interdisciplinario. El equipo interdisciplinario es la estructura existente en cada uno de los centros penitenciarios, con criterio técnico y autonomía funcional. Además de las funciones establecidas en la Ley, le corresponde: la ubicación, clasificación, tratamiento, progresión, prórroga y regresión en régimen de los privados de libertad, así como la aplicación de sanciones disciplinarias.

Para su funcionamiento se auxiliará del Consejo Evaluativo, Consejo Disciplinario, Consejo de Internos y Comité de Familiares.

Artículo 144.- Funciones específicas. El Equipo Interdisciplinario, además de las funciones generales establecidas en la Ley y el presente Reglamento, cumple con las siguientes funciones específicas:

1. Planificar reuniones mensuales y trimestrales para determinar la progresión, prórroga y regresión en régimen a los internos.
2. Reunirse extraordinariamente por convocatoria del Director del centro, a solicitud de uno de sus miembros o cuando la situación lo amerite.
3. Participar durante el ingreso de internos, con el fin de determinar la ubicación física en el centro penitenciario y tratamiento a aplicar a los internos.
4. Dar seguimiento y analizar el tratamiento brindado, individual y colectivamente a la población penal condenada.
5. Realizar estudios y presentar propuestas orientadas al trabajo penitenciario y de tratamiento.

Artículo 145.- Participación de la sociedad. Con el fin de promover e impulsar la participación de la sociedad en el tratamiento penitenciario, el Jefe de Departamento de Reeducción Penal de cada centro, establecerá un plan para regular la asistencia y ayuda ofrecidas por el Comité de Familiares, Instituciones Gubernamentales, Iglesias legalmente reconocidas, Asociaciones Civiles sin fines de lucro y ciudadanos en particular".

Artículo 146. - La integración y funcionamiento del Consejo Evaluativo, Consejo Disciplinario, Consejo de Internos y Comité de Familiares, se define en el Manual de Procedimientos de Reeducción Penal.

CAPÍTULO X

Régimen Disciplinario

Artículo 147.- Régimen Disciplinario. La disciplina penitenciaria consiste en el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos, normativas, directrices y demás disposiciones que regulan la conducta del interno.

Todo hecho violatorio a lo normado, será corregido disciplinariamente, existiendo correspondencia proporcional, entre la infracción cometida y la sanción aplicada.

Artículo 148.- El régimen disciplinario de los privados de libertad está dirigido a garantizar la seguridad, integridad física y moral, la convivencia pacífica y ordenada de los internos.

Artículo 149.- órgano colegiado. El Equipo Interdisciplinario, es el órgano colegiado para la aplicación de las sanciones disciplinarias.

Artículo 150.- Derechos. Además de los Derechos establecidos para los internos en el artículo 95 de la Ley, se reconocen los siguientes:

1. A ser informado sobre sus derechos, obligaciones, prohibiciones y las normativas existentes en los centros penitenciarios.
2. A obtener permiso extraordinario de salida transitoria, en caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, hermanos, cónyuge e hijos. Se exceptúan los permisos a internos de alta peligrosidad y los que por medida de seguridad no puedan visitar el lugar en donde se cometió el acto punible.
3. A que se le informe en caso de defunción o enfermedad grave de familiares directos o parientes cercanos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo mismo que su compañero o compañera en unión de hecho estable.
4. A que la familia del interno sea informada en caso de enfermedad grave o muerte. En caso que el interno no tenga familia que lo visite, se informará a los organismos humanitarios.
5. A gozar de permiso de salida por un máximo de 72 horas, para los internos ubicados en Régimen Semi-Abierto y Abierto.
6. A ser trasladado a otro centro penitenciario con sus pertenencias y que se informe a su familia o personas designadas por él sobre esta circunstancia.
7. A ser valorado por el equipo interdisciplinario para su progresión al régimen que le corresponda.
8. A mantener comunicación escrita y telefónica con sus familiares y allegados, según el régimen en que se encuentre ubicado y las condiciones existentes en el centro penitenciario.
9. A ser informado de la infracción cometida y la sanción que se le impondrá de acuerdo a la Ley y el presente Reglamento.
10. A mantener comunicación con su representante legal, en días y horas hábiles.

Artículo 151.- Derechos de los adolescentes. Los Derechos de los adolescentes son los establecidos en el artículo 97 de la Ley.

Artículo 152.- Derechos de los Internos en prisión preventiva. Los internos en prisión preventiva gozarán de todos los derechos establecidos en la Ley y el presente Reglamento, excepto los derivados de la aplicación del tratamiento penitenciario en el sistema progresivo.

Artículo 153.- Obligaciones. Además de las obligaciones establecidas en el artículo 96 de la Ley, se establecen las siguientes:

1. Cuidar las instalaciones físicas del Centro Penitenciario y demás bienes puestos a su disposición.
2. Asistir a las visitas programadas en orden y vestido de color azul.
3. Cumplir con las normas de higiene y aseo personal, manteniéndose correctamente vestido, con el cabello corto y rasurado.
4. Permanecer disciplinadamente en el área designada para las distintas actividades que se desarrollen, según lo dispuesto por las autoridades del centro penitenciario.
5. Cumplir y regirse por el horario establecido por el centro penitenciario, en la realización de todas y cada una de las labores ordinarias y extraordinarias del penal.
6. Asistir sistemáticamente a las diversas actividades reeducativas en las que está inscrito, manteniendo el orden y la disciplina.

Artículo 154.- Prohibiciones. A los privados de libertad condenados y en prisión preventiva, que ingresen a los centros penitenciarios, se les prohíbe lo siguiente:

1. Participar en riñas y agresión a funcionarios, interno, y personas que visitan el centro penitenciario.
2. Inducir y/o participar en desórdenes, motines, disturbios, planes de fuga, o inducir a huelgas de hambre.
3. Tener o confeccionar armas de fuego, armas blancas, cortantes, punzantes, lacerantes o contundentes.
4. Elaborar, poseer, traficar, almacenar, introducir, o ingerir bebidas espirituosas, lo mismo que estupefacientes, psicotrópicas y otras sustancias controladas. Esta misma prohibición es extensiva a los medicamentos que no estén registrados para su tratamiento por prescripción médica, la cual será controlada por los servicios médicos del centro penitenciario.
5. Vender, comprar o cambiar artículos u objetos.
6. Poseer dinero y objetos de metales preciosos.
7. Pegar en las paredes, ventanas y puertas, impresos, fotos, sabanas, toallas, o cualquier otro material que obstaculice la visibilidad e inspección en las celdas.
8. Poseer teléfonos móviles, cámaras fotográficas y de vídeo, computadoras, buscadores de personas, grabadoras y medios técnicos de comunicación de cualquier naturaleza; así como, todos aquellos objetos que a criterio del Director General del Sistema Penitenciario, vulneren la seguridad interna en los centros penitenciarios.
9. Usar aretes, realizar tatuajes, así mismo o a otros internos.
10. Irrespetar el toque de silencio.
11. Dirigirse de forma inadecuada a las autoridades penitenciarias, visitantes e internos.

12. Sostener relaciones homosexuales.
13. Mantener relaciones heterosexuales sin autorización previa.
14. Lavar o limpiar pertenencias de otros internos.

Artículo 155.- Clasificación de las Infracciones. Se considera infracción, aquel acto provocado u omitido por el interno, que contravengan las prohibiciones y obligaciones previamente establecidas en la Ley, el presente Reglamento y los Manuales de Procedimientos de Reeducción Penal, Orden Interior y Seguridad Penal, dadas a conocer oficialmente.

Las infracciones pueden ser: leves, graves y muy graves.

Artículo 156.- Infracciones Leves:

1. Alterar el orden sin consecuencia para el normal desarrollo de las actividades reeducativas, distribución de alimentos y sesiones al sol.
2. Alterar la formación u orden establecido al ser conducido dentro o fuera del penal.
3. Organizar, promover o participar en juegos de azar.
4. Poseer, hacer circular dinero y objetos de metales preciosos.
5. Desarrollar apuestas en eventos deportivos o recreativos.
6. Vender, comprar o cambiar artículos u objetos.
7. Mantener medicamentos sin la debida prescripción y control médico del Centro Penitenciario.
8. Tener libros, revistas o cualquier material que induzca a la violencia o material bibliográfico de carácter pornográfico.
9. Pegar en las paredes, ventanas y puertas, impresos, fotos, sábanas, toallas, o cualquier otro material que obstaculice la visibilidad e inspección en las celdas.
10. Lavar o limpiar pertenencias de otros reclusos.
11. Usar aretes, realizar tatuajes a sí mismo o a otros internos.
12. Dirigirse a las autoridades penitenciarias, visitantes y otros internos de manera inadecuada.
13. No mantener en condiciones higiénicas y orden las celdas y el área de trabajo.
14. Incumplir las disposiciones establecidas para los recuentos, cotejamiento físico, registro personal, requisas y otros tipos de controles.

Artículo 157.- Infracciones Graves:

1. Elaborar, poseer, traficar, almacenar, introducir o ingerir bebidas espirituosas.
2. Comunicarse telefónicamente sin autorización.

3. Dejar de asistir injustificadamente a las actividades laborales, de instrucción escolar o de capacitación técnica a las cuales se haya integrado voluntariamente.
4. Agredir verbal o físicamente a internos, funcionarios o visitantes, sin que dicha acción constituya falta penal.
5. Atentar contra las autoridades penitenciarias, visitantes e internos, con claros propósito de causarles daño.
6. Participar en riña, sin que las consecuencias se consideren falta penal.
7. Hurtar pertenencias de internos o bienes asignados cuando no constituyan falta penal.
8. Destrucción dolosa de bienes puestos a su disposición, propiedad del centro penitenciario.
9. Resistencia pasiva ante la orden de los funcionarios penitenciarios en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 158.- Infracciones Muy Graves:

1. Resistencia pasiva o activa ante las órdenes del personal penitenciario en el ejercicio de sus funciones.
2. Introducción, posesión, almacenamiento, tráfico, trasiego y consumo de estupefacientes psicótropicos y otras sustancias controladas.
3. Elaboración y tenencia de armas de fuego, armas blancas, cortantes, punzantes, lacerantes y contundentes.
4. Intentos de fugas y fugas frustradas.
5. Instar al desacato de órdenes de las autoridades penitenciarias.
6. Intimidar y agredir a otros internos con el fin de imponer supremacía de grupo (pandilla o banda).
7. Inducir a participar en huelga de hambre, amotinamiento y disturbios.
8. Intento de secuestro a autoridades penitenciarias y civiles.
9. Agresión física a las autoridades penitenciarias y/o visitantes con consecuencia que constituyan falta penal o delito.
10. Agresión física entre internos con consecuencias que constituyan falta penal o delitos.
11. Participaren riña tumultuaria.
12. Hurto agravado por violencia o intimidación de pertenencias de internos o bienes asignados que se cometan en grupo.

Artículo 159.- Infracciones. En los casos que las infracciones constituyan falta o delitos, se aplicarán las medidas administrativas que correspondan, sin perjuicio que sea remitido ante la autoridad competente.

Artículo 160.- Sanciones. Las sanciones son las medidas que se aplican a los internos, ante la trasgresión a la Ley, el presente Reglamento, Manual de Procedimiento de Seguridad Penal, Orden Interno y Reeducción Penal.

Artículo 161.- Clasificación de las Sanciones. Las sanciones se dividen en leves, severas y muy severas.

1. Leves

1.1 Amonestación verbal: Privada.

Ante su contingente.

Ante su familia.

1.2 Amonestación escrita.

1.3 Suspensión de actividades recreativas, deportivas y artísticas, hasta por dos veces consecutivas.

1.4 Suspensión temporal del área de trabajo, que no exceda de diez días.

2. Severas

2.1 Suspensión de permisos, hasta por dos veces consecutivas.

2.2 Suspensión temporal del área laboral, hasta por seis meses.

2.3 Suspensión de actividades recreativas, deportivas y artísticas, hasta por seis veces.

2.4 Internamiento en celda bajo candado, hasta por 30 días.

2.5 Aplazamiento en progresión del Régimen de 3 a 6 meses.

3. Muy Severas

3.1 Suspensión de permisos, hasta por tres veces consecutivas.

3.2 Suspensión del área laboral de 6 meses a un año.

3.3 Regresión en régimen.

3.4 Internamiento en celda individual, hasta por 30 días.

3.5 Ubicarlo en contingente de seguridad, hasta por 6 meses.

Artículo 162.- Procedimiento para la aplicación de sanciones. El procedimiento para la aplicación de sanciones es el siguiente:

1. El oficial de reeducación penal del centro penitenciario, al tener conocimiento de la infracción cometida por un interno, elabora el reporte operativo y lo entrega al Jefe de Departamento de

Reeducación Penal, quién a su vez lo presenta en el término de 48 horas al presidente del equipo interdisciplinario.

2. El equipo interdisciplinario informará al interno en un plazo de 24 horas después de haber recibido el informe de la infracción que se le atribuye y escuchará los argumentos en su defensa; posteriormente,

3. El equipo interdisciplinario valora y determina la sanción a aplicar, la que será expuesta al Director y/o Sub Director del centro penitenciario, el cual la aprobará o denegará por escrito, en un plazo no mayor de tres días hábiles.

4. Cuando se trate de sanciones leves, contenidas en los numerales 1.1, 1.2 y 1.3 del artículo 161, numeral 1), se excluye este procedimiento, siendo facultades del Director del Centro, Jefe de Reeducación Penal y Jefe de Sección / Galería, la aplicación de estas medidas.

5. En caso de flagrante falta penal, administrativa o delito, se tomarán medidas preventivas mientras el equipo interdisciplinario resuelve la medida a aplicar.

Cabe el recurso de revisión ante el Juez de Ejecución de la Pena contra toda sanción disciplinaria que se aplique a un interno, de conformidad a lo establecido en el arto. 337 del Código Procesal Penal, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nos. 243 y 244 del 21 y 24 de diciembre de 2001 respectivamente.

En los casos de las sanciones que conllevan internamiento en celda individual y ubicación en el contingente de seguridad, ésta se debe aplicar previa autorización escrita por el Director del centro penitenciario; el médico del centro penal realizará chequeo médico al interno y visitará todos los días a los internos que se encuentran en esta condición.

Artículo 163.- Las medidas de internamiento en celda individual o ubicación en Contingente de Seguridad, no serán aplicadas a los adolescentes y a las privadas de libertad embarazadas y lactando, hasta 12 meses después del parto y a las que tuviesen a los hijos consigo.

En el caso de los adolescentes se procederá de conformidad con el arto. 213 del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley No. 287, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 97 del 27 de mayo de 1998.

Artículo 164.- Recurso de Revisión Administrativo Penitenciaria. Sin perjuicio del Recurso de Revisión de que trata el párrafo final del arto. 162 del presente Decreto, todo interno que es sancionado tiene derecho a pedir la revisión de la sanción impuesta ante el Director del Centro Penitenciario, para lo cual se establece el siguiente procedimiento:

1. La interposición del recurso de revisión penitenciaria debe presentarse en término de 24 horas, a partir de la notificación de la sanción por el equipo interdisciplinario. Esta debe ser tramitada por el interno o su familiar, por escrito de forma individual, con el nombre del interno o familiar reclamante.

2. La solicitud del recurso de revisión penitenciaria se presentará ante el Director del Centro Penitenciario quien ratificará, reformará o revocará la sanción en un período no mayor de cinco días hábiles después de la presentación. La sanción no se ejecutará sin antes haberse resuelto la revisión, salvo por razones de seguridad o de flagrante falta penal, administrativa o delito.

3. Las vías para que el interno pueda hacer llegar a la instancia superior la petición del recurso de revisión penitenciaria, serán los siguientes:

1. Jefe de Reeducción Penal.
2. Jefe de Sección /Galería.
3. Oficial de Contingente.

En caso que sean los familiares los que interpongan el recurso de revisión penitenciaria, será el Director del Centro Penitenciario o a quién este designe, el que se encargará de recibir el mismo.

Artículo 165.- De las Peticiones y Quejas. Sin perjuicio del derecho a formular peticiones y quejas ante las autoridades competentes, los internos podrán dirigir éstas ante el Director del Centro Penitenciario, en aquellos asuntos que sean estrictamente de competencia de la administración penitenciaria.

A tal efecto, el Director del Centro Penitenciario, en un plazo de cinco días hábiles resolverá lo que estime pertinente.

CAPÍTULO XI

De los Estímulos

Artículo 166.- De los Estímulos. Con el fin de fomentar la autodisciplina y participación de los internos en las diversas actividades reeducativas, el Sistema Penitenciario, a través de los centros penitenciarios, impulsa políticas y programas de estímulo.

Artículo 167.- El estímulo es un reconocimiento que se aplica de manera individual o colectiva, a los internos que cumplen con los parámetros establecidos.

Artículo 168.- Otorgamiento. El Director del centro penitenciario otorga los estímulos individuales y colectivos aprobados por el equipo interdisciplinario a propuesta del Jefe de Reeducción Penal del Centro Penitenciario.

Artículo 169.- Parámetros. El estímulo individual se otorgará atendiendo los siguientes parámetros:

1. Disciplina y conducta.
2. Ordenamiento de sus pertenencias y aseo personal.
3. Grado de relación con el colectivo.
4. Comportamiento y rendimiento en la instrucción escolar y/o capacitación.
5. Asistencia y participación en la instrucción general.
6. Participación en actividades deportivas y artísticas.
7. Incorporación al trabajo.

Artículo 170.- Parámetros para el otorgamiento de Estímulos colectivos. El estímulo colectivo se otorgará al contingente o sección / galería, basado en los siguientes parámetros.

1. Disciplina y conducta del contingente.
2. Orden, higiene y limpieza de locales, en que se encuentra el contingente.
3. Participación en actividades artísticas y deportivas.

4. Incorporación del contingente al trabajo.
5. Participación y rendimiento en instrucción escolar y/o capacitación.
6. Participación en instrucción general.

Para los internos ubicados en el Régimen de Adaptación no se tomará en consideración el numeral 4).

Artículo 171.- Los porcentajes asignados a cada uno de los parámetros establecidos en los artículos 169 y 170 del presente Reglamento, se definen en el Manual de Procedimientos de Reeducción Penal.

Artículo 172.- Período. El período para otorgar estímulos individuales será trimestral y los colectivos de forma semestral.

Artículo 173.- Estímulos Individuales:

1. Entregar reconocimiento por escrito con copia al expediente, que se dará a conocer en privado, ante el contingente o familiares del interno.
2. Obsequiar libros ilustrativos con dedicatoria a los internos.
3. Otorgar progresión al régimen inmediato superior en forma anticipada, cuando haya cumplido el 85 % de permanencia en el régimen que se encuentra, esto se aplicará en el Régimen Semi-Abierto y Abierto.
4. otorgar visita familiar adicional.
5. Otorgar visita conyugal adicional.
6. Otorgar visita conyugal nocturna.
7. Otorgar permisos de salida adicional, por un período comprendido, entre las 24 y 72 horas a los internos ubicados en régimen Semi-Abierto y Abierto.
8. Conceder permisos de salida por una semana a los internos ubicados en Régimen Abierto.
9. Suprimir de la Libreta de Control Individual una, varias o todas las sanciones impuestas antes del período evaluado.
10. Conceder salida a actividades recreativas, culturales, artísticas y deportivas fuera del área penal.

Artículo 174.- Estímulos colectivos:

1. Entregar reconocimiento por escrito al contingente o galería ante toda la población penal.
2. Autorizar la realización de una actividad artística, cultural, al contingente o galería.
3. Otorgar horas extras de recreación o de televisión al contingente o galería.

4. Priorizar al contingente o galería en la entrega de alimentos, artículos de higiene personal o recreativos que hayan sido donados.

5. Otorgar visita familiar adicional para el contingente o galería.

Artículo 175.- Registro de estímulos. Todo estímulo otorgado a un interno debe registrarse en la Libreta de Control Individual.

CAPÍTULO XII

Trabajo Penitenciario

Artículo 176.- Trabajo penitenciario. El trabajo es la actividad principal para el desarrollo del ser humano, constituye el elemento fundamental en el proceso reeducativo del interno, los cuales se integrarán voluntariamente al trabajo en las distintas áreas laborales, las que estarán determinadas por las condiciones que tengan los centros penitenciarios y/o por las coordinaciones que establezcan con otras instituciones. Estas áreas son: artesanales, industriales, agropecuarias, servicios, educativas, entre otras.

Artículo 177.- Indemnización. El Sistema Penitenciario establece para las Instituciones y/o empresas que empleen a los internos, indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en condiciones similares a las que dispone el Código Laboral para cualquier trabajador.

Artículo 178.- Salario. La remuneración salarial de los internos trabajadores se rige por la legislación laboral vigente, a excepción de los internos incorporados a tareas de conservación, mantenimiento, aseo y ornato del centro penitenciario u otras actividades en beneficio de la población penal.

CAPÍTULO XIII

De la Higiene y Seguridad Ocupacional

Artículo 179.- Medidas preventivas. Los centros penitenciarios deben adoptar las medidas preventivas necesarias y adecuadas para proteger la vida y la salud de los internos trabajadores, acondicionando las instalaciones físicas y proveyendo el equipo de trabajo necesario para reducir y eliminar los riesgos profesionales en los lugares de trabajo.

Artículo 180.- Condiciones laborales. Los Directores de centros penitenciarios, cuando realicen contratos de trabajo de prestación de servicios con empresas o particulares con mano de obra de internos, dentro o fuera del centro penitenciario, tienen la responsabilidad de supervisión y custodia, garantizando que en estos contratos se observen las disposiciones relativas a las condiciones de salud, higiene y seguridad ocupacional, así como los riesgos profesionales contemplados en el Código del Trabajo.

CAPÍTULO XIV

Prohibiciones a Visitantes

Artículo 181.- Prohibiciones a visitantes. Queda estrictamente prohibido a los visitantes de internos:

1. Irrespetar a las autoridades penitenciarias.
2. Presentarse en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias controladas.
3. Ingresar cualquier tipo de armas al centro penitenciario.

4. Introducir al centro penitenciario bebidas espirituosas, estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias controladas.
5. Introducir medicamentos no autorizados por el jefe de servicios médicos del centro penitenciario.
6. Introducir objetos valiosos de uso personal como joyas o análogos.
7. Retirarse del centro penitenciario antes de la hora de salida establecida, cuando se trate de visita conyugal nocturna.
8. Introducir libros o materiales con contenido pornográfico o violento.
9. Introducir aparatos de comunicación y electrodomésticos sin autorización.
10. Introducir, sin autorización, material para artesanía y manualidades.
11. Presentarse vestido inadecuadamente.
12. Botar basura en las áreas de atención al público y visitas.
13. Entregar dinero a los internos.

Artículo 182.- La violación a lo establecido en el artículo anterior, conllevará:

1. Advertir o amonestar al visitante del interno cuando por primera vez viole lo estipulado en los numerales 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 en caso de reincidencia se interrumpirá la visita y suspenderá la próxima inmediata.
2. Interrupción inmediata de la visita cuando se incurra en las prohibiciones de los numerales 2, 3 y 4, sin perjuicio de interponer denuncia ante la autoridad competente cuando se trate de estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias controladas. En caso de reincidencia, se le suspenderá el derecho de visita al involucrado hasta por 6 meses.

Artículo 183.- Los Directores de los Centros Penitenciarios garantizarán que en el local de atención, trámite y áreas de visitas de cada centro penitenciario, se ponga en lugar visible los requisitos para visitas, planes de visita y prohibiciones a los visitantes y pérdida del derecho de los mismos.

CAPÍTULO XV

Orden Interior

Artículo 184.- Orden Interior. Es el Departamento de la Especialidad de Educación Penal encargado de garantizar el cumplimiento de las normas legales, disposiciones administrativas, seguridad interna, la aplicación de las medidas y dispositivos de seguridad que regulan el orden, la disciplina y la convivencia pacífica y ordenada de los privados de libertad en los centros penitenciarios.

Artículo 185.- Seguridad interna. Para garantizar el orden interior se establecen las medidas y dispositivos que regulan la custodia y las actividades de los privados de libertad en la convivencia de estos, con el propósito de garantizar la ejecución del tratamiento penitenciario dentro de las instalaciones.

Artículo 186.- Funciones. El Jefe del Departamento de Orden Interior elabora, dirige y ejecuta el cumplimiento de los planes operativos, de seguridad en las actividades internas de la población penal referidas a toma de sol, actividades deportivas, recreativas, religiosas, llamadas telefónicas,

recuentos, cotejo físico y la compartimentación de la población penal, de acuerdo a lo establecido por el equipo interdisciplinario.

Artículo 187.- Registro y Requisa. Los funcionarios del orden interior, tienen la facultad de requisar y registrar a los internos, sus pertenencias, lo mismo que vituallas o paquetes introducidos al centro penitenciario por sus familiares a las instalaciones del mismo, con el fin de impedir la introducción y extracción de armas en general, municiones, explosivos, estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias controladas y demás objetos prohibidos que pongan en peligro la seguridad interna y externa del centro penitenciario, de los privados de libertad, funcionarios penitenciarios y visitantes. Para este fin se hará uso de los medios técnicos como: clavos, esposas, aerosoles, bastones eléctricos, detectores de metales, escudos, guantes, cascos, chalecos, técnica canina, cámaras de circuito cerrado y otros que sean necesarios. Así mismo se registrarán y requisarán a los visitantes y sus paquetes con el debido respeto a su dignidad. El registro y requisa se efectuará por funcionarios penitenciarios del mismo sexo.

Artículo 188.- Requisa personal. El registro y la requisa se llevará a cabo en los privados de libertad, ropa, pertenencias, celdas, ventanas, techos, paredes, áreas y espacios por donde circulan o permanecen éstos. Asimismo, se registrarán y requisarán a los visitantes y los paquetes que traen consigo.

Cuando se presuma que algún visitante pretende introducir o extraer armas, drogas o cualquier objeto prohibido, se procederá al registro y requisa personal, en cuyo caso, ésta se ejecutará por funcionarios del mismo sexo, debiendo prestársele el debido respeto a su dignidad humana.

Artículo 189.- Modalidades de requisa. Las modalidades de registro y requisa son: general o parcial, a su vez, cada una de ellas puede ser ordinaria, extraordinaria o especial.

Artículo 190.- Planificación. Las requisas se ejecutarán de acuerdo a una planificación mensual elaborada por el Jefe de Orden Interior y aprobada por el Director del Centro Penitenciario.

Artículo 191.- Al salir o entrar los internos de su celda, se les registrará individualmente con el fin de detectar y ocupar cualquier objeto prohibido de conformidad con la Ley, el presente Reglamento y el Manual de Procedimiento del Orden Interior.

Artículo 192.- De la ocupación de objetos. Cuando los internos ingresan al centro penitenciario serán registradas y requisadas todas sus pertenencias, ocupándose el dinero, objetos de valor, joyas y objetos prohibidos, los que se depositarán en un lugar destinado exclusivamente para tal fin, debiendo elaborarse la correspondiente Acta de Ocupación, en original y copia que serán firmadas por el interno, entregándose la copia al mismo.

Las pertenencias ocupadas serán entregadas a su familiar, persona que designe el interno o al mismo hasta su excarcelación. Cuando se entreguen al familiar o persona designada se hará en presencia del interno.

Artículo 193.- Si al momento de realizar el registro o requisa de los internos, se encuentra en poder de los mismos objetos prohibidos, se deberá levantar Acta de Ocupación, donde se reflejará lo siguiente;

1. Fecha de ocupación.
2. Nombre del interno propietario del objeto.
3. Descripción, cantidad y estado en que se encuentra el objeto ocupado.

4. Autoridad ejecutora de la requisita.
5. Firma del interno.
6. Firma del familiar (una vez que reciba el objeto).

Artículo 194.- Control de tarjetas. Corresponde a Orden Interior, elaborar, actualizar y controlar las tarjetas de control físico de los privados de libertad en los centros penitenciarios.

Artículo 195.- Autorización de movimientos de internos. El movimiento de internos de celda o galería, es autorizado única y exclusivamente por el Director del Centro Penitenciario, esta autorización debe ser por escrito, refiriendo en la misma el motivo del movimiento.

CAPÍTULO XVI

De la Carrera Penitenciaria

Artículo 196.- Carrera penitenciaria. Son las diferentes etapas de la vida laboral de los funcionarios penitenciarios organizada y regulada por medio de los diversos procesos de selección, formación, capacitación, promoción y profesionalización; respondiendo a las necesidades de la institución y a las expectativas de los funcionarios.

Artículo 197.- Clasificación del personal. El personal del Sistema Penitenciario se clasifica de la siguiente forma:

1. Personal Penitenciario.
2. Personal Administrativo.

Los funcionarios ubicados en ambos cargos provienen de la Carrera Penitenciaria, pudiendo ubicarse indistintamente en la parte administrativa y operativa, respetando los parámetros establecidos en la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 198.- Jerarquía. La jerarquía está determinada por la denominación del cargo que ocupe el funcionario dentro de la institución, de conformidad con el artículo 121 de la Ley.

Artículo 199.- Distintivos y simbología. El Director General del Sistema Penitenciario Nacional, emitirá la disposición pertinente para establecer los distintivos y simbología de las denominaciones penitenciarias, la que deberá ser ratificada por el Ministro de Gobernación.

Artículo 200.- Nombramiento del personal. El nombramiento del Director General, Sub-Directores Generales e Inspector General del Sistema Penitenciario Nacional, se oficializará mediante Acuerdo Ministerial y será el Ministro de Gobernación quien les tome la Promesa de Ley.

El nombramiento de los Directores de Especialidades Nacionales, Directores de órganos Nacionales de Apoyo, Directores y Sub- Directores de Centros Penitenciarios, se efectuará mediante disposición del Director General, quien a su vez les tomará la promesa de Ley.

Artículo 201.- Los jefes de Departamentos, Oficina, Sección, Unidad, Oficiales y personal de base, serán nombrados por el Director General del Sistema Penitenciario, a propuesta de los jefes superiores respectivos.

Artículo 202.- Corresponde a la División de Personal garantizar que se cumplan los requisitos establecidos para todos los nombramientos.

Artículo 203.- Del ingreso del personal. El Director General del Sistema Penitenciario, para el ingreso del personal, lo seleccionará mediante convocatoria pública a través de concurso por oposición, garantizando los principios de igualdad de oportunidades, capacidad, méritos e idoneidad de los convocados.

Artículo 204.- La convocatoria pública se realizará por medio de comunicación oral, audiovisual o escrita y debe contener la siguiente información: plazas vacantes, retribuciones económicas, descripción del cargo, localización geográfica y requisitos indispensables de los candidatos.

Artículo 205.- Para el ingreso al Sistema Penitenciario Nacional, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadano nicaragüense de comprobada honradez.
2. Haber aprobado, al menos, el III año de educación secundaria.
3. Presentar certificado médico que acredite estar apto física y mentalmente.
4. Satisfacer los requisitos de edad y de carácter académico que exige el cargo al que está optando.
5. No tener antecedentes penales, ni estar siendo procesado por los Tribunales de Justicia.
6. Someterse y aprobar los exámenes de selección.
7. Aprobar el Curso Elemental Penitenciario, impartido en la Escuela para Estudios Penitenciarios del Sistema Penitenciario Nacional.

Artículo 206.- Verificación. Una vez concluido el proceso de verificación de la documentación, selección y aprobado el Curso Elemental Penitenciario, se procederá a la contratación del personal.

Artículo 207.- Consultorías. En los casos de Asesoría y/o Consultoría, el Sistema Penitenciario Nacional, podrá proponer al Ministro de Gobernación la contratación de profesionales y técnicos para la ejecución de trabajos específicos, todo de conformidad a lo establecido en la Ley No. 323, Ley de Contrataciones del Estado, sus reformas y reglamento.

Si este personal contratado solicita ingresar en la carrera penitenciaria, podrá ingresar a la misma, cumpliendo con los requisitos establecidos para tal fin, siendo la denominación a la que podrán optar, la de Sub-Alguacil, debiendo renunciar de previo a su calidad de consultor.

Artículo 208.- Promoción. Es el movimiento en la vida laboral del funcionario penitenciario a un cargo inmediato superior al que desempeña. Podrá efectuarse al cumplir con los requisitos del cargo teniendo como condición, el interés de la Institución y la evaluación al desempeño.

Para que el funcionario sea promovido, se deberá tomar en cuenta además de los requisitos establecidos en el artículo 130 de la Ley, los años de servicios y experiencia.

Artículo 209.- Rotación. Es el proceso por medio del cual se traslada al funcionario a un cargo equivalente al mismo nivel de complejidad y responsabilidad que desempeña al momento de efectuarse el movimiento.

Artículo 210.- Zonaje. Cuando por interés de la Institución, se produzca una rotación que implique un traslado, se deberá garantizar el incentivo por zonaje.

Artículo 211.- Comisión de servicio. Los funcionarios penitenciarios podrán ser ubicados en comisión de servicio, la cual será temporal o por necesidades circunstanciales.

La comisión de servicio no afecta la carrera penitenciaria del funcionario.

Artículo 212.- Rotación anticipada. Para la rotación de un funcionario antes del tiempo establecido en el presente Reglamento, la autoridad facultada lo hará por razones de servicios o cuando un cargo se encuentre vacante.

Artículo 213.- Una vez aprobada la rotación por los niveles autorizados, la División de Personal elaborará y enviará los movimientos respectivos para su ejecución.

Artículo 214.- Permanencia del Cargo. El Director General del Sistema Penitenciario Nacional, es nombrado por 5 años no prorrogables.

Los Sub-Directores Generales e Inspector General, son nombrados por 5 años prorrogables por un periodo más.

Los Directores de Especialidades, órganos Nacionales de Apoyo, Directores y Sub-Directores de Centros Penitenciarios, son nombrados por 3 años prorrogables por un periodo más.

Los Jefes de Departamentos, Oficinas, Secciones y Unidades, son nombrados por 3 años prorrogables por un periodo más.

Los Oficiales son nombrados por 2 años prorrogables.

Artículo 215.- Democión. Es el movimiento en la vida laboral del funcionario penitenciario, ordenado para ocupar un cargo inferior al que desempeña; para ello el superior jerárquico deberá elaborar la evaluación al desempeño, en donde se determinan las causas que motivaron la misma, siendo aprobado por el Director General.

Este movimiento implica la disminución de su responsabilidad, salario y denominación.

Artículo 216.- Baja. Son los egresos de carácter definitivo del personal penitenciario que presta servicio a la institución, de acuerdo a las causales establecidas en el artículo 132 de la Ley.

El personal que causa baja por muerte, permanecerá en nómina de activos tres meses después de su fallecimiento, plazo en que se dará el ingreso al Régimen de Seguridad Social y Desarrollo Humano, entregándosele el salario al beneficiario seleccionado anteriormente por el funcionario penitenciario.

Artículo 217.- Retiro: Causan retiro el Prefecto, Sub-Prefecto y Alcaldes, cuando han agotado toda posibilidad de promoción y rotación en la Institución, sin haber cumplido la edad requerida para jubilarse.

Artículo 218.- De conformidad con la Ley y el presente Reglamento, el Ministro de Gobernación es el facultado para disponer el retiro del Sub-Prefectos y Alcaldes, a propuesta del Director General del Sistema Penitenciario.

Artículo 219.- El personal penitenciario que pase a retiro, ascenderá a la denominación superior, como un reconocimiento de honor al desempeño de sus funciones, tal reconocimiento no será considerado al momento de definir los haberes por retiro.

Artículo 220 Haberes por retiro. Los haberes por retiro serán la suma de todos los beneficios y prestaciones económicas y materiales, que por razones del cargo y la denominación, ostente el funcionario penitenciario al momento del retiro.

Artículo 221.- El retiro de los funcionarios penitenciarios, se hará efectivo una vez asegurados los haberes por retiro. El Ministro de Gobernación, deberá incluir la partida asignada al Sistema Penitenciario en el Presupuesto General de la República.

Artículo 222.- Condecoraciones. Las condecoraciones se establecen como un reconocimiento al funcionario por el tiempo de servicio prestado a la Institución, otorgándose las mismas a todos aquellos funcionarios de la carrera penitenciaria que se hayan destacado en el trabajo.

Artículo 223.- Se otorgarán condecoraciones a las personas naturales y jurídicas que hallan contribuido en forma destacada al desarrollo y fortalecimiento de la Institución.

Artículo 224.- Medallas. En cumplimiento al artículo 15, numeral 14 de la Ley, el Director General del Sistema Penitenciario Nacional, otorgará medallas honoríficas, de aniversario y años de servicios, estas son las siguientes.

1. Son medallas honoríficas:

1.1 Medalla al Valor "Ernesto Vindell Acuña"

1.2 Medalla al Mérito "Alfonso Quiroz Gómez"

1.3 Medalla al Cumplimiento del Servicio.

2. Son Medallas "Aniversario", las que se otorgan a los funcionarios penitenciarios fundadores del Sistema Penitenciario Nacional:

2.1 25 Aniversario.

2.2 30 Aniversario

2.3 35 Aniversario

3. Son Medallas de "Años de Servicio":

3.1 5 años de Servicios.

3.2 10 años de servicios.

3.3 15 años de servicios.

3.4 20 años de servicios.

3.5 25 años de servicios.

3.6 30 años de servicios.

Artículo 225.- Las medallas otorgadas por el extinto Ministerio del Interior y Ministerio de Gobernación, constituyen medallas honoríficas a quienes les fueron conferidas.

Artículo 226.- Los parámetros y procedimientos para el otorgamiento de condecoraciones, se establecerán en normativa interna.

CAPÍTULO XVII

Centro Nacional de Producción Penitenciaria

Artículo 227.- El Centro Nacional de Producción Penitenciaria, de conformidad a lo establecido en el arto. 79 de la Ley, es un ente desconcentrado del Ministerio de Gobernación, con capacidad propia para adquirir obligaciones y derechos.

Para el cumplimiento de sus fines y objetivos, la Junta Directiva dictará su normativa interna de funcionamiento en un plazo de 90 días a partir de la publicación del presente reglamento en La Gaceta, Diario Oficial.

CAPÍTULO XVIII

Del Patronato Nacional Para Privados de Libertad del Sistema Penitenciario Nacional y la Participación Comunitaria

Artículo 228.- Patronato Nacional. El Patronato Nacional para privados de libertad, es un organismo de apoyo a la administración penitenciaria y de gestión comunitaria en beneficio de los privados de libertad.

Artículo 229.- Junta Directiva. El Ministro de Gobernación seleccionará a los miembros de la Junta Directiva del Patronato Nacional para privados de libertad del Sistema Penitenciario y la participación comunitaria.

Artículo 230.- Normativa interna. Además de lo establecido en la Ley, la Junta Directiva dictará su normativa interna de funcionamiento en un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento.

CAPÍTULO XIX

Consejo de Género

Artículo 231.- Consejo de Género. De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley, el Director General del Sistema Penitenciario Nacional mediante disposición, establecerá el funcionamiento interno del Consejo de Género.

CAPÍTULO XX

De las Disposiciones Transitorias y Finales

Artículo 232 Libertad de culto. Las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, garantizarán la libertad de culto de los internos, sin perjuicio del derecho de quienes no deseen participar en ningún tipo de actividades de tal naturaleza.

Para la práctica de las actividades religiosas, las autoridades del Sistema Penitenciario deberán establecer locales y horarios determinados, calendarizar la participación de las diferentes iglesias reconocidas legalmente.

Artículo 233.- Reglamento Disciplinario del Personal. Se faculta al Ministro de Gobernación a emitir el Reglamento Disciplinario del Personal del Sistema Penitenciario.

Artículo 234.- Aniversario. En conmemoración de los 25 años del Sistema Penitenciario Nacional, se establece como fecha de aniversario, el 27 de Octubre de cada año.

Artículo 235.- Reglamento Académico. El Director General del Sistema Penitenciario, dispondrá de un plazo de 90 días para dictar el Reglamento Académico de la Escuela de Estudios Penitenciarios.

Artículo 236.- Manuales de Procedimientos. El Director General del Sistema Penitenciario, dictará los Manuales de Procedimientos y normativas administrativas que regulan el funcionamiento y la actividad del Sistema Penitenciario Nacional, siendo éstos los siguientes:

1. Manual de Procedimiento de Control Penal.
2. Manual de Procedimiento de Seguridad Penal.
3. Manual de Procedimiento de Reeducción Penal.
4. Manual de Procedimiento de Orden Interior.
5. Normativas de Salud.
6. Normativa de Condecoraciones, Uniformes, distintivos, escudo, bandera y denominaciones.

Dichos manuales deberán contar con la aprobación del Ministro de Gobernación.

Artículo 237.- Formas especializadas y auxiliares. Las formas especializadas y auxiliares de las especialidades serán establecidas en los Manuales de Procedimientos de las mismas.

Artículo 238.- Reglamentos Específicos y Manuales. En los casos de los Reglamentos específicos y los Manuales de Procedimientos, sus disposiciones, en ningún caso, podrán ser contrarias a la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 239.- Creación de la División de Prensa y Relaciones Públicas. La División de Personal creará de acuerdo a las facultades establecidas en el presente Reglamento, la División de Prensa y Relaciones Públicas.

Artículo 240.- Deróguese la Orden No. 054/88, "Reglamento Disciplinario del Ministerio del Interior" y todas aquellas órdenes, disposiciones y normativas administrativas que regulan el quehacer penitenciario.

Artículo 241.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el día doce de marzo del año dos mil cuatro.- ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, Presidente de la República de Nicaragua.- JULIO VEGA PASQUIER, Ministro de Gobernación.